

Cuadernos

Africa América Latina

Revista de SOCOPAZ, N.º 7, enero-abril de 1982

MONOGRAFICO

LAS CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE EN CENTROAMÉRICA

Varia autores

Timothy

México ante su mercado y los Estados Unidos.
Imágenes en el

Armando Hinojosa

Elm. al borde del caos

Georg Frenn Chaves

Fundamentos sociológicos del proyecto democrático
nacional

Carlos López

La guerra contra las: ajuste estratégico en Oriente Medio

Carlos María Gallo

Paramilitares, autodefensas y narcotráfico en
Colombia, 1980-1980

Fernando Martínez

La U.R.S.S. y la revolución sandinista: los estrechos límites
de la solidaridad soviética

Rafael Fariñas

La Unión Soviética y América Latina: del perfil a la política

INDICE

MONOGRAFICO

- | | | |
|---|----|---|
| ¿Los planes de ajuste desajustan la ecología? | 9 | Universidad Centroamericana (Nicaragua) |
| Ajuste estructural y sectores campesinos en El Salvador | 15 | Instituto de Investigaciones Económicas (Universidad de El Salvador) |
| El ajuste estructural en Centroamérica | 25 | Centro de Estudios de Desarrollo Rural (Universidad Libre de Amsterdam) |

NOTAS DE ACTUALIDAD

- | | | |
|---|----|-------------------------|
| México abre su mercado, y los Estados Unidos irrumpen en él | 33 | Tom Barry |
| Zaire, al borde del caos | 43 | Tshimpanga Mata Kabangu |
| Fundamentos sociológicos del proyecto democrático haitiano | 47 | Gerard Pierre-Charles |
| La guerra contra Irak: ajuste estratégico en Oriente Medio | 57 | Carlos Varea |

AVANCES DE INVESTIGACION

- | | | |
|---|----|------------------------|
| Paramilitares, autodefensas y narcoterrorismo en Colombia. 1980-1990 | 73 | Carlos Medina Gallego |
| La U.R.S.S. y la revolución sandinista: los estrechos límites de la solidaridad soviética | 87 | Fernando Harto de Vera |
| La Unión Soviética y América Latina: del perfil a la política | 95 | Hugo Fazio Vengoa |

Cuadernos

Africa América Latina

SUSCRIPCION POR UN AÑO

- España: Suscripción normal 3.000 ptas.
- España: Suscripción de apoyo..... 4.000 ptas.
- Extranjero 40 dólares.



Deseo suscribirme a la revista cuatrimestral
"Africa - A. Latina. Cuadernos".

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

País:

FORMA DE PAGO:

☐ Giro Postal a SODEPAZ

☐ Talón número.....

Recortar y enviar a:
SODEPAZ. C/ Pizarro, 5 - 28004 MADRID

¿Los planes de ajuste desajustan la ecología?

Universidad Centroamericana *

Desde finales de los años 80, la general preocupación por el futuro del medio ambiente mundial y por los recursos naturales de la Tierra llegó a ser tan común que hasta apareció en el discurso oficial de instituciones como el Banco Mundial o la corporación petrolera Shell... La palabra "ambientalista" o "ecologista", que había sido usada inicialmente para calificar a los amantes de la naturaleza que se dedicaban a proteger ballenas o especies de aves exóticas, cubre ahora a mucha más gente: a los que luchan por la sobrevivencia de la selva del Amazonas como pulmón natural del planeta que garantiza su equilibrio térmico, a los que combaten contra los productos industriales que afectan la capa de ozono que envuelve la Tierra, a los que se preocupan por la reforestación de las "tierras arrasadas" por la guerra en Centroamérica, o a los que en Nicaragua protegen nuestras playas de los desechos o nuestro territorio de la "basura tóxica" de las empresas transnacionales.

Pero, mientras el número de personas que se reconocen a sí mismas como ecologistas ha aumentado muchísimo, la tradicional concepción que los que se dedican a los problemas del desarrollo tienen sobre los "problemas ambientales" se ha quedado estancada, sin que logren elaborar una estrategia integral que no sólo tenga en cuenta la preservación de los recursos naturales de la Tierra sino también una justa distribución de esos recursos y un desarrollo ecológicamente sustentable para todos.

En la actualidad, mientras el Banco Mundial y la AID han incorporado ya a sus discursos la causa ecológica, siguen promoviendo proyectos que contribuyen a una seria degradación de la ecología y que no tienen en cuenta las causas fundamentales del deterioro ambiental, por tener como único objetivo la preservación de los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos.

Centroamérica: una región en crisis ecológica

Los abundantes recursos naturales de Centroamérica están desapareciendo. En los últimos 30 años el 60% de sus bosques fue cortado para elaborar carbón o leña, o para dar paso a la extensión del cultivo del algodón, o a los pastos para ganadería o a cultivos de granos básicos. La deforestación continúa extendiéndose: 4 mil kilómetros cuadrados de bosques centroamericanos se pierden cada año. Los bosques cubrían el 75% de la superficie de Costa Rica en 1950. A comienzos de los años 80 esta extensión se había reducido al 30%. Según un reciente informe, el Honduran

* Artículo extraído de la *Revista Envío*, n.º 114, abril de 1991; editada por la U.C.A. Nicaragua.

Research Center estima que durante los últimos años, los contras, los refugiados nicaragüenses y las maniobras militares que hace Estados Unidos en el país destruyeron anualmente 80 mil hectáreas de bosques hondureños.

La deforestación y una política de cultivos intensivos ha provocado una masiva erosión de los mejores suelos de Centroamérica, lo que ha aumentado la sedimentación en lagos y ríos, amenazando así el agua disponible y los recursos pesqueros. Más de la mitad del territorio salvadoreño ha sufrido una seria degradación en sus suelos a causa de la erosión. La deforestación produce también cambios climáticos, que han sometido a la región centroamericana a una serie cíclica de sequías e inundaciones en la pasada década.

Los desechos industriales y los desechos humanos no tratados han contaminado las aguas y el uso y abuso de pesticidas ha envenenado las aguas, los suelos y la atmósfera. Desde mediados de los años 60 y a lo largo de la década del 70, Centroamérica era el principal consumidor per cápita en el mundo de pesticidas, importando el 40% de todas las exportaciones que de estos productos hacían los Estados Unidos. Guatemala registra el más alto nivel de DDT en la leche materna y en el cuerpo humano que se conoce en todo el mundo, 185 veces superior a los límites que señala la Organización Mundial de la Salud como tolerables. Al margen de la guerra, la diarrea provocada por la ingestión de aguas contaminadas o no suficientemente potables es la principal causa de muerte en la región. Sólo 1 de cada 10 salvadoreños tiene acceso al agua potable.

De esta base de recursos naturales, ya tan deteriorados, depende la mayoría de los centroamericanos, que son pobres, para sobrevivir. Esto vincula estrechamente el problema ecológico al contexto socio-económico. Según el Ministro de IRENA (Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente) de Nicaragua, Jaime Incer Barquero, es difícil establecer fronteras en estos temas. "¿Cómo definir qué cosa es un problema ambiental? El ambiente es todo: ambiente es salud, ambiente es combatir la pobreza, ambiente es mejorar la calidad de vida, ambiente es el uso racional de los recursos naturales..."

Las raíces de la crisis

Las dos principales razones históricas de la degradación ambiental de Centroamérica, relacionadas entre sí, son el modelo de desarrollo basado en la agro-exportación y la pobreza que este modelo provoca y profundiza. La militarización de la región, especialmente la que propició Estados Unidos en la década de los 80, debe también ser mencionada por sus consecuencias sociales y ecológicas.

El modelo de desarrollo agro-exportador, basado en una producción extensiva e intensiva dedicada a la exportación provoca una sobre-explotación de los suelos y una sobre-explotación de la mano de obra y asegura beneficios a un sector muy minoritario de la población, el sector terrateniente. La expansión del cultivo del algodón y de la ganadería durante los años 50, 60 y 70 ha sido la causa de la destrucción de miles de hectáreas de bosques.

El algodón se apropió prácticamente de todas las tierras llanas de la costa del Pacífico, desde Guatemala hasta Costa Rica e introdujo el uso masivo de agroquímicos muy dañinos. Todos estos suelos —anteriormente reconocidos por su fertilidad—, despojados desde entonces de sus nutrientes naturales, tardarán años en recuperarse. En Nicaragua, que en 1973 comenzó a ser el 15 exportador mundial de algodón, la deforestación dejó a la región occidental del país a expensas de los estragos del viento y de las lluvias. Las tormentas de polvo sólo empezaron a ser paliadas a comienzos de los 80 con el proyecto de siembra de árboles rompevientos en lugares estratégicos de la región que fomentó el gobierno sandinista. Estas tormentas de polvo eran tan densas que obligaban a los conductores de vehículos a encender las luces en pleno día.

La expansión de la ganadería para la exportación de carne ha destruido también bosques y suelos. Una tercera parte del bosque húmedo de Nicaragua desapareció en los años 70 en la medida en que el país se convertía en el principal proveedor latinoamericano de carne para el mercado de Estados Unidos. En 1980, el 22% de toda la tierra centroamericana se empleaba para pastos, siendo a este rubro al que más tierras se dedicaban en toda la región.

En ambos productos, algodón y carne, la expansión siguió el mismo modelo destructor. Los pequeños campesinos eran expulsados de sus tierras fértiles y forzados a ocupar tierras en otras zonas del país. Estas nuevas tierras fueron deforestadas, no resultaron aptas para la agricultura, pues producían sólo durante 2 ó 3 años y el algodón y el ganado las reclamaban pronto en su expansión, obligando nuevamente a los campesinos a desplazarse en busca de nuevas tierras.

A mediados de los años 70, el privilegiado 4% de la población centroamericana era propietaria del 70% de las tierras, mientras que la inmensa mayoría, el 77%, sólo poseía el 7%. Las estadísticas muestran que en los años 70 un alto porcentaje de propiedades agrícolas —que van desde el 46% del total de las propiedades en Costa Rica hasta el 92% de las de El Salvador— eran tan pequeñas que no servían ni para cubrir las necesidades de subsistencia de una familia. Un informe del Banco Mundial de 1989, sobre Costa Rica, El Salvador y Haití, reconocía que esta desigual distribución de la tierra, que fuerza a los campesinos a emigrar hacia tierras que son malas para el cultivo, unida a la alta tasa de natalidad, es la causa principal de la degradación ambiental en estos países.

Además del daño ecológico que provoca la emigración campesina a tierras agrícolas marginales, la pobreza que provoca un modelo de desarrollo al servicio de una minoría tiene otras consecuencias en el deterioro ambiental. Por carecer de alternativas para una mínima sobrevivencia, los centroamericanos pobres se ven forzados a explotar irracionalmente los recursos naturales. Uno de los mejores ejemplos es el de la leña. La madera es usada en nuestros países en más de un 86% para cubrir necesidades domésticas e industriales. Expertos del IRENA de Nicaragua estiman que sólo en Managua se consumen 50 mil dólares diarios en leña, que se vende en pequeñas cantidades para cocinar en los hogares más humildes, no incluyéndose en esta cantidad el uso industrial. Centenares de managuas cortan diariamente los árboles de su ciudad para tener con qué cocinar o para vender leña en lugares cercanos y así ganar algo para comer.

Los efectos ecológicos directos de los proyectos militares llevados a cabo en Guatemala y en El Salvador son bien conocidos. La metrallas y las bombas han devastado enormes áreas en estos dos países. Grandes extensiones del norte de El Salvador se han convertido virtualmente en un desierto, con cosechas destruidas, pueblos arrasados, bosques quemados y la tierra herida por los cráteres de las bombas. Además de la deforestación y de sus trágicas consecuencias ecológicas, la combinación de bombardeos e incendios ha dañado la productividad de los suelos, dificultando la filtración de agua y disminuyendo así los mantos de aguas subterráneas.

Los efectos ecológicos indirectos de la represión militar tienen que ver con el éxodo de miles de campesinos, desarraigados de sus tierras y de sus recursos de sobrevivencia. En Guatemala, con el objetivo de aislar a los guerrilleros de su base social campesina, el ejército ha forzado a miles de personas a concentrarse en "aldeas estratégicas" cercanas a las ciudades, donde los suelos están muy deteriorados. En El Salvador, los refugiados internos han sobrepoblado ciertas zonas de la costa del país, donde la sobre-explotación de los recursos pesqueros ha causado estragos en la fauna marina. Sólo un ejemplo trágico: en 1982 la deforestación causada por campesinos refugiados sin tierra, en busca de parcelas donde sembrar sus milpas, provocó que unas lluvias torrenciales causaran un alud de las tierras deforestadas por ellos en Monte Bello. El aluvión aplastó a los refugiados que vivían en la base del monte y 700 de ellos murieron.

Los ajustes estructurales: más destrucción y más empobrecimiento

Un reciente informe del Banco Mundial afirma: "Un sano ecologismo ha sido reconocido como elemento fundamental a ser incorporado en los procesos de desarrollo y el Banco Mundial enfatiza ahora la necesidad de una preocupación por el medio ambiente como factor integral de sus actividades". Pero mientras esta retórica ambientalista impregna el discurso del Banco Mundial, el de la AID y el del mismo gobierno norteamericano, todos siguen promoviendo los mismos programas económicos: aunque ahora hablan de ecologismo, los programas no son otra cosa que "más de lo mismo". En el mejor de los casos, ponen parches a algunos problemas ambientales, pero, en general, sirven únicamente para reforzar el injusto orden social de los países y para aumentar su deterioro ecológico.

La fórmula de "ajustes estructurales" impuesta por el FMI y el Banco Mundial a los países latinoamericanos para enfrentar sus crisis económicas exige a los gobiernos que corten sus déficits fiscales con la reducción de empleados estatales, con la congelación de los salarios de éstos, con recortes en los subsidios y con la anulación de los programas sociales. El objetivo es promover la producción de exportación a costa de la producción de consumo interno, eliminar las barreras arancelarias y suprimir toda legislación que desestime la inversión extranjera. El resultado de estos programas está siendo el mismo en todos los países: recesión, desempleo masivo, drástica caída de la producción para el mercado interno, creciente explotación de los trabajadores y de los recursos naturales, des-nacionalización de la economía.

Este tipo de programas de ajuste está minando el sustrato ecológico de los países, uno tras otro. En el frenesí exportador que se trata de imponer, la sobre-explotación de los recursos naturales suele ser una de las soluciones más a la mano. La exportación de madera está dejando peladas las montañas, promoviendo una erosión masiva, secando las fuentes de agua. Los nuevos productos de exportación que se proponen requieren un uso masivo de agroquímicos, los grandes pesqueros arruinan los arrecifes de coral donde viven y se alimentan los peces, y los desechos de las minas están contaminando ríos y mares. Los ajustes estructurales están ajustados para que una élite minoritaria obtenga a corto plazo grandes beneficios.

El ex-funcionario del Banco Mundial, Chandra Hardy, declaró a Interpress Service que los ajustes estructurales "echan la carga más pesada sobre los hombros de los pobres". En un documento de trabajo del Banco Mundial de 1989 se afirma sobre estos programas: "La población situada por debajo de la línea de pobreza sufrirá un daño irreparable en su salud, nutrición y educación". Según Hardy, "aliviar la pobreza mundial no es todavía la principal prioridad de la agenda del desarrollo económico. Eso vendrá después del crecimiento del producto interno bruto, del saneamiento fiscal, de la privatización y de la liberalización de los mercados..." la UNICEF informa que los ingresos familiares promedio se redujeron en América Latina durante los años 80 en un 10%. El ajuste en sí mismo, y no la eliminación de la pobreza, se ha convertido en el objetivo de las instituciones financieras internacionales.

Los ajustes estructurales no enfrentan las raíces de la degradación ambiental ni las de la pobreza y sólo servirán para profundizar ambos males. Según Hardy, las instituciones financieras internacionales "rechazan las condiciones que requeriría un avance en la reducción de las importaciones y en la reducción de las desigualdades sociales. Esa condición sería, por ejemplo, una auténtica reforma agraria. Pero no quieren entrar en eso porque esos son temas demasiado polémicos".

¿Y qué sucede cuando, hechos los ajustes estructurales, los países reciben a cambio nuevos créditos? El Banco Mundial ha sido muy criticado por los ambientalistas a causa de las consecuencias antiecológicas de sus programas. Según el director de un grupo ambientalista canadiense, la nueva conciencia ecológica de estas institu-

ciones no es otra cosa que “continuar con los mismos viejos proyectos de desarrollo plantando algunos arbolitos en sus contornos”.

La producción de no-tradicionales para la exportación

Una de las “nuevas” estrategias de desarrollo que Estados Unidos propone a Centroamérica y el Caribe es la promoción de productos no-tradicionales para la exportación. Fundamentalmente, se trata de flores, plantas verdes de adorno, algunas frutas y vegetales exóticos para el consumo de lujo del mercado norteamericano. Como estos cultivos no son propios de la región, requieren generalmente de capital intensivo y de una gran dosis de fertilizantes o herbicidas para que se aclimaten a las tierras tropicales. La AID ha estimulado a los gobiernos centroamericanos a incentivar estos cultivos no-tradicionales a costa de la reducción de créditos y de precios de garantía para la producción de alimentos básicos. Aun cuando en sus regulaciones la AID establece teóricamente que sus programas deben tener en cuenta el no producir daños ecológicos, la realidad práctica es que los proyectos de la AID están provocando un deterioro ambiental, tanto directo como indirecto, al deteriorar la base de los recursos del país y de la mayoría de la población y al incrementar la pobreza y el número de campesinos sin tierra.

El grupo norteamericano Amigos de la Tierra informa que un crédito de 6 millones y medio de dólares entregados por la AID a Honduras para un proyecto camaronero de exportación fue utilizado de tal manera que los manglares de una extensa zona costera están desapareciendo rápidamente. Los pescadores locales y los campesinos que saben que estos manglares protegen la costa, dan abrigo a la vida marina y sirven de hogar a valiosas especies, han perdido su tradicional medio de vida y han tenido que desplazarse a otras zonas.

En Guatemala, los estudios de varias instituciones muestran que el 100% de las mujeres examinadas en tres departamentos tienen en su leche materna un inaceptable nivel de contaminación por pesticidas. Se sabe también que los cultivos no-tradicionales requieren de un incremento en el uso de estos pesticidas, mayor que el que necesitan otros cultivos. Mientras las exportaciones no-tradicionales se incrementaron en Guatemala en un 23,3% entre 1989 y 1990, la Asociación Guatemalteca de Exportadores No-Tradicionales informó que cantidades significativas de los productos exportados fueron puestos en cuarentena o rechazados directamente por los Estados Unidos, aunque después se vendieron en otro país con menos restricciones sanitarias.

El gobierno de Costa Rica ha reducido los créditos, los servicios y los precios de garantía a la producción del maíz, frijol y arroz —los tres alimentos de la dieta básica— para incentivar la producción de productos no-tradicionales. En este tipo de producción no es fácil que los pequeños campesinos produzcan y comercialicen siempre con éxito. Muchos han sufrido grandes pérdidas, lo que les ha llevado a perder también sus tierras por incapacidad de pagar sus créditos.

Sheldon Annis, antiguo investigador del Consejo de Desarrollo Exterior, afirmó ante el Comité del Congreso norteamericano encargado del problema del hambre, que el creciente empobrecimiento de Centroamérica es un resultado directo de la política de la AID en favor de la producción no-tradicional.

El capital intensivo, los costosos agroquímicos y la sofisticación técnica que requieren, la buena tierra, las conexiones de mercadeo internacional y las complejas instalaciones de almacenaje que necesitan estos nuevos cultivos no son los más apropiadas para lograr un desarrollo armónico de la región. Annis insistió en que esta política incrementa el número de campesinos sin tierra, afecta la producción de los pequeños campesinos y perjudica la producción de alimentos básicos.

La Iniciativa para las Américas

El Plan Bush para América Latina ha sido ya puesto en marcha parcialmente en

Centroamérica a través del programa de pago de la deuda externa llamado “canje de deuda-por-naturaleza”. El objetivo último de este Plan es crear una zona de libre comercio en todo el continente. Actualmente este libre comercio ya se da entre Estados Unidos, Canadá y México. La iniciativa “deuda-por-naturaleza” propone perdonar una pequeña porción de la deuda pública de América Latina estableciendo con este dinero un fondo ecológico. Las reglas para la participación en este programa incluyen el implementar en el país ajustes estructurales, el reformar las leyes internas sobre inversión extranjera para abrir puertas al capital transnacional y el adherirse a un estricto calendario de pagos de la deuda pendiente con la banca privada. Algunas de las consecuencias anti-ecológicas de las políticas de ajuste estructural ya las hemos sugerido.

Una política de puertas abiertas a inversiones extranjeras podría significar la explotación irracional de los recursos naturales en beneficio de empresas e inversionistas de fuera, con la consiguiente destrucción ambiental. Y aunque es cierto que por un lado, el programa disminuye el monto de la deuda pública, por el otro, exige el estricto pago de la deuda privada, con lo que las presiones para lograr ese pago podrían resultar en una indiscriminada explotación de los recursos naturales como medio más rápido y fácil de lograr el dinero necesario para cumplir. Puede aumentar la destrucción con esa lógica cortoplacista de la ganancia inmediata, con esa estricta lógica del mercado que es propia del capitalismo voraz que se está imponiendo a los países subdesarrollados.

Según el Grupo para Políticas Alternativas, con base en Washington, mientras que este plan podría generar fondos para un desarrollo sostenido, no existe en él ni presión ni obligación alguna para que el gobierno que recibe esos fondos implemente una justa canalización de los mismos. Tampoco incluye el plan mecanismos para medir el impacto que en el medio ambiente tiene el ajuste estructural o las nuevas inversiones extranjeras que éste promueve.

El libre comercio que propone el Plan Bush requiere de una flexibilización o de una supresión total de las restricciones impuestas a la inversión extranjera en los países latinoamericanos. Frente al tratado de libre comercio que ya existe entre México y Estados Unidos, diversos grupos ambientalistas norteamericanos han expresado su preocupación porque las restricciones basadas en un respeto al medio ambiente están siendo removidas y porque dar tantas facilidades a los inversores atraerá la instalación de industrias que contaminen más el ambiente o que exploten irracionalmente los recursos naturales, provocando que éstos —incluyendo tierras y aguas— se deterioren aún más de lo que ya están.

El Grupo para Políticas Alternativas concluye que el plan deuda por-naturaleza “ésta claramente diseñado para provocar cambios que lleven a más ajustes estructurales o que promuevan una permanente adhesión a este tipo de políticas”. No existe detrás de este plan ni del Plan Bush en su conjunto ninguna intención altruista ni mínimamente enfocada a un verdadero desarrollo del continente.

Se trata de un intento más de Estados Unidos por salvar su deteriorada situación económica, actuando como “parásito internacional” de otras economías para así mantener sus posiciones hegemónicas.

Ajuste estructural y sectores campesinos en El Salvador

Instituto de Investigaciones Económicas *

Introducción

El objetivo de este trabajo, es analizar los efectos que el programa de ajuste estructural implementado en el país por el gobierno de ARENA, concretado en el Plan de Desarrollo Económico y Social 1989-1994, tiene en los sectores campesinos de nuestro país; específicamente en las cooperativas agropecuarias y en los pequeños y medianos productores. De hecho son los pequeños y medianos agricultores, así como una cantidad de cooperativas, quienes cultivan la mayor parte de los granos básicos en el país; por lo que de manera directa, nos remite a analizar los efectos de las políticas de ajuste en la producción para el consumo interno.

En efecto, este trabajo no está acabado, el ajuste estructural mismo está en marcha, y algunas políticas aún no han sido ejecutadas. De manera que, partiendo de las políticas que se han implementado, que se están implementando o que se van a implementar, y de la realidad campesina, el análisis intenta una aproximación a las consecuencias de su aplicación.

No se pretende hacer un análisis exhaustivo del ajuste estructural, y más bien nos limitaremos y haremos énfasis, sin perder la visión global del ajuste, en los efectos que éste tiene como un todo, así como con sus políticas específicas hacia el sector agropecuario, sobre los pequeños productores y cooperativistas.

Sectores campesinos y realidad agraria

“Las explotaciones campesinas poseen una lógica de funcionamiento cuya finalidad no es la obtención de beneficios acumulables. El objetivo de las unidades productivas campesinas, es la obtención de los ingresos, en dinero o en especie, necesarios para la supervivencia de la familia y la reiniciación del proceso productivo. En consecuencia, la eficiencia de estas explotaciones debe medirse en función del cumplimiento de ese objetivo. Desde este punto de vista, una unidad productiva campesina es eficiente en la medida en que permita a sus miembros obtener los recursos necesarios para la sobrevivencia y para darle continuidad a la producción en sus explotaciones.

Algunas de las características de las explotaciones campesinas son las siguientes:

* Artículo extraído del *Boletín El Salvador: Coyuntura Económica*, n.º 35, Marzo-Abril de 1991; editado por el Instituto de Investigaciones Económicas-Universidad de El Salvador.

- a. La finalidad de la producción campesina es la obtención de los ingresos necesarios para la reproducción y las actividades económicas.
- b. La producción campesina trata, por lo general, de realizar actividades de bajo riesgo, que no requieran grandes inversiones, orientadas al mercado y que le permitan obtener alimentos para su subsistencia.
- c. El empleo de cultivos mixtos, estrategia productiva que le permite equilibrar las variabilidades de los productos agrícolas en el mercado y diversificar los alimentos proporcionados por la explotación agropecuaria.
- d. Los miembros de la unidad productiva (hombres, mujeres y niños) aportan su fuerza de trabajo para el desarrollo de las actividades económicas.
- e. La familia campesina tiende a establecer una especie de fondo común, constituido por los diversos ingresos recibidos por ella, el cual se distribuye de acuerdo con las necesidades de consumo de sus miembros y las exigencias para la reiniciación del proceso productivo" (1).

● Cooperativas de Producción Agropecuaria.

Hasta la década de los 70' el desarrollo del cooperativismo de producción agropecuaria fue exiguo.

A inicios de 1980, existían en el INSAFOCOOP 191 asociaciones agropecuarias inscritas. Pero luego de la implementación de la Reforma Agraria fueron apareciendo una diversidad de cooperativas: con la ejecución del Decreto 154 y 842 se crean 342 cooperativas, con el Decreto 207 aparecen 230 cooperativas, en forma independiente surgen 542 cooperativas, aparecen 42 asociaciones de trabajadores; todo esto en conjunto suman 1.205 asociaciones que nacen en la década de los 80', si le sumamos las ya existentes (191) nos resultan 1.396 asociaciones cooperativas de producción agropecuaria.

Las cooperativas del sector reformado, según la VIII Evaluación de la Reforma Agraria, aglutinan 41.488 asociados, concentrándose el 61% en la región occidental y central.

De las 328 cooperativas censadas de la Fase I (Decretos Números 154-842), el 60,4% de la superficie cultivada en la forma colectiva es dedicada a la producción de bienes para la exportación (café, caña y algodón); el 21,3% se dedica a la producción de bienes no tradicionales de exportación (henequén, coco, marañón, ajonjolí, etc.) y un 18,3% a la producción de granos básicos (maíz, arroz, frijol, maicillo). Sin embargo al analizar el número de cooperativas según estratos de actividad económica, constatamos que el 37% se dedican a la producción de bienes para exportación y el 63% son cerealeras, pecuarias y productoras de bienes no tradicionales de exportación (ver cuadro N° 1). Esto demuestra que si bien gran parte de la superficie de las cooperativas de la Fase I se dedican a la producción de café, caña y algodón, no sucede así en términos de unidades de producción (2).

El ajuste estructural: una definición básica

Durante los últimos años, se ha venido dando en América Latina, un nuevo... "fenómeno que consiste en la combinación de enfoques monetaristas de estabilización económica, con concepciones neoliberales en lo que concierne a la organización de la economía y la sociedad". (2) Este fenómeno se conoce como Ajuste Estructural.

CUADRO N.º 1

NUMERO DE COOPERATIVAS POR REGIONES GEOGRAFICAS SEGUN ESTRATOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (FASE I DE LA REFORMA AGRARIA)

REGIONES ESTRATOS	I	II	III	IV	TOTAL
I	17	22	3	13	55
II	15	30	3	0	48
III	2	1	5	6	14
IV	1	1	0	0	2
V	12	8	16	8	44
VI	18	7	21	22	68
VII	24	13	17	26	80
VIII	3	1	7	6	17
TOTAL	92	83	72	81	328
I =	Cafetaleras				
II =	Cañeras				
III =	Algodoneras				
IV =	Cafetaleras-Cañeras				
V =	Cereales				
VI =	Otros rubros agrícolas				
VII =	Pecuarias				
VIII =	Individuales				
FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Centro de Cómputo. OSPA/MAG, Censo Agrícola 1988/1989. Planificación y Evaluación de la Reforma Agraria (PERA).					

La conceptualización del ajuste estructural ha ido sufriendo una serie de transformaciones, las cuales, sin embargo, tienen como fundamento teórico el paradigma conocido como neoliberalismo.

El ajuste estructural ha sido definido recientemente “por Stanley Fisher, economista del Banco Mundial, de la siguiente forma: en un sentido macroeconómico serían los ajustes necesarios en la estructura de la demanda de los países altamente endeudados para que recuperen la senda del crecimiento y se adecúen a una disponibilidad menor de recursos externos; en un sentido microeconómico el impulso de políticas de liberalización que aumenten la eficiencia del Sistema de Precios”. (3)

Ya en la definición anterior, se observa que el ajuste, tal como es concebido en la actualidad, implica por una parte un ajuste sobre la demanda, y por otra, un ajuste sobre la oferta. En el caso de la demanda, el objetivo fundamental es restringirla; y en el caso de la oferta, es reorientarla. Esto puede verse en lo siguiente: “...los planes de ajuste sugeridos para América Latina, introdujeron, como complementación a las restricciones de la Demanda Agregada, una reestructuración de la oferta, es decir, modificaciones en el aparato productivo en su parte ineficiente para convertirla en la plataforma que a base de mayor productividad pueda modernizar a la economía...”. (4)

La forma de actuar para restringir la demanda, se constituye en un conjunto de políticas incluidas en los denominados paquetes de estabilización. Este conjunto de políticas se considera que deben ser aplicadas en el corto plazo y su objetivo fundamental es atacar los desequilibrios macroeconómicos.

La forma de actuar sobre la oferta, se constituye en las denominadas políticas de reorientación económica y tienen un carácter de mediano y largo plazo.

En su conjunto, "El nuevo enfoque se propone para el corto plazo aminorar el déficit fiscal y reducir el tamaño del gasto público; aplicar una política monetaria estricta para contener la inflación, y hacer regir una tasa de interés real y un tipo de cambio real "adecuado". A su vez, los objetivos para el mediano plazo son transformar las exportaciones en el motor del crecimiento; liberalizar el comercio exterior; maximizar el uso del mercado y atenuar las regulaciones estatales; concentrar las inversiones en el sector privado y comprimir la presencia del sector estatal, y promover una estructura de precios sin restricciones" (5).

El Plan de Desarrollo Económico y Social 1989-1994

La forma en que el ajuste estructural hace su aparición en El Salvador, es a través de la llegada del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) al gobierno en la segunda mitad de 1989; y la consiguiente puesta en práctica del Plan de Desarrollo Económico.

El programa de ajuste estructural puesto en marcha en el país, tiene similitud con programas puestos en marcha en otros países latinoamericanos, o mejor dicho a la concepción del ajuste estructural que anteriormente se ha explicado brevemente. Lo anterior se pone claramente en evidencia en el plan en el cual se manifiesta: "Las políticas económicas de los primeros meses de gobierno están orientadas primordialmente a estabilizar la economía. A partir de 1990 el énfasis en la conducción económica irá cambiando, para dar paso al proceso de reorientación económica. Sin embargo, en 1990 aún habrá necesidad de contar con algunas medidas de estabilización, pero debiendo ser ellas cada vez de menor preponderancia. Además, cabe destacar que algunas medidas tienen una doble función, ya que son una importante herramienta de estabilización, pero también actúan como agentes de apoyo del proceso de reorientación económica" (6).

● El plazo inmediato: políticas de estabilización.

En el marco del programa de estabilización, cuyos objetivos fundamentales son eliminar o disminuir los desequilibrios macroeconómicos (desequilibrio en la balanza de pagos, déficit fiscal e inflación), se proponen cinco políticas fundamentales que engloban una diversidad de medidas económicas. Estas políticas son: Políticas de Precios, Política Comercial y de Estabilización del Sector Externo, Política Fiscal, Política Monetaria y Crediticia y Política del Sistema Financiero.

● El mediano plazo: la reorientación económica.

La reorientación económica tal y como es concebida en el Plan de Desarrollo, de hecho tiene como fundamento el diagnóstico de los desequilibrios macroeconómicos que en el caso de nuestro país se explican en la política económica equivocada (fundamentalmente) y en la "destrucción terrorista". En ese sentido, cobra especial interés el proceso reformista desarrollado a partir de 1979 (Reforma Agraria, Reforma Bancaria y Reforma al Comercio Exterior), el cual será objeto de modificación en la actual política económica, especialmente en la denominada "reorientación económica".

Se desarrollará por tanto, una política que tienda a modificar la Reforma Agraria, utilizando explicaciones como la ineficiencia para intentar destruir las cooperativas a través de la parcelización. De la misma forma, se aplican políticas que modifiquen el Sistema Financiero, específicamente hacia una reprivatización; y además, la liberalización del Comercio Exterior.

En su conjunto, estas políticas intentan dar marcha atrás al proceso reformista desarrollado durante la década de los 80'.

A continuación se plantean en términos generales las políticas contempladas en la reorientación económica.

La reorientación económica se lleva a cabo a través de tres grupos de políticas: Políticas de Reducción de la Dependencia Externa, Políticas Financieras de Estabilización y Reorientación Económica y Reformas Institucionales y Legales para la Reorientación Económica.

Dentro del primer grupo es de especial importancia la apertura al comercio exterior, con lo cual se pretende alcanzar un desarrollo de la base exportable y crear las condiciones para estimular inversión extranjera. Se utilizan acá una política cambiaria que se caracteriza por un tipo de cambio flexible; una política arancelaria que reduce los gravámenes al comercio exterior y el establecimiento de un marco legal que favorezca la orientación de la economía hacia el mercado externo, así como también fomento al ahorro interno.

En el segundo grupo de políticas, se intenta “enfrentar de manera decidida la crisis y sentar las bases para un nuevo reordenamiento económico basado en la competencia, la eficiencia y la apertura al comercio externo”. Se utilizan las políticas fiscal, crediticia, cambiaria y comercial; las cuales de hecho se encuentran contempladas en el programa de estabilización.

Especial importancia revisten las reformas institucionales y legales para la reorientación económica. En este tercer grupo de políticas se encuentra la desregulación y privatización del sistema financiero, la consolidación de la Reforma Agraria, la privatización y participación, el programa de eliminación del monopolio del comercio exterior, el programa de modernización del aparato gubernamental, el establecimiento del sistema nacional de inversión pública y el marco legal para fortalecer el funcionamiento del mercado.

Dado que nuestro interés es analizar el efecto del ajuste estructural en los sectores campesinos, haremos una exposición más detallada de la política agraria desarrollada por el actual gobierno en lo que respecta a la “consolidación de la Reforma Agraria”.

● La política agropecuaria.

Según el gobierno, “La compulsividad que ha caracterizado el proceso de reforma agraria, su alto contenido político (politización del proceso) y la ineficiencia de la administración pública para ejecutarlo, han generado un estancamiento en el sector reformado, llevándolo a una crisis de tipo productivo y financiero que ha tenido un costo económico muy elevado para toda la sociedad salvadoreña”. Esta concepción pretende demostrar por una parte “la equivocada política económica” desarrollada anteriormente y por otra la “ineficiencia de los campesinos cooperativistas” para cultivar la tierra.

Se intentará por lo tanto desarrollar una política que tienda a modificar la estructura cooperativa en el sector agrario y que es argumentada de la siguiente manera:

“La política gubernamental hacia el sector agrario está orientada a establecer condiciones que: (i) brinden seguridad y confianza a la familia campesina, sobre la real tenencia e irreversibilidad del proceso de Reforma Agraria, a través de la entrega masiva de títulos de propiedad (Decreto N.º 207) y del apoyo decidido al proyecto del Banco de Tierras (Decreto N.º 839), así como también a adjudicatarios y cooperativas beneficiadas por la Fase I (Decreto N.º 153); (ii) faciliten la implementación de los excedentes de las 245 has. y a la transferencia de la propiedad estatal rústica de vocación agropecuaria en favor de los beneficiarios de la Reforma Agraria; (iii) crear las condiciones que conlleven a las cooperativas y beneficiarios de la Reforma Agraria, a escoger en forma libre el modelo de producción deseado” (7).

Las nuevas formas de adjudicación se enmarcan dentro de los modelos siguientes:

1. Asociación Cooperativa de Participación Real.

Se aplicará a aquellas propiedades que presentan características productivas que técnicamente no sea conveniente su adjudicación en forma individual, tal es el caso de las que posean cultivos permanentes, infraestructura, ganado, etc...

Estas propiedades serán escrituradas a favor de una figura jurídica, que podrá ser "Asociación Cooperativa de Participación Real", en la cual cada socio tendrá garantizada su participación a través de acciones o títulos valores, o "Proindiviso con Contrato de Asociación en Participación".

2. Asociación Cooperativa Tradicional.

Esta forma tradicional de propiedad de la tierra se mantendrá cuando la estructura productiva de la misma no permita su parcelación; cuando se esté haciendo uso eficiente de la tierra; cuando sean cooperativas autogestionarias; o cuando así lo manifiesten sus asociados y sea palpable la conveniencia económico-social de dejarla trabajando en esa forma.

3. Adjudicación Mixta.

Se procederá a adjudicar en esta modalidad cuando una parte de la propiedad posea: cultivos permanentes, infraestructura productiva, ganado y otras limitantes que no permitan su parcelación. Se parcelará la porción factible de adjudicar individualmente y la infraestructura se adjudicará de acuerdo a las figuras jurídicas mencionadas en el numeral 1.

4. Adjudicación Individual.

Esta será por excelencia la forma de adjudicación en la nueva etapa de la Reforma Agraria, por lo que se procederá a parcelar las propiedades que técnicamente sea recomendable hacerlo, especialmente donde se realicen cultivos anuales y que así lo expresen los interesados en Acta de Asamblea de Asociados. (8)

Efectos del Ajuste Estructural en los sectores campesinos

● Las políticas del programa de estabilización

1. Políticas de Precios

La orientación de la política de precios, en el sentido de que sea la racionalidad del mercado la que determine los precios de los productos, lleva a poner en práctica un proceso de liberalización y eliminación de subsidios, eliminación de las restricciones comerciales y el ajuste de las tarifas de los servicios públicos.

Este conjunto de medidas, traerán efectos negativos sobre el sector cooperativo agropecuario y los pequeños y medianos productores. La liberalización de precios, indiscutiblemente hará incrementar los precios de los insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, etc.), así como la maquinaria y el equipo.

Si a lo anterior agregamos el hecho de que se van a "Adecuar los mecanismos de estabilización de precios de granos básicos, en forma que respondan a las fluctuaciones del mercado internacional", ello implica la menor participación del Estado en la regulación del precio y en el establecimiento de precios de garantía. De hecho, la eficacia del Estado en cuanto la regulación del precio no ha sido favorable para los productores de granos básicos y el papel que ha jugado el Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA), no ha sido el más adecuado, ya que se ha limitado a establecer precios de garantía que no responden a los costos de producción y además no ha absorbido los volúmenes de producción de los granos básicos.

Esto se ha traducido en que los productores han estado a merced de acaparadores oligopólicos que compran el producto a los campesinos a bajos precios y lo venden a un precio mucho más elevado, lo que les permite obtener altas ganancias. Este meca-

nismo ha funcionado de la siguiente manera: el campesino solicita crédito y cuando lo obtiene tiene que cancelarlo poco tiempo después de que se da la cosecha. De esta forma se ve en la necesidad de venderla para poder cancelar dicho crédito, lo que hace que en un período de cierta abundancia los intermediarios adquieran el producto a precios bajos y luego los almacenen y vendan a precios que les permiten tener buenas utilidades.

Si de hecho el papel del IRA ha sido limitado, la nueva política dejará al campesino en manos de los acaparadores. De manera que la política de precios daña a los sectores campesinos.

Si a esto le sumamos que los precios de los granos básicos responderán a las fluctuaciones del mercado internacional; en el que participan los productores de los países industrializados quienes reciben un trato preferencial de sus gobiernos, esto puede traducirse en una mayor caída del precio, con el cual los productores pequeños y medianos no tendrán la capacidad de competir. Se estaría posibilitando entonces una sustitución de la producción nacional de alimentos por la de los países industrializados.

2. Política Comercial y de Estabilización del Sector Externo

La política comercial y de estabilización del sector externo contempla la eliminación de las restricciones no arancelarias, la adecuación de los aranceles (disminución), la existencia de un mercado bancario con tipo de cambio flexible y la disminución de los impuestos de exportación.

El primer efecto lo constituye el incremento en el precio de los insumos agrícolas (fertilizantes, etc.) fundamentalmente por el tipo de cambio flexible que hace incrementar los precios internos de estos productos; que lleva lógicamente a un incremento de los costos de producción, que si se comparan con los precios profundizan los efectos negativos para los pequeños productores.

3. Política Fiscal

Esta política busca “reducir el déficit del gobierno central y mejorar la situación financiera de las empresas públicas no financieras”.

La disminución del déficit fiscal, implica por una parte la reducción del gasto público y por otra la reducción del crédito del BCR al gobierno central, lo que claramente se traduce en una reducción de la demanda agregada.

El mejoramiento de la situación financiera de las empresas públicas no financieras, junto con otras medidas tales como las reformas al sistema tributario, implican una clara intención de reorientar la asignación de recursos “más eficientemente”. Es de hacer notar que las reformas hechas al sistema tributario, son altamente regresivas y afectan más al consumo y menos a la inversión.

En el caso del sector agropecuario implica una reorientación hacia una mayor producción para la exportación, tanto de productos tradicionales como no tradicionales; y por lo tanto prioriza la producción para el mercado externo en detrimento de la producción para el mercado interno.

Esto se traduce en un estrangulamiento para los pequeños productores, ante una situación desfavorable para la producción de granos básicos y la no posibilidad de inserción en actividades productivas orientadas al mercado externo.

4. Política Monetaria y Crediticia

La intención de la política monetaria es por una parte, estabilizar el sistema financiero para luego proceder a un reordenamiento del mismo que conlleve a su saneamiento. Se plantean como medidas cierta expansión del crédito, mantener tasas de interés positivas en términos reales y eliminación de subsidios a las tasas de interés,

teniendo como objetivo último la desregulación del mercado financiero, lo que de hecho implica una reasignación de recursos.

De hecho, tanto los cooperativistas, como los pequeños y medianos productores, no han sido los más privilegiados con el crédito, ni siquiera después del proceso de nacionalización de la banca; esto lo muestra el Cuadro N.º 2, en el cual se plantea el crédito agrícola total y el crédito al sector reformado. Puede observarse, que ni siquiera en los años en los cuales se le otorgó la mayor cantidad de crédito al sector cooperativo, este tuvo una importancia significativa; en promedio en el período que se presenta, el crédito al sector reformado fue de 17,2%.

CUADRO N.º 2

**PARTICIPACION DE CREDITO AL SECTOR REFORMADO
EN EL CREDITO AGRICOLA.
En Miles de Colones**

Años	Crédito Agrícola Total	Crédito al Sector Reformado	%
1980	974.442	165.649	17,0
1981	1424.785	204.389	14,3
1982	873.487	218.601	25,0
1983	893.933	194.117	21,7
1984	1749.642	224.475	12,8
1985	n.d	n.d	12,6
n.d.: no disponible			

5. Política Salarial

No existe explícitamente una política salarial definida. Sin embargo, es posible hablar de una política salarial que se encuentra implícita dentro del proceso de ajuste y que de hecho influye en el comportamiento del sector agrícola. El papel que ésta tiene que jugar, con el intento de controlar la inflación y favorecer la rentabilidad de la producción. Es importante destacar que el mayor impacto está orientado a la reducción de la demanda.

De hecho, los salarios se han mantenido estáticos en términos nominales, pero han sufrido un deterioro acelerado como consecuencia entre otras cosas, del proceso de liberalización de precios.

Esta situación favorece el nivel de rentabilidad de la producción agropecuaria, fundamentalmente en lo que respecta a los productos tradicionales de exportación; ya que la participación de los salarios en los costos de producción tiende a ser relativamente menor.

Esto afecta directamente a los productores de granos básicos, ya que la mantención de los salarios ejerce una presión en contra del incremento de precios en los granos básicos.

Si a esto le agregamos la competencia de granos básicos externa, el efecto sobre los productores de granos es mucho mayor: presiona a una destrucción de la pequeña producción campesina y cooperativas de producción de granos básicos; y por lo tanto empuja a una mayor venta de fuerza de trabajo en el campo.

En días recientes, el Gobierno a través de la Asamblea Legislativa, ha decretado un incremento de 150 colones, pero sólo para el sector de los empleados públicos. Es de tomar en cuenta, que este incremento es inferior al crecimiento inflacionario.

No se habla de incrementos salariales en el sector privado, y por lo tanto en el sector agrícola los salarios se mantienen.

Las políticas de reorientación económica

La reorientación económica se lleva a cabo a través de tres grupos de políticas: Políticas de Reducción de la Dependencia Externa, Políticas Financieras de Estabilización y Reorientación Económica y Reformas Institucionales y Legales para la Reorientación Económica.

En el primer grupo de políticas se destacan las de apertura al comercio externo, que tienen como objetivo alcanzar un desarrollo dinámico de la base exportable y crear las condiciones para estimular la inversión extranjera. En términos más específicos se encuentran la política cambiaria (tipo de cambio flexible), la política arancelaria (reducción de aranceles), el establecimiento de un marco legal que estimule el comercio externo y la promoción del ahorro interno.

Estas políticas dentro de la reorientación económica, de hecho están haciendo una redistribución del ingreso, haciendo más rentable la producción hacia la exportación.

El efecto inmediato es por una parte, un desincentivo a la producción para el consumo interno (se pretende "reducir el ritmo de crecimiento del consumo"), que se verá profundizado por el impacto en el valor de las importaciones. Este podrá verse en dos sentidos: como una reducción de las importaciones, que dada la estructura industrial del país significaría una reducción de la producción industrial; o la mantención de las importaciones pero con un efecto inflacionario en el valor de los productos (es posible que se den los dos efectos).

Los sectores campesinos difícilmente pueden adaptarse a esta lógica económica, que exige una alta utilización de recursos financieros, tecnológicos, etc., y de hecho se verán más imposibilitados a desarrollar sus actividades productivas (por el incremento en el precio de los insumos), de manera que se verán forzados a salir del mercado; lo que en contrapartida plantea una reconcentración de la tierra, que ya en la actualidad y aun con el desarrollo de la Reforma Agraria es uno de los problemas fundamentales del agro salvadoreño.

Las políticas financieras de estabilización y reorientación económica, tienen como objetivo "enfrentar de manera decidida la crisis y sentar las bases para un nuevo reordenamiento económico basado en la competencia, la eficiencia y la apertura al comercio externo", e incluyen la política fiscal, la política crediticia y la política cambiaria y comercial; las que de hecho también están incluidas en el programa de estabilización y por lo tanto sus efectos han sido analizados anteriormente.

Adquiere fundamental importancia el tercer grupo de políticas que están contempladas en las denominadas reformas institucionales y legales para la reorientación económica. Estas son las siguientes: Desregulación y Privatización del Sistema Financiero, Consolidación de la Reforma Agraria, Programas de Privatización y Participación Privada, Programas de Eliminación de los Monopolios del Comercio Exterior, Programas de Modernización del Aparato Gubernamental, Establecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, Marco Legal para fortalecer el funcionamiento del mercado.

Entre estas políticas destacan la privatización del Sistema Financiero, que como se ha manifestado, aun con la nacionalización no posibilitó el acceso al crédito a los pequeños productores y las cooperativas, y bajo las nuevas condiciones, el criterio de la "eficiencia", marginará aún más a estos sectores.

La política con respecto a la Reforma Agraria, llevará como ya se ha planteado anteriormente, a una reversión del proceso. No menos importantes son las otras políticas, las cuales también tienen impacto sobre los campesinos.

En general, el programa de ajuste estructural en aplicación en el país, llevará sobre los sectores campesinos efectos adversos.

NOTAS

- (1) Mora Alfaro, Jorge A.: "Costa Rica: Agricultura de Cambio y Producción Campesina", en *Revista de Ciencias Sociales*, n.º 43, marzo de 1989. Universidad de Costa Rica, p. 20.
- (2) Hernández Romero, Pedro Juan: "El Cooperativismo en El Salvador". *Documento de Trabajo*. INVE. San Salvador. mayo de 1990, pp. 7-10.
- (3) Foxley, Alejandro. *Experimentos Neoliberales en América Latina*. México, Fondo de Cultura Económica. 1988, p. 7.
- (4) Fallas V, Helio. "El Programa de Ajuste Estructural y la Agricultura en Costa Rica" en *Los Campesinos frente a la nueva década. Ajuste Estructural y pequeña producción agropecuaria en Costa Rica*. San José, C. R., Editorial El Porvenir. CECADE. 1989. p. 19.
- (5) Chorro S., Miguel Antonio. "Teoría y Política Económica del Ajuste Estructural en El Salvador" en *Boletín "El Salvador: Coyuntura Económica"*, Año V, n.º 31, julio-agosto 1990, p. 3.
- (6) Bitar, Sergio: *Neoliberalismo Versus Neoestructuralismo en América Latina*. Citado por Chorro S., Miguel Antonio. *op. cit.* p. 7.
- (7) Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. *Plan de Desarrollo Económico y Social 1989-1994*. San Salvador. MIPLAN. 1989, p. 19.
- (8) MIPLAN. *op. cit.*, p. 41.
- (9) García Prieto, Raúl. "La necesidad de modificar la forma de tenencia de la tierra en el proceso de reforma agraria para reactivar el sector agropecuario". San Salvador. *Ponencia FINATA en VI Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas*. Marzo de 1990. Mimeo, pp. 10-11.

El ajuste estructural en Centroamérica

Universidad Libre de Amsterdam *

Durante los últimos diez años los países del Istmo Centroamericano han atravesado una época de tensión político-militar como expresión de los desequilibrios estructurales originados por los estilos de desarrollo heredados del siglo anterior. De manera paralela se presentó un estancamiento económico desde 1978, lo que se tradujo en un deterioro generalizado de los indicadores de pobreza, de desempleo y de marginalización social.

La reciente evolución de las economías centroamericanas puede ser analizada desde el punto de vista de un patrón concentrador de crecimiento, es decir un crecimiento con poca redistribución. Ese desarrollo desbalanceado se refleja en la existencia crónica de desequilibrios financieros, fiscales y comerciales en cada uno de los países. Los déficits persistentes obligan a los países a recurrir a préstamos de las organizaciones financieras internacionales (Banco Mundial, FMI, BID y BCIE), los cuales están condicionados a la realización de ajustes en las políticas económicas nacionales. La actual crisis macroeconómica tiene sin embargo un carácter estructural, cuya solución requiere modificar sustancialmente la propia dinámica del proceso de desarrollo socioeconómico. Para poder lograr una reestructuración del aparato productivo y una mejor inserción comercial del mismo se requiere no solamente dinamizar el proceso económico, sino también dedicar la debida atención a los cambios necesarios para involucrar a la población en este esfuerzo de transformación social y productiva.

La década perdida

Mientras que los indicadores de desarrollo macroeconómico en Centroamérica reflejaron para las décadas de los años 60 y 70 todavía cierto dinamismo, a partir de 1978 la evolución económica entra en una prolongada etapa de estancamiento (ver tabla 1). En la década de los años 80 todos los países de la región registraron tasas negativas del nivel de ingreso per cápita, lo que se debe a la disminución de la producción y al alto índice de crecimiento poblacional.

* Artículo elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Universidad Libre de Amsterdam. Este artículo está basado en la ponencia "Tendencias generales del desarrollo económico-social en Centroamérica-pautas para la participación popular", presentado por Raúl Ruben en el seminario "Más allá del Ajuste", San José, Costa Rica, 2/3 mayo de 1991.

TABLA I

Centroamérica-crecimiento macroeconómico (1960-1990)
(tasa anual de crecimiento del producto interno bruto)

	1960-70	1970-75	1975-80	1980-87
Costa Rica	6.0	6.0	5.3	1.8
Nicaragua	6.9	5.1	- 3.2	- 0.3
Honduras	4.8	2.3	7.3	1.3
Guatemala	5.8	5.6	5.7	- 0.7
El Salvador	4.4	5.5	1.0	- 0.4

Fuente: CEPAL e IBRD

El estancamiento económico ha sido explicado por una serie de factores de carácter interno y externo, los cuales se refuerzan mutuamente y afectan de manera directa las condiciones de vida de la población. Las causas comúnmente mencionadas para explicar la crisis económica (1) se refieren a la reducción de los precios internacionales de los cultivos tradicionales de agroexportación, el incremento de los costos de importaciones y el fracaso del modelo de sustitución de importaciones del Mercado Común Centroamericano (MCCA).

Estos fenómenos indican a la vez que se ha *agotado el modelo de desarrollo* prevaleciente desde las décadas anteriores (2). En el sector agropecuario el estancamiento de la producción y el bajo nivel de rendimiento indican que se ha alcanzado el límite de la "frontera agrícola". La crisis de la balanza comercial por su parte demuestra las debilidades del sector industrial. El avanzado ritmo de urbanización no ha sido acompañado por un equivalente aumento de las opciones laborales, razón por la cual grandes segmentos de la población deben buscar empleo en el sector informal.

El panorama del desarrollo social en Centroamérica demuestra un acelerado proceso de deterioro durante la última década, lo que se evidencia en la profundización de la pobreza, del desempleo y de la desnutrición de la población. La incidencia de la pobreza ha aumentado el 63% de las familias en 1980 a más del 72% de las familias en 1985, y cerca de la mitad de la población se clasifica como pobreza extrema; en el sector rural dicho incremento fue del 72% al 83% en la misma época (3). De la misma manera los índices de desnutrición y de mortalidad infantil demuestran un alarmante crecimiento, especialmente en las áreas rurales. En las ciudades el aumento de la pobreza se explica más bien por la reducida oferta de fuentes de trabajo y la subsiguiente erosión de ingresos y poder de compra.

Podemos señalar por lo tanto un creciente *déficit social*, reflejado en una disminución de la seguridad alimentaria y una reducción de la seguridad laboral para amplias capas de la población del Istmo Centroamericano. Hay que añadir además que el modelo de desarrollo ha traído enormes pérdidas de recursos naturales (deforestación, contaminación ambiental), las cuales han sido asumidos por los países y constituyen una amenaza al desarrollo futuro.

Déficits financieros y polarización social

Los indicadores que son presentados generalmente para demostrar la magnitud y las dimensiones de la crisis económica en Centroamérica incluyen básicamente los crecientes déficits financieros en la balanza de pagos y en la balanza fiscal, los cuales

se han traducidos en una intensificación del ritmo inflacionario (financiamiento monetario), o bien en una acumulación de la deuda externa.

Las causas estructurales del déficit fiscal se encuentran en el crecimiento desproporcionado de los gastos gubernamentales, tanto para el pago de planilla de los empleados públicos, como para el financiamiento de los gastos militares y de las inversiones en infraestructuras, cuyos beneficios llegan en forma de importantes *rentas* al sector empresarial de la economía. De la misma manera el aumento del déficit comercial se origina en un continuo crecimiento de las importaciones de materias primas y bienes de consumo destinados de manera exclusiva para algunas capas sociales privilegiadas, mientras que la fuga de capitales y el pago de intereses sobre la deuda se reflejan en un balance negativo en las cuentas de capital y divisas.

Ambos déficits han sido compensados históricamente a través de mecanismos de financiamiento interno y externo, sea por la creación monetaria, o bien con préstamos internacionales. La importancia geopolítica de la región en años anteriores le ha facilitado el acceso a fuentes de crédito a condiciones blandas, pero ahora dicha oferta se encuentra cada vez más condicionada a cambios en las políticas económicas nacionales y por ende tiende a contrarrestar la independencia política de los países del Istmo.

Aunque la persistencia de estos déficits se ha traducido ahora en un claro impedimento para el futuro desarrollo de la región, sería incorrecto suponer que para su solución se requiere únicamente una reestructuración de los mecanismos de control financiero. La creación de bases internas de financiamiento para el proceso de desarrollo económico-social pasa necesariamente por un reordenamiento de las estructuras productivas.

Los fenómenos relacionados con el agotamiento del modelo económico se reflejan también en un creciente grado de *polarización social*. En el contexto rural se ha notado una reducción del tamaño promedio de microfincas hasta llegar a dimensiones sub-familiares, insuficientes para garantizar la supervivencia. Las reformas agrarias de las décadas anteriores han dejado un sector cooperativo que dispone todavía de una limitada capacidad de consolidación empresarial, mientras que existen todavía amplios contingentes de familias campesinas sin suficiente acceso a tierras. Por otro lado la modernización agrícola y la extensificación de la ganadería se traducen en una menor generación de empleo estable: se recurre cada vez más al trabajo de jornaleros movilizados desde el contexto (semi-)urbano, razón por la cual se han intensificado las tendencias migratorias hacia las principales ciudades.

En el contexto urbano el crecimiento del sector industrial ha sido limitado por el tamaño reducido del mercado nacional y las limitadas posibilidades de exportación (extra-)regional, razón por la cual dicho sector sufre problemas de sobrecapacidad instalada y ofrece poca capacidad de absorción laboral. Por consiguiente la creciente población urbana tiene que buscar empleo en el sector informal, lo cual ya ocupa cerca del 30% de la fuerza laboral en las principales ciudades de la región. Asimismo se ha desarrollado un marcado dualismo a nivel de la estructura productiva urbana.

El caracter del ajuste estructural

Los programas de ajuste estructural (PAE) fueron preparados en función de buscar un saneamiento de la situación deficitaria de las finanzas públicas y de la balanza de pagos, de tal manera que sea reinstaurada una dinámica interna para el proceso de desarrollo económico. Aunque se ha reconocido por lo general la necesidad de constituir bases más firmes para el financiamiento de la reestructuración productiva, el condicionamiento cruzado de los préstamos internacionales impone de manera directa un determinado perfil del ajuste económico y sectorial.

Los elementos básicos del PAE incluyen un conjunto de medidas tendientes a

modificar la intervención en los mercados y racionalizar el gasto público. La *liberalización* de los mercados internos y del comercio internacional se realiza a través de la eliminación de subsidios, ajustes de la tasa de cambio (devaluación) e incrementos en las tasas de interés para llegar a tasas reales positivas. La reducción del papel del Estado incluye la *privatización* de empresas públicas, la racionalización de los servicios colectivos y la focalización de los programas sociales.

Los préstamos internacionales del Fondo Monetario y del Banco Mundial tienen como objetivo reestablecer los equilibrios internos y externos, bajo condiciones de ajustes en materia de estricto control sobre los gastos gubernamentales, cambios en la política cambiaria y en la política crediticia, y liberalización del comercio nacional o internacional. El objetivo de esta política se define como el reforzamiento de la capacidad de competencia internacional, percibida como una condición *sine-qua-non* para incentivar la reestructuración del aparato productivo. El financiamiento internacional asume por lo tanto cada vez más el carácter de préstamos sectoriales complementarios al programa de ajuste, mientras que los proyectos dirigidos a grupos sociales específicos tienden a ser más reducidos.

La contraparte comercial para los préstamos de ajuste estructural está conformada por las diferentes iniciativas norteamericanas en materia del comercio internacional (4): la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y la Iniciativa para las Américas (IPA). Ambos programas buscan la reintegración económica de la región Centroamericana en el mercado norteamericano a través de concesiones arancelarias. Paralelamente, el Grupo de América Central (GRUCA) aprovechó las negociaciones del GATT sobre una nueva Ronda de Uruguay para presentar una solicitud conjunta para obtener mayor acceso a los mercados industrializados para colocar sus productos tropicales. Sin embargo, para poder aprovechar los espacios que ofrecen estas iniciativas se requiere de amplios fondos de inversión para realizar las reformas estructurales que se consideran necesarias.

El perfil general que asumen los "paquetes" de ajuste en Centroamérica ha sido calificado como una estrategia de apertura comercial y modernización productiva a través de los mecanismos del mercado, o sea que se pretende generar empleo por la vía de incentivos para la inversión privada. De esta manera se espera lograr "posteriormente" una distribución del crecimiento económico sin que haya necesidad para recurrir a una redistribución de la propiedad. Cabe señalar sin embargo que esta transformación productiva tiende a asumir un carácter meramente exclusivo cuando no esté acompañada por medidas que garanticen la *re-inserción* de los estratos populares en la nueva dinámica de desarrollo económico y social.

Transformación con equidad

Tomando en cuenta las causas estructurales de los actuales desequilibrios macroeconómicos, sería insuficiente recurrir únicamente a ajustes financieros para lograr la modernización de las estructuras productivas. Un proceso de ajuste sin suficiente participación de la población conlleva al riesgo de que los déficits financieros serán "reparados" a costa de un creciente déficit social, o dicho de otra manera, que la deuda externa será sustituida por una deuda interna.

Un verdadero proceso de ajuste estructural requiere en primer lugar la creación de una base para la *sostenibilidad* interna como garantía para la efectiva re-integración de los estratos populares en el desarrollo socio-económico. Para tal efecto ya no resulta suficiente pensar en un modelo dual con "espacios" para la economía popular, sino más bien se deben buscar mecanismos que garanticen una contraparte del ajuste a nivel microeconómico.

Los principales criterios que rigen esta **transformación con equidad** (5) y que pueden contribuir a perfilar la "*condicionalidad democrática*" del ajuste, incluyen:

- Apoyo a la gestión de programas que fortalecen la *auto-determinación* de los

países Centroamericanos en el ámbito internacional (en términos comerciales, financieros y políticos).

- Fomento de iniciativas que promueven la *integración nacional* de las estructuras de producción (agroindustria rural, pequeña industria artesanal, etc).
- Respaldo para *programas sociales* dirigidos a poblaciones específicas (incluyendo refugiados y desplazados) que mantienen un marco de ejecución dirigida y sostenible.
- Apoyo para la formación de *capital humano* y para la generación de capital de trabajo para la consolidación empresarial de grupos menos favorecidos.
- Fomento de programas para la generación de *tecnologías apropiadas* que son compatibles con la *conservación ambiental* (agricultura biológica, tecnologías de bajos recursos).

El aspecto tal vez más importante de este *desarrollo inclusive* se refiere al involucramiento directo de los sujetos sociales como interlocutores y protagonistas del proceso de modernización económica y social. Asimismo será necesario reconocer plenamente el potencial de desarrollo existente dentro de la economía campesina y del sector informal urbano. Ir más allá del ajuste significaría en este contexto aportar criterios para hacer más efectiva y viable la cooperación externa desde el punto de vista de la inserción de las capas sociales menos favorecidas. Es allí que se encuentra el desafío para la cooperación europea.

NOTAS

(1) Véase: J. Weeks (1990), S. Reuben (1990), E. Rivera et.al. (1986) y V. Bulmer-Thomas (1987).

(2) Véase: George Irwin (1991), *New-perspectives for Modernization in Central America*, en: *Development & Change*, Vol. 22, y M. Lindenberg (1988), *Central America's Elusive Recovery*, en: *World Development*, 16 (2).

(3) R. Menjivar., D. Trejos (1990), *La pobreza en América Central*, San José, FLACSO.

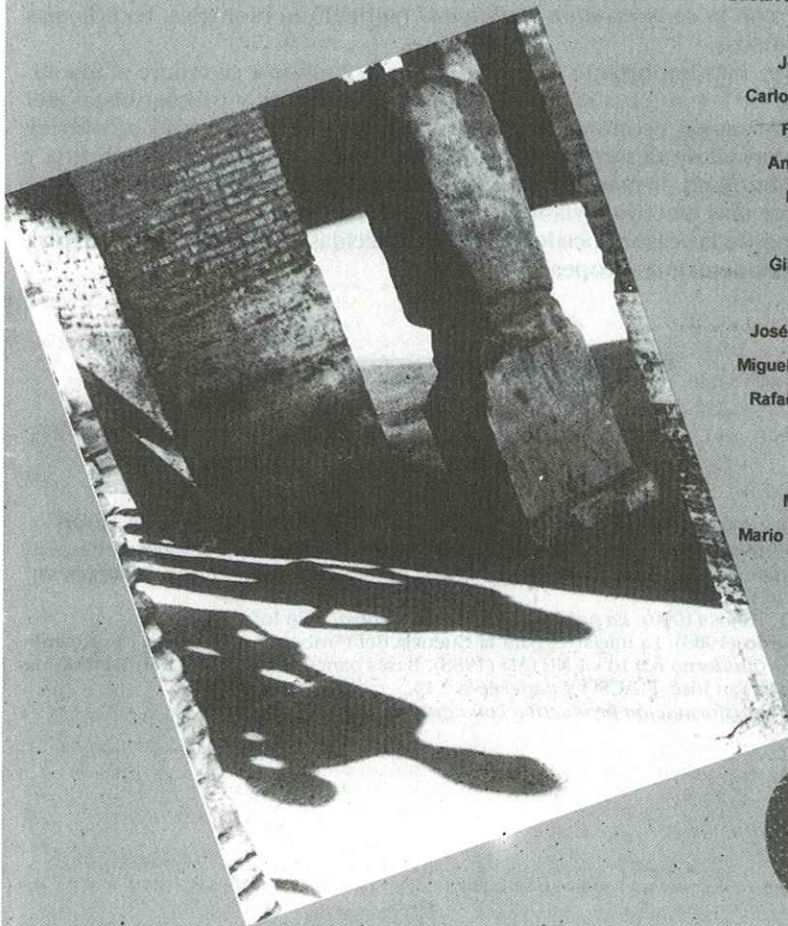
(4) Ver: M.E. Gallardo (1988), *La iniciativa para la Cuencia del Caribe: su impacto en Centroamérica*, San José, FLACSO *Cuaderno* n.º 10 y UNCTAD (1988), *Bases para una posición Centroamericana en la Ronda de Uruguay*, San José, FLACSO, *Cuaderno* n.º 15.

(5) CEPAL (1990), *Transformación productiva con Equidad*, Santiago de Chile.

*Homenaje a la revolución
del 20 - X - 44*

Otra Guatemala

REVISTA TRIMESTRAL AÑO IV N.º 13 OCT - DIC DE 1991 Q. R. 400 L. 8 IN.



Gustavo Porras Castejón

Carlos Cáceres

José Antonio Ríos

Carlos Figueroa Ibarra

Francisca Álvarez

Ana Lorena Carrillo

Elizabeth Álvarez

Harvey Taylor

Gilberto Castañeda

Julio Gutiérrez

José Alberto Cardoza

Miguel Ángel Albizu

Rafael Cuevas Molina

Julia Hernández

Mario Payeras

Myriam Moscona

Mario Roberto Morales

Sergio Tishler



PEDIDOS A SODEPAZ

Teléf.: 522 80 91 - Fax: 523 38 32

Precio número atrasado: 400 ptas.

México abre su mercado, y los Estados Unidos irrumpen en él

Tom Barry *

Las alambradas se extienden hasta donde alcanza la vista a lo largo de la línea que separa México de los Estados Unidos. La frontera, que tiene más de 2.000 millas desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, separa dos naciones notoriamente desiguales. En ningún otro lugar del globo una nación próspera comparte una frontera tan larga con un país pobre. La alambrada entre los dos vecinos señala dónde finaliza el mundo industrializado y comienza el subdesarrollado Tercer Mundo.

En México, los boquetes que abren paso a través de la frontera son llamados *puertas*. Estas *puertas* permiten el acceso ilegal a la próspera sociedad que se encuentra al otro lado. Precipitándose a través de las aberturas en la alambrada, millones de mexicanos han llegado a los Estados Unidos en busca de oportunidades económicas; algunos, esperando poder asentarse permanentemente; otros, buscando empleo estacional y muchos, simplemente, queriendo comprar en los supermercados norteamericanos. Los agentes de la patrulla fronteriza (U.S. Border Patrol) vigilan desde el lado norteamericano, pero capturan sólo un pequeño porcentaje de todos aquéllos que cruzan ilegalmente.

Poner parches a los agujeros y contener el flujo de los pobres hacia el norte requiere la constante atención de la patrulla fronteriza. En la medida que la preocupación norteamericana acerca de la inmigración ilegal ha ido aumentando, la frontera entre ambos países se ha militarizado cada vez más. Helicópteros, sistemas de visión nocturna por infrarrojos, sensores electrónicos, etc... han sido incorporados a la batalla fronteriza.

Pero al mismo tiempo que un sistema de seguridad reforzado está tratando de restringir la migración humana, las iniciativas de los gobiernos norteamericano y mexicano están empujando las puertas económicas que separan los dos países. En nombre del "libre comercio" y la "integración global", las economías de los dos vecinos están cada vez más interrelacionadas.

Globalización: este es el momento

México y los Estados Unidos se encuentran en este momento en la "vía rápida" ("fast track") hacia un Acuerdo de Libre Comercio (ALC), que más adelante podría

* Tom Barry es norteamericano, fundador y director del Inter Hemispheric Education Resource Center de Albuquerque, Nuevo México. Tomado del Resource Center Bulletin, primavera de 1991. Título original: «México opens up. United States moves in». Traducción de José Antonio Sanahuja Perales.

integrar el comercio y la inversión entre los dos países, así como con Canadá. Las actuales negociaciones para el ALC siguen de cerca el acuerdo firmado en 1988 entre Canadá y Estados Unidos. Al igual que el acuerdo entre los Estados Unidos y Canadá, el ALC con México podría derribar muchas de las barreras económicas aún existentes entre las dos naciones vecinas, derogando cuotas de importación, aranceles excesivos y una legislación restrictiva para la inversión. En términos económicos, el comercio internacional y los flujos de capital deberían ser "liberalizados".

La liberalización de las relaciones económicas entre los Estados Unidos, Canadá y México no se produce aisladamente. Forma parte de una integración de mercados y capitales de alcance mundial. Con un cercano paralelismo a lo que fue el desarrollo de la corporación transnacional, la integración económica se caracteriza por una nueva división internacional del trabajo y el rápido flujo transfronterizo de capital, información y tecnología.

Esta integración económica global socavó al bloque socialista y aceleró su colapso. En el Tercer Mundo, entidades de crédito multinacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, junto con entidades crediticias bilaterales como la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (AID), han dirigido la cruzada para la integración económica.

Usando sus créditos y ayudas como palanca, las instituciones financieras internacionales han forzado a los frecuentemente reluctantes países del Tercer Mundo a adaptar sus propias estrategias de desarrollo a las demandas del mercado global. En la práctica, lo que se ha denominado "modernización" ha significado la adopción de una teoría neoliberal del desarrollo económico, la cual demanda el libre flujo del capital y el comercio. En la práctica, estas medidas promueven la inversión extranjera y una producción orientada a la exportación. Las "reformas" neoliberales también significan la apertura de las economías del Tercer Mundo a un incremento de las importaciones procedentes del mundo industrializado, incluyendo entre éstas los comestibles básicos.

La idea es que en el Tercer Mundo el desarrollo debería basarse en la satisfacción de las demandas del mercado externo más que las del interno. Para abrirse un espacio para sí mismos en la arena internacional, estos países deben aprovechar sus ventajas comparativas, que son los recursos que les permiten producir productos superiores con precios más bajos. En el caso de México, la mano de obra barata, los recursos naturales y el clima cálido son las ventajas comparativas respecto a los Estados Unidos.

México se incorpora al desfile

La independencia económica ha sido durante mucho tiempo un elemento clave en la estrategia mexicana de desarrollo. La explotación de los recursos naturales y de la mano de obra del país por una asociación formada por inversores extranjeros y la élite criolla local hizo estallar la Revolución Mexicana. Y fue la expropiación de las inversiones extranjeras en el petróleo, realizada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, lo que fijó el tono nacionalista de los subsiguientes planes de desarrollo económico y de la política exterior.

Para protegerse contra el poder del capital extranjero y estimular la industria nacional, México restringió la inversión extranjera y las importaciones. La inversión extranjera, por ejemplo, estaba limitada al 49% de los valores de una compañía, y las importaciones que competían con manufacturas locales fueron estrictamente limitadas. Esta estrategia de desarrollo nacional produjo resultados. Entre 1940 y 1970 México disfrutó una tasa media de crecimiento cercana al 6%. Con el respaldo de un fuerte sector público, México llegó a ser un país semi-industrializado. Al mismo tiempo que se fue industrializando, México fue capaz también de diversificar la producción agrícola manteniendo al tiempo la autosuficiencia en granos básicos.

Hacia los años setenta, sin embargo, la "edad de oro" mexicana estaba desvaneciéndose. La industrialización estaba perdiendo vapor y el declive de la producción per cápita significaba que el país estaba dependiendo cada vez más de las importaciones. Pero la crisis económica se pospuso debido a la espectacular entrada de créditos externos y al incremento de las ganancias petroleras. De cualquier forma, en 1982 la crisis emergió cuando los precios del petróleo se desplomaron y México se encontró sin la capacidad de enfrentar las obligaciones derivadas de la deuda. El gobierno, asediado, también descubrió que no podría encontrar en lo sucesivo los fondos necesarios para cubrir el creciente déficit fiscal.

Presionado por los prestamistas externos y por la élite económica local, el gobierno mexicano lanzó un programa de ajuste estructural orientado a la empresa que continúa hoy en día. Este programa neoliberal, que comenzó bajo la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988), ha crecido y se ha profundizado durante el presente gobierno, encabezado por Carlos Salinas de Gortari. Sus piezas clave son la liberalización del comercio, la promoción de la inversión extranjera, los incentivos a la producción para la exportación, la privatización de empresas estatales y las medidas de austeridad.

El proceso de "modernización" se ha ganado los elogios de Washington, la prensa extranjera y la comunidad empresarial internacional. Por su voluntad para reestructurar la economía y abrirla a inversores y comerciantes extranjeros, Salinas de Gortari es comúnmente reconocido como un líder modelo en el Tercer Mundo.

Las relaciones entre México y Estados Unidos nunca han sido mejores. Los pagos de la deuda han vuelto a su curso normal, el déficit fiscal se ha reducido, las exportaciones están creciendo, y la confianza de los inversores en México ha renacido. Pero hay otros signos que indican que no todo va bien en México. La pobreza está generalizándose, las importaciones están creciendo más rápidamente que las exportaciones, y la inversión privada doméstica está todavía estancada. En vez de la estabilización, como predijeron la mayoría de las "lumberas" extranjeras, México puede estar al borde de una nueva era de inestabilidad económica y política.

Dejando atrás a las mayorías

Con todo el entusiasmo extranjero hacia las reformas neoliberales y la integración económica de México, el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías pobres del país ha sido en gran medida olvidado o ignorado. Los defensores de la modernización económica aún pretenden que los beneficios del crecimiento terminarán "derramándose" hacia los sectores pobres. Pero después de casi una década de reformas conservadoras, las condiciones socioeconómicas muestran un marcado declive. En efecto, han sido los sectores más económicamente vulnerables de la población los que han sido más duramente golpeados por las medidas de austeridad y el ajuste estructural. Entre los indicadores del incremento de la pobreza y la desesperación del pueblo mexicano se incluyen los siguientes:

- * Desde 1979 la capacidad adquisitiva de los salarios reales ha descendido cerca de un 60%.
- * La concentración de la riqueza se ha acelerado en los años ochenta, de manera que los propietarios de negocios y los inversores incrementaron su participación en el ingreso nacional desde el 55% de 1981 hasta el 72% de 1989.
- * El salario mínimo en México es de 3,7 \$ US al día, y la mitad de los que tienen empleo son pagados con el mínimo o por debajo de éste.
- * Más del 50% de la fuerza de trabajo está desempleada o subempleada.
- * Debido a las nuevas medidas de austeridad, el gasto público en educación ha descendido desde un 5,5% del PIB hasta un 2,5% en 1988 (en un periodo en el que el ingreso per cápita estaba también descendiendo).
- * El gasto público en salud también ha descendido como porcentaje del PIB, desde el 2,5% de 1982 a menos del 1,5% al final de la década.

- * Las instalaciones de saneamiento siguen siendo inadecuadas, con el 56% de los hogares mexicanos carentes de suministro de agua potable.
- * Con dos tercios de la población subalimentada, México se ha convertido en una de las naciones con mayor desnutrición de América Latina, siendo considerado por las Naciones Unidas como país “de alto riesgo” en términos de nutrición inadecuada y de mortalidad infantil.
- * Un estudio reciente en el Estado de Querétaro reveló que sólo 2 de cada 10 estudiantes de enseñanza primaria y secundaria recibían una nutrición adecuada.
- * Durante los años ochenta el consumo per cápita de carne descendió más de un 30%, el de leche fresca el 21%, el de pescado el 28%, el de frijoles el 29% y el de maíz el 10%.

El Gobierno mexicano está obteniendo grandes elogios por parte de Washington y de la comunidad financiera internacional, pero su compromiso para devolver la deuda externa y cortar los servicios sociales está teniendo, claramente, un impacto devastador sobre los pobres del país. Refiriéndose a la política económica del gobierno de Salinas, Andrew Redding, del World Policy Institute, observó que: *“Un modelo de desarrollo que deja a la mayoría de la población sumida en la pobreza está predestinado al fracaso. Es simplemente imposible desarrollar una economía competitiva en el actual mundo de la alta tecnología con seres humanos desnutridos, enfermos y sin educación”*.

La dependencia alimentaria llega a México

Las empresas del Estado están siendo vendidas, el comercio entre los Estados Unidos y México ha mejorado, y la élite de los negocios está estática. Pero los pobres de México, el sector agrícola del país, particularmente el sistema de producción alimentaria, está sufriendo las consecuencias de la modernización neoliberal y el libre comercio.

Durante muchas décadas, el sector agrícola de México fue el que proporcionó las bases para el desarrollo mexicano. La Reforma Agraria y el apoyo gubernamental para los productos de grano garantizaron la autosuficiencia alimentaria del país. Desde 1940 hasta mediados de la década de los sesenta, la producción agrícola disfrutó de una tasa de crecimiento que duplicó la tasa de crecimiento poblacional, haciendo al país autosuficiente en la mayoría de los alimentos básicos. Aunque la tasa de crecimiento de la producción de cereales continuó sobrepasando el crecimiento poblacional desde los años sesenta a mediados de los ochenta, México se hizo cada vez más dependiente de las importaciones de alimentos.

Si la producción de grano estaba creciendo, ¿por qué el país se hizo menos autosuficiente? Un factor fue que los granos básicos para consumo humano fueron sustituidos por otros que se utilizan para alimentar ganado, siendo el sorgo el mayor culpable de esta sustitución. El maíz y los frijoles ocuparon una porción decreciente de las tierras arables del país en la medida que los agricultores empezaron a cultivar granos con precios más altos. La floreciente industria ganadera satisfizo así la creciente demanda de carne de los consumidores urbanos de la clase media y alta mexicana, al tiempo que suministró al mercado de exportación.

El segundo factor que explica la profundización de la dependencia alimentaria de México fue la espectacular expansión de las exportaciones no tradicionales para el mercado norteamericano. Como ha señalado David Barkin, economista agrícola, además de la sustitución del maíz por sorgo en la producción de grano, hubo una mayor sustitución aún de cereales por cultivos totalmente orientados a la exportación. Los beneficiarios de los mayores proyectos de irrigación del gobierno, grandes cultivadores en el noroeste de México, empezaron a producir tomates, melones y fresas para el mercado norteamericano.

Desde la década de los sesenta a mediados de los ochenta el volumen de importación de grano se incrementó veinticinco veces. Hoy, con el advenimiento de las reformas neoliberales y las iniciativas de libre comercio, las importaciones alimentarias han alcanzado niveles récord y la producción agrícola continúa cayendo.

La crisis agrícola se convirtió en una crisis financiera. A lo largo de la década las exportaciones agrícolas de México a los Estados Unidos se han incrementado a un ritmo rápido, pero las importaciones alimentarias han crecido a un ritmo mucho más rápido. En 1990 el país experimentó un déficit agrícola de 1,4 billones de US \$. Las importaciones agrícolas más importantes el pasado año incluían maíz, leche, azúcar, sorgo, frijoles y habas de soja.

En la medida que México abre sus fronteras, reduciendo cuotas de importación y aranceles, los pequeños agricultores se van encontrando en incapacidad de competir con productos agrícolas importados. Irónicamente, el más duro golpe ha sido para los cultivadores de sorgo. Estos cultivadores, que cambiaron la producción de maíz por la de sorgo para satisfacer el expansivo mercado interno de alimentación del ganado, están descubriendo ahora que el sorgo barato procedente de los Estados Unidos está socavando su mercado.

Las políticas de liberalización económica han situado a los cultivadores mexicanos en seria desventaja respecto a los granjeros norteamericanos, los cuales disfrutaban todavía de sustanciales subsidios y apoyos por parte del gobierno. Mientras que en Estados Unidos continúan los subsidios gubernamentales y los programas de apoyo a la agricultura, en México los precios base domésticos tanto para los granos básicos como para el maíz han descendido en un 40% durante los años ochenta y, sin embargo, los costes del fertilizante, la electricidad y el crédito han sobrepasado muy de lejos la tasa de inflación.

Las exportaciones agrícolas a México también se benefician de agresivos programas de mercadeo del Departamento de Comercio norteamericano. A ello se le suma que la Commodity Credit Corporation (Corporación de Crédito a las Mercancías de Exportación) (CCC) del Departamento de Agricultura facilita las exportaciones de grano a México con una financiación anual de más de 50 millones de US \$, más de la mitad de la cual es utilizada para adquisiciones de maíz. La mayoría de los granos importados por México dentro de programas del gobierno norteamericano van dirigidos a alimentar ganado y aves de corral.

En los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos también ha donado al gobierno mexicano entre 20 y 35 millones de dólares anuales en mercancías agrícolas. El sorgo, la leche descremada y la harina donadas son posteriormente vendidos por el gobierno al sector privado. La ayuda alimentaria es un apoyo al gobierno de Salinas de Gortari, al tiempo que sirve para expandir mercados para los productos norteamericanos.

En el pasado, el gobierno mexicano consideró la autosuficiencia alimentaria como parte del compromiso con la soberanía y la autodeterminación nacional. Aunque todavía está comprometido retóricamente con la seguridad alimentaria nacional, el gobierno ha ido abandonando a los pequeños agricultores, que son los que producen la mayor parte de los granos básicos del país. Los apoyos a los precios agrícolas han sido reducidos, el crédito cortado, y la asistencia técnica no ha hecho sino desaparecer.

La escasa asistencia gubernamental disponible se dirige mayoritariamente a la producción para la exportación. Esta política responde a las recomendaciones del Banco Mundial, por las que el gobierno de Salinas debería adoptar estrategias que "liberalicen la agricultura y que apoyen productos con valor comercial en vez de cultivos alimentarios".

Al enfocarse la atención del gobierno hacia la promoción de exportaciones, los pequeños campesinos han sido literalmente dejados en la cuneta. Tanto la infraestructura gubernamental como los canales de irrigación y las facilidades para el trans-

porte han sido dirigidas a los grandes terratenientes que producen verduras, fruta y ganado para el mercado norteamericano. Los pequeños agricultores, que practican agricultura de secano, se encuentran con que no pueden sobrevivir produciendo granos básicos por más tiempo al no contar con crédito, asistencia técnica o precios de garantía del gobierno. Como resultado, están abandonando sus erosionadas parcelas y se están sumando al flujo migratorio a las ciudades o a los Estados Unidos.

Bajo las nuevas reglas económicas, hay que competir en el mercado internacional para sobrevivir. Aquéllos que no tienen los recursos o la habilidad para ganar un espacio en el mercado son empujados a un lado. En México, como en otros países del Tercer Mundo que optan por una filosofía de desarrollo neoliberal, esto significa que la entera población campesina —un tercio o más de la población de México— está siendo dejada simplemente al margen de la ecuación del desarrollo. No sólo se trata de una tragedia de proporciones masivas; tampoco es de buen sentido económico a largo plazo.

Si México quiere lograr un desarrollo sostenible, debe encontrar vías para expandir el mercado interno y explotar la capacidad productiva de las áreas rurales y de su población. Si no es así, México se puede encontrar pronto sin capacidad para afrontar el pago de la factura de la importación de alimentos, y con la rebelión popular fraguándose en el campo. Un artículo reciente en "Business México" reconocía este argumento: *«Para que México llegue a su madurez, el desarrollo rural debe ser una prioridad. Es el eslabón más débil».*

CRISIS DE LA TIERRA Y CRISIS ALIMENTARIA EN MEXICO

- * El déficit en el comercio agrícola de México está aumentando constantemente, y en 1990 el país gastó más de 4,5 billones de dólares para adquirir productos alimenticios, mayoritariamente procedentes de los Estados Unidos.

- * El pasado año México importó más de 400 libras de alimentos por cada adulto, las importaciones ascendieron al 40% del consumo doméstico de frijoles, el 25% de maíz, y el 30% de azúcar.

- * Dos tercios de la tierra arable de México está severamente erosionada, y sólo el 25% es irrigable.

- * La producción agrícola y ganadera se incrementó a una tasa media de 1,3% por año durante la década de los cuarenta, comparado al 3,3% de los setenta.

- * La tierra cultivable dedicada a los productos alimentarios ha descendido desde un 71% en 1955 hasta un 50% en la actualidad.

- * El gasto gubernamental en agricultura descendió en 1990 al punto más bajo en los últimos 20 años, y durante los ochenta se redujo más de un 70%.

- * En los años ochenta los créditos de la banca estatal canalizados hacia la agricultura se redujeron en un 55%; mientras tanto, los precios de garantía fueron eliminados para ocho productos básicos y el coste de los insumos agrícolas subió un 116%.

México: se vende

Una pieza central del esfuerzo del partido en el gobierno para estabilizar la economía mexicana ha sido atraer la inversión extranjera. El Plan Nacional de Desarrollo anunciado por el gobierno de Salinas tiene como objetivo duplicar la inversión extranjera al finalizar su periodo de gobierno, en 1994, llevando la inversión extranjera hasta el 25% de la inversión total.

Para hacer más atractiva la inversión en México, el gobierno ha liberalizado su

legislación sobre inversión extranjera, permitiendo el 100% de propiedad foránea en la mayor parte de los sectores de la economía. Esto ha significado la apertura del sector financiero a la inversión externa, y un proceso de venta de numerosas corporaciones del Estado a inversores privados. Varios sectores de la economía, incluyendo la lucrativa y altamente simbólica industria del petróleo, todavía se consideran restringidos para la inversión extranjera. Pero tal y como progresan las conversaciones para el acuerdo de libre comercio y evoluciona el programa neoliberal de Salinas, es probable que estos sectores serán abiertos también a los inversores externos.

Los intereses de los inversores extranjeros son ya considerables. Quince de las cincuenta compañías más grandes del país son filiales de corporaciones transnacionales, y más de setenta de las 320 empresas más importantes son de propiedad norteamericana. La inversión extranjera está dominada por los Estados Unidos, cuyas compañías ostentan el 63% de los cerca de 30 billones de US \$ del monto total de la inversión extranjera. Los Estados Unidos tienen, incluso, una mayor participación en el comercio exterior de México. Aproximadamente el 70% de las exportaciones mexicanas van a los Estados Unidos, y el 70% de las importaciones mexicanas proceden de su vecino del norte.

Los otros países que tienen las inversiones más importantes son Gran Bretaña, Alemania y Japón. Aunque cabe esperar que los Estados Unidos mantengan una posición dominante, Japón está incrementando rápidamente sus inversiones, especialmente en industrias estratégicas como el acero y el transporte de petróleo. A lo largo de la frontera los inversores japoneses también están creando su propio espacio. Las maquiladoras de Sony y Sanyo en Tijuana hacen de esta ciudad el mayor centro de producción de aparatos de televisión del mundo.

El espectacular programa de privatización y desregulación del gobierno ha llamado la atención de los inversores extranjeros. Las firmas extranjeras se están moviendo rápidamente dentro de otros sectores de la economía del país, como el acero, el petroquímico, financiero, minero, turístico y de transporte. En agricultura, los ingenios azucareros, las plantas de tabaco, las compañías de procesamiento de alimentos de propiedad estatal han sido puestas en venta. CONASUPO, la corporación estatal creada para proteger a los pequeños agricultores y a los consumidores de bajos ingresos, ha vendido recientemente varias plantas de procesamiento de alimentos al conglomerado anglo-holandés Unilever.

Durante la administración de La Madrid, la inversión norteamericana en México se duplicó. Continúa incrementándose firmemente pero todavía está lejos de lo que el gobierno de Salinas de Gortari espera atraer con sus medidas de liberalización. Buena parte de la inversión extranjera que llega al país no es nueva inversión productiva sino que son compras de corporaciones estatales y canjes de deuda por activos (debt-for-equity swaps). Aunque muchos inversores extranjeros han depositado ya su dinero, otros muchos están, aparentemente, esperando hasta que el gobierno modifique todavía más la legislación sobre inversión extranjera, y hasta que el programa de privatización se extienda a todas las empresas estatales, incluyendo las compañías ferroviarias y petroleras del Estado. La firma del Tratado de Libre Comercio este año o el siguiente también contribuirá a incrementar los flujos de inversión externa.

Maquilas y "comida basura"

Inmediatamente después de la industria petrolera y la turística, la fuente de divisas más importante son las plantas maquiladoras. Las maquilas son plantas manufactureras que producen para la exportación, localizadas en su mayor parte a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, y que utilizan insumos norteamericanos para el ensamblaje de productos terminados destinados al mercado norteamericano y a

otros mercados extranjeros. Hay más de 1.700 plantas, la mayoría de las cuales son de propiedad norteamericana, que dan empleo a cerca de medio millón de mexicanos.

La mayor parte de las más grandes compañías manufactureras de los Estados Unidos tienen plantas de ensamblado en México, donde pueden ahorrarse más de 15.000 US \$ por trabajador en salarios anuales si consideramos que el coste mensual por trabajador en México es de 120 US \$ incluyendo seguros, y que los empleadores en los Estados Unidos pagan 1.400 US \$ o más. Para aumentar los beneficios, las firmas estadounidenses han incrementado el número de plantas que operan al sur de la frontera. General Motors, el monstruo de las maquiladoras, tiene 30 plantas orientadas a la exportación en México. Los salarios mexicanos son tan bajos que incluso en lugares como Taiwán se están cerrando factorías que después se reestablecen en México.

Los restaurantes de comida rápida (fast-food) han surgido en México como hongos. Kentucky Fried Chicken (propiedad de PepsiCo), que vendió en México más de 30 millones de piezas de pollo el pasado año, se ha establecido ya en 52 lugares. El propietario de una nueva franquicia de Arby's, la última cadena de comida rápida que se ha desplazado a México, ha señalado que las franquicias de comida rápida norteamericana son la "ola del futuro". Quizás es una exageración, pero las estadísticas están de su lado. Un estudio reciente reveló que mientras que el 82% de las franquicias norteamericanas de comida rápida tienen éxito, sólo el 14% de los nuevos restaurantes independientes sobreviven.

Las franquicias son comunes también en la industria turística, la segunda mayor fuente de divisas del país. Hyatt, Stouffer y Sheraton son nombres prestigiosos en el sector hostelero en México. Los recientes cambios en la ley de inversiones permiten ya a las firmas norteamericanas quedarse con el 100% de la propiedad en la industria turística, e invertir en propiedades costeras. Hilton, que había abandonado México debido a sus restrictivas regulaciones para la inversión, ha vuelto al país y está planeando el mayor complejo hotelero de Cancún.

La reciente adquisición de Gamesa, el mayor productor mexicano de galletas y bizcochos, por parte de PepsiCo, ha dejado pasmados a muchos mexicanos y se ha convertido en un símbolo del avance de las compras extranjeras en la industria mexicana. Gamesa ha sido integrada en la división alimentaria de PepsiCo, Sabritas, que produce los omnipresentes snacks salados que consumen millones de mexicanos. Con su adquisición de Gamesa, PepsiCo domina ya el negocio de la "comida-basura" en México.

No sólo está en manos extranjeras el negocio de la "comida-basura". Todo el sector alimentario está virtualmente controlado por corporaciones transnacionales. Nestlé, la compañía alimentaria más grande de México, junto con empresas de nombre tan familiar como Continental Foods, Beatrice y Unilever, producen los alimentos envasados y las bebidas que cada vez son más consumidas por los mexicanos. No sólo es preocupante que sean firmas extranjeras las que controlen esta importante industria, sino también que estas transnacionales estén importando los costosos hábitos alimenticios del mundo industrializado en este pobre y desnutrido país.

Desde que el comercio se ha liberalizado, las industrias domésticas están amenazadas de extinción. Un estudio reciente reveló que sólo 6.500 de los más de 100.000 manufactureros del país están equipados para enfrentarse a la competencia extranjera, por lo que muchas de estas industrias no competitivas colapsarán al afrontar el incremento del comercio y la inversión externa.

Mientras que en México se están perdiendo industrias locales al aumentar el comercio y la inversión extranjera, en los Estados Unidos se están perdiendo tanto industrias como empleos. Muchas factorías norteamericanas han cerrado sus plantas a lo largo de todo el Rust Belt (1) y se han ido a México para aprovechar las ventajas

de la mano de obra barata. Entre las compañías que han transferido sus operaciones a México se incluyen Litton Industries, Westinghouse, Sunbeam, Rockwell y Xerox.

Y no sólo es la industria manufacturera la que se está trasladando hacia el Sur. A lo largo de muchos años, empresas agroindustriales norteamericanas como Del Monte, Anderson Clayton y Bird's Eye han controlado la producción de frutas y verduras en el norte de México. Recientemente, sin embargo, estas mismas firmas, u otras como Green Giant, han extendido sus operaciones en México, al incluir plantas de enlatado y congelación. Atraídos por la mano de obra y las recientemente relajadas regulaciones comerciales y de inversión, las compañías están cerrando sus envasadoras en California y están trasladándolas a México. La reciente transferencia de la planta de congelación de brócoli de Green Giant desde Watsonville, California, hasta el Bajío, en el centro de México, dejará a la compañía un ahorro en salarios que alcanza los 4,5 millones de US \$ al año.

Las compañías industriales que se trasladan hacia el Sur han llevado consigo, mayoritariamente, sólo aquellas partes de sus procesos que son más intensivos en trabajo. Pero esto comenzó a cambiar en la década de los ochenta. La industria del automóvil está utilizando ahora la más avanzada tecnología y automatización en sus operaciones extensivas en México. Ford y Nissan han anunciado, recientemente, la ampliación de sus factorías en México, que además de abastecer el mercado mexicano también exportan a los Estados Unidos.

De acuerdo con el gerente de una fábrica de motores en México, la planta es un modelo de globalización, ya que une «*gerencia norteamericana, tecnología europea, sistemas de fabricación japoneses y trabajadores mexicanos*». Además de las plantas automovilísticas, otras fábricas que están utilizando la más moderna tecnología y automatización producen cámaras Kodak, ordenadores IBM y electrodomésticos Whirlpool.

Globalización *versus* una estrategia mundialista

Aunque el Acuerdo de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos todavía no ha sido firmado, existe un acuerdo *de facto*. En los pasados ocho años el gobierno mexicano ha reestructurado y liberalizado su economía accediendo, al mismo tiempo, a acuerdos bilaterales de comercio con los Estados Unidos. La integración económica entre ambos países está progresando a un paso rápido, en la misma forma que está avanzando un proceso de globalización generalizado.

La oposición a la globalización, tanto en los Estados Unidos como en México, está en buena medida desfasada respecto a la cambiante estructura del mercado mundial, ya que se ha basado en atrasadas fórmulas nacionalistas. La campaña "Buy American" (Compre norteamericano) en los Estados Unidos, por ejemplo, ignora la dura realidad de que la mayoría de las corporaciones norteamericanas son transnacionales que han mostrado escasa lealtad a los trabajadores estadounidenses. En México, la retórica nacionalista y antiimperialista a menudo obscurece el grado en el que la propia élite política y empresarial del país ha vendido los intereses de las clases pobres y trabajadoras.

Mejor que una simple reacción defensiva ante la globalización del comercio y del capital, muchos grupos de ciudadanos a ambos lados de la frontera están reconociendo que la globalización ha de plantearse en sus propios términos. En lugar de enfrentar a los trabajadores norteamericanos contra los trabajadores mexicanos, el proceso de globalización puede ser utilizado para insistir en que los derechos laborales (de formar sindicatos, recibir un salario decente, trabajar en un medio ambiente seguro) sean respetados a ambos lados de la frontera. Igualmente, mejor que dejar que las empresas eludan la normativa ambiental llevando sus negocios y sus residuos al otro lado de la frontera, los grupos ambientalistas están insistiendo en que exista normativa y que sea respetada a ambos lados de la línea fronteriza.

Tal y como se está desarrollando, la globalización significa que las corporaciones y los mercados ya no son obstruidos por vallas fronterizas o regulaciones gubernamentales. El capital viaja libremente allá donde pueda explotar más. De cualquier modo el proceso de integración global, también representa una oportunidad para llevar a cabo lo que algunos activistas sindicales están llamando “una estrategia mundialista”. Esta es, esencialmente, una versión de la solidaridad internacional; la estrategia mundialista exige la inclusión de cláusulas sobre los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y la seguridad alimentaria en los nuevos acuerdos comerciales.

Este es, también, el desafío que aguarda en la frontera entre México y los Estados Unidos.

NOTAS

(1) Rust Belt: El gran “cinturón” industrial norteamericano, que abarca los Estados del noreste y del centro de los EE.UU., particularmente en torno a los Grandes Lagos. Se asocia con industrias en declive, por oposición a la nueva industria informática y de alta tecnología de, por ejemplo, Silicon Valley, California (Nota del traductor).

LECTURAS ADICIONALES

Jeremy Brechter y Tim Costello: «Labor goes global: Global village vs. global pillage», *Z magazine*, enero 1991.

Andrew Reding: «México under Salinas: A facade of reform», *World Policy Journal*, otoño de 1991.

SourceMex (Base de Datos Latinoamericana, Universidad de Nuevo México).

Zaire, al borde del caos

Tshimpanga Matala Kabangu *

Zaire: un enfermo en el centro de Africa

El cambio de las políticas estratégicas en el mundo tras los cambios en Europa del Este, sigue teniendo importantes repercusiones en la mayoría de los países de Africa al Sur del Sahara. Cansados de las estructuras políticas monolíticas incapaces de llevar el desarrollo económico y social tan necesario, los pueblos de Benín, Congo, Malí, Camerún, Zambia, Zaire... reivindican actualmente el pluralismo político como única vía para reestablecer un estado de derecho en Africa.

Situado en el centro de Africa, bajo el Ecuador, con una superficie de 2.345.409 Km², Zaire es un mosaico de pueblos que conforman una población de aproximadamente 38 millones de habitantes. Tiene 9.165 Km de fronteras. Su extensión equivale a 80 veces la de Bélgica de modo que, como un ratón, Bélgica se fue a colonizar a un Mamut. Zaire es uno de los pocos países en el mundo que reúne casi todas las riquezas minerales conocidas (cobre, cobalto, uranio, diamantes, estaño, manganeso, petróleo...). Sin embargo, esta dotación tan generosa de la naturaleza no beneficia a su pueblo, ya que es uno de los más pobres del mundo con una renta anual per cápita de 160 dólares, soportando difícilmente una deuda externa de 9.000 millones de dólares (1). La riqueza de Zaire constituye al mismo tiempo la pobreza de su pueblo; una paradoja que se justifica en parte por la implicación de grandes intereses occidentales en el país, que han llevado a la corrupción de sus dirigentes olvidando las prioridades y necesidades del pueblo.

De una dictadura corrupta a una democracia vacilante

El 30 de junio de 1960, Zaire termina con la colonización belga y cobra su independencia en un clima político cargado de tensiones sociales y luchas entre partidos políticos. En 1961, Patrice Lumumba, el héroe de la independencia, es asesinado en circunstancias hasta hoy poco claras. La ideología revolucionaria de Lumumba era un peligro para los intereses occidentales, sobre todo belgas, en Zaire. Desde 1960 hasta 1965, el país atraviesa una situación de inestabilidad política caracterizada por las repetidas crisis gubernamentales, los disturbios en Kisangani (Norte) y las tendencias secesionistas de Moise Tshombé en Katanga (Sur) —hoy Shaba—. Si bien en el año 1965 la situación política tendía a estabilizarse, se produce el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1965, a iniciativa del entonces coronel, Mobutu Sese Seko, que derrocó al Presidente Kasa Vuvu y, progresivamente, redujo las prerrogativas del Ejecutivo y del Parlamento, concentrando poco a poco todos los poderes en sus

* Profesor en la Universidad de Lubumbashi - Zaire.

manos hasta asentar un régimen dictatorial bajo un Partido único: el "Movimiento Popular de la Revolución" (MPR), hoy de la Renovación, con la ideología de la "autenticidad", proponiendo ésta la potenciación de los valores ancestrales de los zaireños en su vida cotidiana. A este concepto, se agregó la doctrina sin ningún contenido: el "Mobutismo", definido como "el conjunto de ideas y enseñanzas de Mobutu". Esta concentración y personalización del poder en el ya Mariscal Mobutu, fomentó el seguidismo y el oportunismo con la consiguiente corrupción en todos los sectores (2).

Desde 1973, el país vive una crisis económica sin precedentes. Actualmente, la inflación alcanza el 3.000%, determinando así que el sistema bancario funcione con enormes dificultades debidas a la disminución del ahorro público. La producción industrial está en caída ante la reducción de inversiones. La gran industria minera "GECAMINES" atraviesa también momentos de crisis debida, por una parte, a la caída de la producción del cobre (de 450.000 toneladas en 1985 pasó a 230.000 en 1990, agravada por una desestabilización de los precios internacionales), y por otra parte, a la mala gestión, así como a retiradas continuadas e injustificadas de beneficios de los fondos de la empresa por parte del Presidente Mobutu.

El 24 de abril de 1990, por el aumento de las tensiones sociales y las reivindicaciones masivas a favor del pluralismo político, Mobutu proclama la 3.^a Era. República que concibe como una República democrática, anuncia la apertura democrática para el país, la supresión del Comité Central —un órgano político que aglutinaba más de 150 miembros, en su mayoría antiguos adversarios políticos del Presidente, que supo darles una ocupación al crear esta institución costosa para apaciguar así los ánimos y mantenerlos en su engranaje político y conservar el clientelismo—. Se suprimió también el Buró Político, otra institución de la misma familia que el Comité Central.

Así, se iniciaría un proceso de reformas constitucionales y la creación de partidos políticos para futuras elecciones. Esto provocó una gran euforia y entusiasmo. La oposición, hasta entonces clandestina, surgió con tal fuerza que superaba las previsiones del propio Mobutu. La prensa recobraba la vitalidad perdida hacía más de 25 años. Para volver a controlar la situación, Mobutu procedió con sus habituales maniobras de intimidación y terror. En este contexto, fueron asesinados los días 11 y 12 de mayo de 1990, numerosos estudiantes de la Universidad de Lubumbashi por el "delito" de haberse manifestado a favor de los partidos de la oposición.

Actualmente la oposición se encuentra representada en la Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS), de Etienne Tshisekedi; la Unión de los Federalistas y Republicanos Independientes (UFERI), de Nguza Karl I Bond; y el Partido Demócrata y Social Cristiano (PDSC), de Joseph Ileo. Estos tres partidos con otros de menor importancia —cerca de cincuenta— forman un frente común llamado la "Unión Sagrada", cuyo principal objetivo es derrocar a Mobutu (3), y alejarle del poder, ya que en este Presidente se resumen todos los males del país, o mejor dicho, él mismo los encarna.

El proceso democrático anunciado el 24 de abril de 1990 tiene dificultades en concretarse. La última salida fue la convocatoria de una conferencia nacional soberana, una reunión de todas las fuerzas nacionales: partidos políticos, iglesias, grupos socio-profesionales e instituciones políticas, para debatir la gestión anterior, los errores y lecciones a retener para las futuras instituciones democráticas del país. Esta Conferencia abrió sus puertas el 7 de agosto de 1990, pero no siguió avanzando, ya que la representación pro Mobutu era fraudulentamente mayoritaria con la creación de Partidos Políticos satélites —"Partidos del consenso"—, financiados por el propio Mobutu, apoyando los objetivos del MPR. La convocatoria de esta conferencia nacional ha sido siempre controvertida. La exige la oposición, mientras que Mobutu la rechaza, ya que puede convertirse en un tribunal y sacar a la luz los escándalos ocultos del régimen de Mobutu. Los titubeos por los que ha pasado la celebración de

esta conferencia, así como los distintos aplazamientos, han hecho aumentar las tensiones sociales y enfurecer a la población que veía en la conferencia una esperanza y el inicio de un verdadero proceso hacia el fin de la crisis política y económica. El último episodio fue la confusión del día 20 de septiembre, que llevó otra vez más a la suspensión de dicha conferencia y a la retirada de la Iglesia Católica —decepcionada por la falta de diálogo y madurez entre los representantes del MPR y los partidos de la oposición—.

En esta situación y con la inflación disparada, la paciencia se agotó y los primeros en demostrarlo fueron los soldados de la 31ª Brigada de Paracaidistas que, los días 23 y 24 de septiembre de 1991, se dedicaron al saqueo de la capital Kinshasa, con el pretexto de no haber cobrado su sueldo. Estos fueron apoyados por la población civil. Todo el comercio fue destruido, tanto el sistema de producción como el de distribución. Todo esto augura momentos aún más difíciles para la economía de este país ya en bancarrota.

Mobutu y sus aliados occidentales

La intervención francesa en Zaire con el envío de 600 soldados, y la belga con cerca de 1.050 soldados, parecen haber salvado al régimen de Mobutu, aunque ambos gobiernos europeos justifican esta presencia de sus militares en Zaire como una medida para proteger y repatriar a sus conciudadanos amenazados por los disturbios. En Zaire, viven 10.500 ciudadanos belgas y 3.500 franceses.

El amotinamiento del 23 de septiembre hubiera puesto en enormes dificultades a Mobutu si no hubieran intervenido Bélgica y Francia. Y no es la primera vez que ambos gobiernos intervienen en este país. La historia nos recuerda otras interferencias similares en 1977 y 1978, tras la invasión de la región minera de Kolwezi por los antiguos soldados de Katanga, refugiados hasta aquellos momentos en Angola. Estas expediciones militares occidentales en África son ya una costumbre de mal gusto y confirman la corriente que defiende el imperialismo y la colonización todavía existentes en el continente africano, administrados indirectamente por algunos "pseudo presidentes" africanos, verdaderos representantes de los intereses occidentales en la región. No podemos olvidar el caso de la intervención y permanencia francesa en Chad, en Gabón, en Centroáfrica...

En cuanto a Zaire, hasta hace poco, este país tenía para el Occidente un valor estratégico incontestable. Soviéticos y cubanos instalados en Angola podían desestabilizar Zaire, considerado el muro de contención a la amenaza soviética en la región centroafricana. La participación del régimen de Mobutu en las operaciones de apoyo a la Unión para la Independencia Total de Angola (UNITA) de Jonas Savimbi, —de ideología pro-capitalista y enfrentado en una guerra civil contra el régimen pro-soviético de Angola—, coincidía con la voluntad y los intereses del Occidente. Así fue respaldado a pesar de mantener en Zaire una dictadura sangrienta. En efecto, Zaire está entre los primeros países del mundo donde la violación de los derechos humanos es todavía una práctica constante. El informe mundial sobre el desarrollo humano publicado este año por el PNUD clasifica a este país y a Suráfrica como los países de ese continente donde las libertades fundamentales están menos desarrolladas (4).

Así, ante las repetidas violaciones de los derechos humanos en Zaire, los aliados occidentales de Mobutu cerraban los ojos, ya que importaba más el argumento de la amenaza soviética en la región que solía esgrimir Mobutu —que se consideraba como única garantía de los intereses occidentales en la zona (5)—. Hoy, este argumento relativo a las políticas geoestratégicas de los países occidentales, ha perdido vigencia. Soviéticos y cubanos se han retirado de Angola y el Presidente de ese país, Eduardo Dos Santos y su opositor Jonas Savimbi, reunidos en Lisboa, han firmado hace poco acuerdos de paz. La URSS no constituye más la amenaza político-militar, por lo que Mobutu parece haber perdido su importancia para sus aliados occidentales.

No obstante, soldados franceses y belgas fueron enviados a Zaire, y ambos gobiernos siguen justificando esta presencia para proteger a sus conciudadanos. En estas circunstancias, la protección a ciudadanos franceses y belgas, sirve pretendiéndolo o no, como paraguas protector al ya impopular régimen de Mobutu. Sin embargo, el gobierno francés, que no coincide totalmente con el gobierno belga, —éste último suspendió la ayuda a Zaire tras el asesinato de los estudiantes de la Universidad de Lubumbashi—, opta por una vía no violenta y ha enviado tropas para evitar un cambio sangriento en Zaire. El Presidente Mitterand ha exigido a Mobutu una verdadera apertura democrática en el país, con un gobierno de unión nacional responsable y capaz de instaurar verdaderas estructuras democráticas.

Para descongestionar esta crisis política y encarrilar el difícil proceso democratizador, Mobutu se reunió con la oposición y nombró el 29 de septiembre a su opositor más intransigente, Etienne Tshisekedi, como Primer Ministro, que se encargaría de formar un gobierno de crisis. Este nombramiento parece desbloquear la crítica situación política. Mobutu exigía el control de la mitad de las carteras, y las más importantes, incluidas la Defensa y los Asuntos Exteriores, mientras que Tshisekedi quería mantener el control sobre todas las carteras y reducir así las prerrogativas presidenciales a funciones casi honoríficas. Después de dos semanas de largas negociaciones, cuatro carteras son atribuidas al Partido del Presidente (Asuntos Exteriores, Defensa, Planificación y Minas) dentro de un gobierno de 22 ministros dominado mayoritariamente por los representantes de la UDPS que mantienen siete carteras, incluida la de Hacienda. Como anunciaba reiteradamente, el Primer Ministro Tshisekedi se compromete a realizar la reforma profunda de la Constitución, en vigor desde abril de 1980, y se propone desconcentrar todos los poderes presidenciales.

Mientras tanto, Zaire vive momentos difíciles, la capital Kinshasa sufre ya carencias de alimentos y medicinas. Aparecen viejas enfermedades como el cólera, el sarampión y la enfermedad del sueño. Esta situación exige un trabajo intenso y reformas radicales si el país quiere evitar una catástrofe total.

NOTAS

(1) TREVOR, W. PARFITT & STEPHAN, P. RILEY: *The African Debt Crisis*, Routledge, London, 1989, págs. 75-98.

(2) BOISSONNADE, E.: *Le mal zaïrois*, Hermé, Paris, 1990, págs. 60-88.

(3) BRAECKMAN, C.: "L'UDPS prise au piège de la majorité numérique à la Conférence nationale", en *Le Soir*, 27 août 1991, pág. 5.

(4) PNUD: *Desarrollo Humano: Informe 1991*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991, pág. 56. Véase también Pierre YAMBUYA, *Zaire: L'abattoir*, EPO, Bruxelles, 1991.

(5) *Congo-Zaire*, Collection GRIP-Informations, Bruxelles, 1990, págs. 3-15. Véase también *Pile et Face, Bilan de la coopération belgo-zaïroise*, La Revue Nouvelle, Bruxelles, 1989.

Fundamentos sociológicos del proyecto democrático haitiano

Gerard Pierre-Charles *

La victoria del Padre Jean-Bertrand Aristide en las elecciones del 16 de diciembre pasado sorprendió a numerosos actores de la escena política haitiana, y con más razón, a muchos observadores extranjeros.

Sin embargo, un análisis de este acontecimiento, dentro del contexto global haitiano, muestra que constituyó la culminación lógica de los procesos sociales y políticos que ha vivido este país en los últimos años. En particular desde la salida de Jean Claude Duvalier en febrero de 1986.

La correcta apreciación de estos procesos, en su contenido y su forma específica, y en función de los datos de la evolución del país, permite comprender claramente el encadenamiento que existe entre ese triunfo electoral y los movimientos profundos que han sacudido a esta sociedad durante la última década.

En forma liminaria, y con el riesgo de una síntesis excesiva de los rasgos que han caracterizado esta compleja transición de una dictadura fascista a una democracia, proponemos las siguientes hipótesis explicativas, que complementan al análisis de los primeros años de esta transición, que hiciéramos hace tres años: Hacia una crítica de la acción de los sectores democráticos -1986-1987-, In Forum sur la democratie, Cresfed, 1988.

1. La lucha anti-totalitaria

Fue el motor primordial de la sensibilización y la movilización del pueblo durante este quinquenio, y da a la participación política un carácter amplio y sostenido. Por la violencia de la opresión que ha golpeado durante estas tres décadas a todos los sectores sociales, el sentimiento y el combate anti-totalitario ha recubierto todo el territorio nacional y todos los sectores sociales: la burguesía, el campesinado, las clases medias, la población de los arrabales.

Este combate se alimentó en la sobrevivencia y el renovamiento, después de la partida de los Duvalier, de los aparatos y prácticas de represión y corrupción incrustados en la administración pública y en el Ejército. Este combate cobró un carácter de "rechazo" total, de imposible conciliación entre la democracia y el sistema encarado por los Tontons Macoutes. Eran vistos con recelo todos aquéllos del sector democrático que por negarse al enfrentamiento pretendían llegar a un compromiso con las fuerzas neo-macoutes. Una relación de exclusión recíproca se estableció

* El autor pertenece al Centre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour le Developpement

entonces, en los sectores identificados como duvalieristas y la mayoría de la población políticamente activa. Esta línea de demarcación atravesó la sociedad durante toda esta transición.

2. La lucha para la democracia

La sensibilización y la conciencia democrática de las grandes masas urbanas y rurales aumentó tanto como se afirmaba la lucha antiduvalierista en 1983-1986. A partir de febrero de 1986, después que desaparecieron los instrumentos y los símbolos más significativos de la dictadura, el pueblo se sumergió en el extraordinario espacio de libertad conquistado. La libertad de palabra, la exaltación y la defensa apasionada de los derechos del hombre y de los derechos del pueblo, la acción educadora de las estaciones de radio así como de las organizaciones sociales y políticas permitieron reforzar la sociedad civil. El creciente aumento de la participación de la población en la lucha para la democracia dejó impreso en esta última un carácter nacional. Todas las clases sociales, desde la burguesía liberal hasta los marginados de Cite Soleil, se unieron en el combate democrático.

El voto masivo de la Constitución de 1987 y el impulso mayoritario hacia la participación electoral en noviembre de 1987 alimentaron la reivindicación generalizada en favor del advenimiento del "estado de derecho" para la instauración de una democracia representativa. Bajo la etiqueta de "sectores democráticos" se encontraron unidos en el mismo combate los más diversos sectores políticos. Se unieron contra las tentativas del Ejército y de los sucesivos gobiernos provisionales para frustrar la realización de elecciones "libres, honestas y democráticas". Una ilustración particularmente significativa de esta coincidencia en el combate democrático, fue la lucha contra el general Abril, en marzo de 1990, que movilizó a todos los sectores políticos con el apoyo y la complacencia de las potencias de tutela.

3. El dinamismo de los movimientos sociales

Constituyó la instancia más profunda de las reivindicaciones y de las mutaciones en curso en la sociedad haitiana. Esta sociedad había permanecido, durante mucho tiempo, condicionada por el terror, la resignación o la resistencia muda. Todos los sectores sociales tenían su pliego de demandas, las mismas que se manifestaron en los más diversos movimientos reivindicativos, de carácter local, regional, o nacional. Tales luchas económicas, sociales y culturales unieron a las diferentes clases de la sociedad. En ello tuvo una destacada influencia el trabajo de concientización realizado en las ciudades y campos, por "la iglesia popular", inspirada en la teología de la liberación, así como por demócratas de todas las tendencias.

Estas reivindicaciones expresan en su diversidad el impulso hacia "el cambio"; concepto que aparece reiteradamente en la mayoría de los discursos políticos con un contenido impreciso y variado:

- Cambio del Estado.
- Cambio de estructuras.
- Cambio del arcaísmo al modernismo, de la miseria al bienestar, de la injusticia a la justicia.
- Cambio en términos de participación de las mayorías, de descentralización administrativa.
- Cambio de discursos, de lenguaje e incluso de lengua.

Estos impulsos al cambio traducen el movimiento general de la sociedad hacia el desarrollo y la democracia participativa.

Surgen de las necesidades reales y de la elaboración de ideas que por madurez local, o influencia del vasto mundo, han imprimido en esta sociedad una dinámica de progreso, una búsqueda de bienestar, una aspiración profunda hacia la dignidad humana y a la afirmación nacional.

4. El fracaso del sistema

Este fracaso, se ha evidenciado en forma trágica durante los últimos 30 años de violencia, de terror y desprecio del hombre. La opresión política, la degradación de la producción y de las principales variables socio-económicas, la creciente desigualdad, el acentuado empobrecimiento de las masas, la corrupción, el envilecimiento de los valores morales, tantos componentes del sistema cuya concatenación en este contexto de la libertad de prensa no se le escapa a nadie.

Esta ostentación de vicios del régimen político y social dio lugar a la pérdida total de legitimidad. El pueblo llegó a cuestionar el sistema en su globalidad, su funcionamiento, sus estructuras, su discurso, sus relaciones internacionales.

Sin embargo, más allá de esta coyuntura, le pareció evidente a importantes sectores democráticos y populares que este fracaso institucional, en sus expresiones económicas, sociales y políticas, no se limitaría al presente. Está situado en una dimensión histórica a donde el régimen duvalierista es percibido como parte integrante del sistema político y social implantado desde la independencia, modernizado y reforzado en 1915.

Dentro de tal perspectiva que resulta evidente, el sistema no puede asegurar los medios de su propia reproducción. Las clases económicamente fuertes, surgidas en el marco o la sombra del sistema, no consiguen formular una alternativa modernizante, reformista, de naturaleza a renovar al sistema.

5. La crisis del Estado

Ya en los tiempos de la "cohesión totalitaria" del régimen de los Duvalier, resultaba clara la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de la sociedad y las aspiraciones del ciudadano. Con el proceso de desmoronamiento de la maquinaria gubernamental que prosiguió después de la partida del dictador, esta incapacidad se hizo cada vez más patente y fue puesta en evidencia por la perseverancia de las luchas cívicas que denunciaron y se opusieron a la administración neo-duvalierista y al militarismo en el poder.

En el contexto de esta degradación acelerada por la corrupción o por las presiones reivindicativas de la población, el Estado se reveló cada vez más impotente para ejercer sus funciones de poder, de gestión y de orientación políticas. Esta situación se observa en todos los niveles de la administración cívica. En el seno del Ejército, la división, los golpes de Estado, la ruptura de la jerarquía, tuvieron efectos disolventes.

De esta manera, la numerosa y omnipotente máquina estatal se convirtió en una institución arbitraria, ineficaz, roída por la corrupción, desprovista de toda legitimidad y de toda autoridad.

Esta crisis se manifiesta en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, por la incapacidad de la institución estatal para enfrentar la crisis social y los conflictos políticos, restaurar el orden y ofrecerle los servicios más elementales a la comunidad.

Al no poder renovarse frente a las reivindicaciones de la población, en favor de la democracia, de la modernización, de la justicia, el Estado tiende a entregar algunas de sus funciones a los organismos extranjeros de asistencia o directamente a las potencias de tutela. Tal realidad se hizo visible desde el gobierno del general Namphy hasta el de la señora Trouillot.

Tal situación de desmoronamiento y debilidad del Estado contribuiría a crear condiciones para que surgiera una solución alternativa a la crisis del Estado.

6. El fracaso de los partidos políticos

Estos partidos vienen ocupando el escenario político, desde hace 5 años, con todas las condiciones para poder asegurar su nacimiento, su crecimiento y su consti-

tución en verdaderas organizaciones políticas, capaces de guiar las luchas y reivindicaciones del pueblo. Sin embargo, por diversos motivos, durante el transcurso de esta transición, no pudieron identificarse con el movimiento histórico, tal y como se había desplegado, con su originalidad y sus características.

Un análisis profundo del sistema de partidos, de su génesis, su evolución, sus prácticas, su liderazgo, sus relaciones internacionales permitirá comprender mejor su trayectoria. Es conveniente preguntarse por qué no pudieron alcanzar sus objetivos, (y cuáles eran los últimos). Esta cuestión es tanto más pertinente en una coyuntura particularmente rica en términos de disponibilidad y de movilización cívica: miles de ciudadanos no pedían más que militar en estas organizaciones cuyos dirigentes tenían una imagen netamente favorable y un acceso ilimitado a los medios de comunicación.

El hecho es que estos partidos y sus líderes, no lograron reunir en su seno y en su actuar a la parte sustancial de "la población políticamente activa", políticamente sensibilizada, acostumbrada a hacer aunque sea la "política informal". Su capacidad de organización y de movilización se redujo y su clientela se limitó en términos electorales. Eso alimentó la ambición de generales en el poder (Namphy, Abril) y los impulsos aventureros de políticos tales como Manigat o Lafontant en busca de golpe de Palacio o de mascaradas electorales.

En el juego político han funcionado también "organizaciones populares", teniendo una influencia indeterminada pero real. Fuera de esas "organizaciones populares", (denominación confusa que escondía a menudo la realidad de grupúsculos débilmente organizados) una parte importante de la "población políticamente activa", lista para hacer huelgas y manifestaciones o para hacer pronunciamientos en la radio, no se dejaron llevar, no se identificaban con los partidos.

Parecería que estos últimos con la preocupación de no perder el poder o de no enfrentarse con los duvalieristas habrían dejado así a una parte del electorado. Este sector popular, hasta la candidatura de J. B. Aristide, no estaba dispuesto a participar en las elecciones y a votar en favor de los candidatos presentados por los partidos; actitud motivada por la percepción de parte de ese sector, de la opción oportunista de estos pretendientes al poder, o por su incapacidad para comprender en su complejidad, el contenido de este período de transición; o para captar la naturaleza de las reivindicaciones populares antimacoutes, antiduvalieristas, así como la realidad de los movimientos sociales reivindicativos.

7. La mutación en las instituciones

En primer lugar, la Iglesia Católica ha experimentado un proceso de resquebrajamiento, de cuestionamiento interno, de alteración en sus roles y funciones.

Después de haberse identificado totalmente con el duvalierismo, emprendido a partir de la visita del Papa a Haití en 1983, endereza su conducta para ponerse en la línea del cambio reclamado por el pueblo, de la cual el Papa se hizo el defensor. Al mismo tiempo, la base de la Iglesia, las comunidades eclesiales, inspiradas por la teología de la liberación se volvían cada día más combativas. Se identificaban con la lucha popular en favor de la democracia.

De 1986 a 1991, tales posiciones contradictorias y antagónicas en el seno de la Iglesia, estimuladas por el contexto de las luchas democráticas, se expresaron a todos los niveles (Nunciatura, Conferencia Episcopal, conferencia de los religiosos). Eso dio lugar al debilitamiento del rol tradicional de la Iglesia como sostén del statu quo y a la supremacía de las posiciones ideológicas y políticas más progresistas, promovidas por la base.

Estos procesos de cuestionamiento y de mutación de lo institucional se manifestaron durante la transición en diversas instituciones. Diferentes en su forma y en su contenido aparecieron en el Ejército, el cuerpo judicial, el consejo electoral,

teniendo como resultados el debilitamiento del “ancien régime” y la lenta emergencia de las condiciones para una nueva institucionalidad.

El Ejército ha sido estremecido a un punto tal que no han podido ser llevados a cabo los proyectos de modernización y de mayor subordinación concebidos por los Estados Unidos desde la caída de Duvalier. Tras 26 años de una coexistencia subordinada hacia los Tontons Macoutes, esta institución resultó afectada por las luchas cívicas que han atravesado la sociedad en pro de los derechos humanos, contra el militarismo y contra la restauración duvalierista. Las matanzas realizadas por el Ejército o con la complicidad del mismo, le han quitado toda legitimidad colocándolo en posición defensiva. Ha sido sacudido por múltiples conflictos de poder en la jerarquía, entre ésta y los sargentos, entre sectores fascistas y grupos democráticos, entre militares, profesionales y aquellos ligados a la droga, al contrabando de los asesinos conocidos y los incondicionales de Lafontant.

Esta dinámica de conflictos, de tensiones internas así como de presiones externas provenientes del pueblo o de las embajadas, tuvo por efecto romper la cohesión de cuerpo; a un punto tal que perdía totalmente su poder de imponer una “solución” a la crisis.

Pese a las violaciones al orden constitucional hechas por los militares desde su posición de poder, la Carta de 198, se ha venido imponiendo. Así ha logrado ejercer plenamente su papel el consejo electoral, en su originalidad democrática y representativa que la convierte en una institución autónoma, brotada de la sociedad civil y no subordinado al Ejército o al Ministerio del Interior.

8. Los avances de la conciencia cívica y de la organización

Estos avances han sido notorios durante este período de libertad. El espacio democrático se amplió a pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos para la restauración autoritaria; pese a la actitud despótica de los jefes de sección rural o de los comandantes de distrito, a pesar de las matanzas realizadas por los terratenientes o los tonton macoutes locales.

En particular, el rol de la prensa hablada fue decisivo y en menor medida a la acción de los partidos y de las organizaciones populares. La lucha cotidiana del pueblo hizo de este período una verdadera escuela de educación cívica y de conciencia política. La población, aun aquella de los lugares más alejados, se politizó considerablemente. Política informal que contribuye a caracterizar la coyuntura.

Estos progresos de la conciencia cívica han sido concomitantes con los pasos realizados en términos de organización; organización de carácter primario en las ciudades y sobre todo en los campos. Centenares, miles de pequeñas organizaciones aparecieron en todos los rincones del país. Estas organizaciones de carácter local, comunitario, cooperativo, cultural, barrial, agrupaciones de habitaciones rurales, comités de ciudadanos, constituyeron un tejido de solidaridad y de participación que reforzó la unidad civil haitiana y ensanchó potencialmente la sociedad política.

Esta realidad aumentó considerablemente la capacidad de respuesta de la población frente a la arbitrariedad. Al mismo tiempo le daba los medios para la elaboración y la instalación de una estructuración y de una participación alternativa en la vida política. La campaña electoral y las elecciones del 16 de diciembre lo demostraron. El levantamiento popular generalizado en el conjunto del país contra el golpe de Estado del 7 de enero ha sido una prueba elocuente.

9. El peso de lo popular cultural

Durante estas últimas décadas, importantes mutaciones de carácter sociológico han tenido lugar en Haití. La migración rural hacia las ciudades, en particular hacia la capital, ha cambiado considerablemente la composición social de la población

urbana. El peso relativo en la vida social de los sectores medios y acomodados ha disminuido de forma tanto más considerable cuanto las “élites” mulatas o negras, de nacimiento o de poder, ocupaban hasta recientemente de forma casi exclusiva el espacio político y social.

La participación política de poblaciones provinciales y rurales se hizo ya en los movimientos de huelgas y manifestaciones que acompañaron la caída de Duvalier. En el transcurso de estos años de lucha democrática, esta participación se generalizó, extendiéndose a las ciudades y secciones rurales.

En el contexto de la transición, esta realidad comenzó a tomar una correspondencia político-cultural. El peso de las poblaciones del campo y de los grupos de migración reciente, que ocupan los barrios pobres de los arrabales, se hizo sentir así como su participación y aporte en la lucha política, el discurso y la cultura políticas. Esas pulsiones no son inspiradas ni por el nacionalismo mercantil, ni por los dictados de la sociedad de consumo o las deformaciones de un modernismo insuflado por los medios de comunicación. Son la expresión de la economía informal, de la organización social, del hecho cultural haitiano, de la creación popular espontánea.

Esta emergencia de la cultura tradicionalmente oprimida se extendió a las poblaciones emigradas del “décimo departamento”. Por su composición social, su extracción mayoritariamente campesina o popular, estas poblaciones de Miami, New York, Montreal, Guadalupe, Martinica, Santo Domingo, reprodujeron los valores y la cultura política de su medio social de origen. Su condición de parias en el seno de la sociedad que los acoge, su experiencia en la discriminación racial y toda clase de ostracismo, han imprimido a sus expresiones un sello nacionalista cada vez más marcado. Las consecuencias de esta conciencia nacional de los emigrantes, refuerzan el peso y la participación nacional-cultural-popular en el país. La cultura política tradicional de la élite, o de los que tenían el poder duvalierista tuvieron que ceder posición frente a esta nueva realidad.

10. La no adecuación de los proyectos de las potencias de tutela

La realidad multidimensional de la tutela extranjera en el país, es tal que se ha consagrado en el uso, el término “potencias de tutela” para referirse a los países que le proveen ayuda financiera al Estado, asistencia alimentaria, asistencia militar al Ejército, asistencia técnica a la administración, asistencia humanitaria a la sociedad civil.

En el marco y a la sombra de esta tutela, las formas que ha adoptado la intromisión política en el proceso en curso en Haití han sido las más diversas.

En el itinerario sinuoso de esta larga transición, la cuestión de las elecciones ha constituido el principal elemento de contenido de esa práctica de asistencia, de solidaridad y de injerencia. Concebido en el sentido de la modernización y del renacimiento del sistema, esta política de injerencia, en todas las etapas de la transición, ha sostenido la necesaria realización de “elecciones libres, honestas y sinceras”. Tuvo que enfrentar o acomodarse a distorsiones y resistencias suscitadas por las fuerzas neodualieristas y militares. Estas, de Namphy a Manigat, de Abril a Lafontant, creyeron poder imponer su proyecto autoritario ejerciendo una cierta autonomía relativa o interpelando la complacencia de los tutores.

La política de las potencias de tutela fue marcada pues, con una doble posibilidad: el conflicto potencial o el acomodamiento frente a las fuerzas de poder locales. Estas actitudes se reflejaban en el plano electoral, por situaciones incómodas, frente a la necesidad de optar entre una opinión democrática, o sectores populares excesivamente desconfiados y los grupos paramilitares o duvalieristas que amenazaban la misma realización o la credibilidad de las elecciones.

En este contexto se produjo el llamado en favor de una asistencia de la ONU en el proceso electoral haitiano, formulado por los gobiernos de Abril y de Mine Trouillot en común acuerdo con ciertas embajadas.

La ONU estaba invitada para asegurar la credibilidad de las elecciones, que, según todas las previsiones, se iban a realizar con una participación limitada y con la amenaza de los macoutes. Ello ofrecía una puerta honorable a un proyecto electoral, que había tardado demasiado... Y apareció la candidatura de Aristide... y fue la avalancha imprevisible.

11. La avalancha electoral

El antecedente de la campaña y de la probable victoria de Gerard Gourgue en las elecciones de noviembre de 1987 lleva a la pregunta: ¿En qué medida fue la personalidad carismática de Aristide quien decidió la salida, o bien es porque él respondía al momento histórico?

La segunda hipótesis parece más certera. Gourgue no era una figura carismática. Sin embargo, en 3 meses de campaña su victoria parecía tan evidente que suscitó las reacciones violentas como se recuerda en las elecciones de 1987.

De todos modos entre 1987 y 1990, los sectores militar-duvalieristas se debilitaron, el Consejo Electoral pudo ejercer plenamente su autonomía, el contexto internacional con la protección de la ONU se hizo más favorable —las fuerzas democráticas populares se afirmaron—... y esta afirmación entusiasta fue realizada en el marco de un movimiento de organización popular, y de movilización electoral de una potencia insospechada y con un liderazgo muy particular.

Contrariamente a lo que han pretendido algunos, la operación Lavalas contaba con las fuerzas mejor organizadas que agrupaban a vastos sectores sociales...

1. La red de micro-organizaciones que florecieron en los campos y las ciudades en estos últimos años.

2. El movimiento campesino impulsado principalmente por el MMP y sus animadores y cuadros en todo el país.

3. La Iglesia popular Católica, que arrastró con su opción a la base de la iglesia protestante.

4. Las redes de formación y animación creadas por ciertas instituciones: Itheca, Idea, Cáritas, Cresfed.

5. La juventud como categoría sociológica y demográfica.

6. Los marginados y, en regla general, los pobres de las ciudades.

7. Los marco socio-profesionales, elementos del sector privado y de la diáspora.

La candidatura de J.B. Aristide y el proyecto electoral que ella arrastraba, permitió la convergencia, la reagrupación a nivel nacional, de diversos sectores e instancias de organización.

Constituyó el punto de conjunción de las más variadas corrientes: antimacoutes, democráticas, socioreivindicativas, antisistema popular, cultural y de carácter nacional que movían el espacio haitiano y que corresponden a los impulsos y reivindicaciones de la mayoría.

Esta base histórico-social aseguró el éxito del movimiento: una campaña electoral dinámica, realizada en 2 meses, y que movilizó a los recursos del pueblo entero y al millón de compatriotas de la emigración.

12. Un liderazgo

A diferencia de otros que han ocupado la escena política en estos últimos años, Jean Bertrand Aristide no es "un líder que se escogió a sí mismo": fue emergiendo de su acción pastoral y social.

No salió de la clase política tradicional, a diferencia de los otros candidatos que pertenecen a la clase históricamente dueña del poder estatal (Dejoie, Manigat, Theodore, Bazin), Aristide salió del campesinado.

Con sus 37 años, pertenece a la generación que creció bajo Duvalier, que fue la

que más se identificó con la lucha antimacoute, en este último período y que ha levantado las reivindicaciones sociales de carácter popular-cultural.

Su condición de sacerdote le vale recoger la mayor parte del fervor popular suscitado por la Iglesia, desde 1983, después del paso del Papa Juan Pablo II, momento en que ella se unió a la lucha por el cambio. Estas circunstancias le permitieron beneficiarse de las creencias religiosas del pueblo lo que tiende a añadirle una nota mesiánica a su liderazgo.

Su liderazgo se funda en el antimacoutismo resuelto y consecuente del personaje, su rechazo histórico del sistema, su adhesión a las luchas reivindicativas, su identificación con lo popular-cultural. Se funda en el contenido radical y las formas de comunicación tan identificadas al pueblo, asumidas por su discurso político.

El fenómeno Aristide adquirió pues, más allá del espacio electoral, una dimensión histórica que garantizó la victoria del 16 de diciembre.

13. El contexto internacional

— Las elecciones en Haití se dan en un contexto marcado por un doble sello favorable:

a) El interés manifestado desde hace cinco años por la comunidad internacional para que la situación haitiana desemboque “en elecciones libres, honestas y sinceras”. A ello, los Estados Unidos, se han comprometido sin reserva y de manera inequívoca después de las matanzas de las elecciones de noviembre de 1987.

El interés de la Embajada del Departamento de Estado ha sido amplificado a nivel internacional por diversas declaraciones oficiales de Reagan y de Bush. Este último, en marzo-1990 vinculaba la problemática de las elecciones en Haití a la “necesidad de restablecer la democracia en Cuba”; por su parte, el vicepresidente Dan Quayle, declaró en Puerto Príncipe en el verano de 1990, frente a la jerarquía castrense reunida en el palacio: “Don't Murder, Free election”.

Preocupaciones similares han sido expresadas también por Francois Mitterand y el Primer Ministro canadiense, Bill Malony. Gobiernos latinoamericanos y caribeños han mostrado la misma preocupación, la que es compartida por representantes de Iglesias, de partidos políticos, de organismos de derechos humanos. Este concierto de presiones y de trámites en favor de una salida electoral a la crisis haitiana ha conducido al voto por la Asamblea General de la ONU, el 8 de octubre de 1990, de la resolución que dispone del envío de la misión de observadores civiles, y militares sin armas, para asegurar la seguridad y la credibilidad de las elecciones.

Esta presencia solidaria de la comunidad internacional constituyó un factor decisivo para la celebración pacífica de las elecciones así como para el respeto de parte del Ejército y otras fuerzas conservadoras, de los resultados del escrutinio popular.

b) Pero más allá de la escena haitiana, un factor importante, en favor de la causa democrática y popular encarnada por Aristide, lo constituye el contexto internacional, marcado por el desmoronamiento del bloque de países del Este y del final de la guerra fría.

En este marco, las relaciones Norte-Sur, Estados Unidos-América Latina, Washington-Caribe, ya no están donimadas por la “vibración anticomunista” que hacía ver a la potencia imperialista, enemigos a vencer, a vencer por todas partes en el Tercer Mundo, en donde los pueblos luchaban contra la opresión colonial o local.

Esta actitud irracional del imperio, condujo en 1983 al aplastamiento, bajo un montón de mentiras, de desinformación y de tecnología militar, de la minúscula y frágil Granada.

En estas circunstancias el “fin de la guerra fría” imprime una dinámica más compleja en las relaciones Norte-Sur. El “Nuevo Orden Colonial” se impone, y los pueblos en lucha por su liberación ya no pueden contar con el apoyo de otrora de los países socialistas... Pero, al mismo tiempo, los impulsos de los pueblos en lucha

contra la miseria, por los derechos del hombre y por la democracia revierten frente al Occidente opulento “campeón de la democracia”, un sello de legitimidad internacional, moral, desconocido en la historia. Estos factores son susceptibles de abrir una brecha en el muro reforzado de las relaciones de dominación-dependencia en donde pueden pasar las legítimas aspiraciones de los pueblos.

Esta situación desemboca en una pregunta fundamental: ¿la guerra fría se habrá acabado para los pueblos del Tercer Mundo? ¿para los pequeños países del Caribe y de Centroamérica?

En definitiva, el advenimiento del gobierno Aristide es el resultado de toda la lógica histórica nacida de la evolución de la crisis de un sistema de organización interna y de relaciones internacionales.

Pero sobre todo, es el producto de la lucha y la soberana elección del pueblo haitiano.

Por primera vez desde 1804, el pueblo se sintió protagonista de su historia. El ejercicio del sufragio universal y de la soberanía popular desembocaron en el posible ejercicio de la soberanía nacional. El proyecto político así diseñado parece orientarse hacia una empresa de democracia, donde el conjunto de la población tendrá algo que decir; una democracia verdaderamente participativa, orientada hacia el desarrollo nacional.

Tal proyecto, cuyo contenido y formas deben ser definidos, es sin duda alguna modesto en sus aspiraciones y sus posibilidades de reforma social. Sin embargo, más allá de su dimensión local, se inscribe en la búsqueda por los pueblos del Tercer Mundo de una solución a sus problemas históricos. En el contexto internacional actual este proyecto haitiano constituye todo un desafío.

La guerra contra Irak: ajuste estratégico en Oriente Medio

Carlos Varea *

Oriente Medio accede espasmódicamente a los medios de comunicación, a la atención pública internacional cuando los elementos siempre presentes de una conflictividad endémica se reagrupan para producir aquello que se denomina una *crisis*. Así, las crisis en esa región del mundo parecen generarse en el vacío ante la incredulidad de expectadores y lectores que perciben con perplejidad rebrotes recurrentes de violencia.

La denominada *crisis del Golfo*, iniciada en agosto del año 1990, compartió también esa misma cualidad de aparente espontaneidad. Ello permitiría que la opinión pública quedara atrapada en una serie de valoraciones y argumentaciones simplistas e inciertas, la primera de ellas determinada por la propia denominación del conflicto, *del Golfo*, que por geográfica resultó interesadamente localista, cristalizadora de esa descontextualización regional en la que insistiría la Administración Bush a lo largo del conflicto. La marcha hacia la guerra se nutriría así de consideraciones prefabricadas o improvisadas, y se engrasaría con una ignorancia que habitualmente se presenta como resignación ante la complejidad de los sucesos de Oriente Medio.

Así, cuando el 2 de agosto de 1990, el Ejército iraquí cruza la frontera kuwaití e inicia la invasión del emirato, la preocupación internacional había levantado de Oriente Medio su atención muchos meses atrás. El acontecimiento más relevante que catalizara la situación regional más de dos años, la Intifada palestina, había desaparecido discretamente de los medios de comunicación, desinteresados por el goteo diario de palestinos muertos en enfrentamiento con las fuerzas de ocupación israelíes. El máximo éxito de la rebelión popular palestina, su permanencia como nuevo *modo de vida* resistente, se convirtió así en su peor enemigo: tal y como saben los responsables israelíes, la opinión pública occidental es veleidosa, incapaz de fijar su atención en acontecimientos que le parecen reiterativos. Esta característica de la comunicación contemporánea —no la intervención iraquí en Kuwait, como se ha afirmado reiterativamente— es responsable no solamente del olvido internacional de la Intifada, sino del hecho de que la acción iraquí del 2 de agosto apareciera desconectada de la situación global regional. Tal factor sería clave en la configuración —incluso en sectores occidentales opuestos a la guerra— de una comprensión fragmentada y descontextualizada de la cuestión iraco-kuwaití como crisis local independiente del resto de facetas de la conflictividad de Oriente Medio, muy especialmente la palestina.

* Carlos Varea es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Cuando no se resalta la impericia árabe para solucionar sus propios problemas, se señala que la crisis iraco-kuwaití no pudo ser resuelta internamente debido a los factores externos que la convertían en internacional, fundamentalmente, la relevancia estratégica —geopolítica y energética— de la región. Sin embargo, la crisis era ya en sus antecedentes una crisis que escapaba al marco de resolución estrictamente árabe, en el sentido de resolución negociada y pacífica del contencioso iraco-kuwaití dentro del ámbito oficial árabe. En el marco del proceso de calentamiento que Oriente Medio padece por la confluencia de factores internacionales y locales, la estricta desavenencia iraco-kuwaití no fue el detonante de una crisis focal interárabe que inmediatamente se internacionalizara en sus consecuencias (1). Fue, por el contrario, el episodio final, sin duda el más publicitado, de un agravamiento estructuralmente vinculado al conflicto árabe-israelí, a la cuestión palestina y al control neocolonial de la región. Ciertamente, la guerra lanzada por la fuerza multinacional contra Irak puede tener muchas lecturas. Han predominado por distintas razones aquéllas que pueden calificarse de *periféricas* al propio conflicto palestino-israelí o árabe-israelí en su conjunto. En ello pesó, sin duda, la preocupación por no aparecer vinculado en el análisis de la crisis a la posición mantenida por los responsables iraquíes, una posición que, por obvia, al menos desde el interior del mundo árabe, aglutinaría contra la intervención al conjunto del movimiento nacional y progresista árabe (2).

No repasaremos aquí los fundamentos históricos del antagonismo iraco-kuwaití (resumibles, por lo demás, en la arbitrariedad del proceso de fragmentación colonial del conjunto regional árabe), ni la cronología de los sucesos posteriores a la entrada iraquí en Kuwait o sus antecedentes inmediatos, pero sí recordaremos el orden en que se tomaron algunas decisiones aquellos primeros días del mes de agosto (3). El día 4 el presidente Bush y su gabinete restringido deciden el envío de tropas a la Península y Golfo Arábigos, una medida tomada sobre la base apriorística de tres consideraciones encadenadas en su falsedad y claves en la conformación definitiva de la crisis: la coartada árabe, el respaldo soviético y la conformidad internacional. La primera, la aceptación por parte del rey Fahd —otorgada al secretario de Defensa norteamericano Cheney el día 6 en Jeddah— del estacionamiento de tropas occidentales en Arabia Saudí bajo la supuesta amenaza de un inminente ataque iraquí contra el reino. La segunda, la aquiescencia soviética al envío de tropas norteamericanas a la zona, comunicada por Baker a Cheverdnazde el mismo día 6 y matizada con la premisa falsa de que tal paso se daba a petición saudí. La tercera, la aprobación por el Consejo de Seguridad de NNUU de la primera resolución estableciendo sanciones contra Bagdad (resolución número 661 del 6 de agosto) también dos días después de que la decisión norteamericana hubiera sido tomada. Entre la reunión de ministros de Exteriores árabes del 3 de agosto y la cumbre de El Cairo de una semana después, las iniciativas mediadoras palestina y jordana —fundamentalmente— chocan frontalmente con la presión norteamericana ejercida sobre saudíes y egipcios. El presidente egipcio Mubarak rechaza las garantías dadas al rey Husein de Jordania por Saddam Husein (retirada de Kuwait a partir del día 5 si no hay condena de la Liga Árabe; carecer de intenciones agresivas contra Arabia Saudí) y se niega a acudir a la cumbre árabe restringida a celebrar en Jeddah el día 4 entre los máximos dirigentes iraquí, kuwaití, saudí y egipcio, a la que ya se había comprometido a asistir Saddam Husein. Un proceso de negociación interárabe no podía poner en peligro el despliegue norteamericano en ciernes: la dependencia financiera norteamericana de Egipto sirvió como medida de presión para un rápido y evidente endurecimiento de la posición del régimen de Mubarak ante la invasión iraquí. Finalmente, el anuncio de la anexión de Kuwait por parte de Irak se produce el día 8, sólo tras el anuncio norteamericano de envío de tropas a la zona; el día 12, el presidente iraquí contextualiza la crisis iraco-kuwaití con su plan de retirada multilateral de todos los territorios ocupados en Oriente Medio —además de Kuwait, Palestina, Siria y Líbano. Dos

días antes, la cumbre árabe reunida en la capital egipcia clausura toda expectativa de solución negociada interna y otorga la cobertura militar árabe —siria, marroquí y egipcia— a la fuerza multinacional en marcha hacia la región.

Crisis internacional o conflicto árabe-israelí

Si el embargo contra Irak decretado por el Consejo de Seguridad (comprendido por sectores antibelicistas como opción alternativa a la guerra) fue en realidad el recurso temporal necesario para establecer en el teatro de operaciones las fuerzas precisas para un ataque exitoso, dos factores resultarán claves en la definición del conflicto a la medida de la Administración Bush: el papel a jugar por Israel y la cobertura árabe de la crisis. La resolución satisfactoria de ambos elementos permitió definir la crisis consecutivamente, primero, como interárabe y, posteriormente, como internacional; fuera por tanto del contexto árabe-israelí.

Se ha reiterado que la radicalización del contencioso iraco-kuwaití y la invasión final del emirato por Bagdad eran las manifestaciones de la incapacidad del mundo oficial árabe para encontrar soluciones armoniosas y pacíficas a sus problemas internos. Sobre tal argumento se fortaleció el criterio intervencionista occidental en Oriente Medio. Sin embargo, la intervención iraquí en Kuwait el 2 de agosto, a pesar de su transcendencia e independientemente de la valoración crítica que de ella se haga, es tan sólo el primer elemento publicitado de una crisis largamente fraguada.

La Intifada palestina había permitido una acomodación oficial interárabe articulada en torno al plan de paz palestino aprobado en la decimonovena sesión del Consejo Nacional Palestino de la OLP de noviembre de 1988, una oferta de negociación basada en el reconocimiento implícito del Estado de Israel y centrada en la celebración de una Conferencia de Paz para Oriente Medio con participación de todas las partes implicadas en el conflicto árabe-israelí y supervisada por el Consejo de Seguridad de la ONU (4). Tal estrategia común supuso un nivel de homogeneización interárabe sin precedentes, favorecido así mismo por procesos de integración regional (especialmente la puesta en marcha de la Unión del Magreb Árabe, además de la reunificación yemení), de perspectivas de solución a problemas endémicos (acuerdo parlamentario de Taëf para la pacificación de Líbano, impulsado por el Comité Tripartito de la Liga Árabe), a procesos bilaterales de reconciliación (Egipto-Libia, Libia-Irak, OLP-Siria, por ejemplo, o a la atenuación de rivalidades Irak-Siria, sobre el ecenario libanés). El síntoma más claro de ese proceso fue el paulatino retorno de Egipto a los organismos panárabes tras quince años de exclusión decidida tras la firma por Sadat de los acuerdos de Camp David con Israel y EE.UU. en 1979.

Sin embargo, nuevos factores internacionales y locales determinarán la reordenación de los alineamientos interárabes establecidos durante la guerra irano-iraquí y la paulatina polarización de los miembros de la Liga Árabe. El elemento catalizador de ese reajuste interárabe es la respuesta interna que ha de articularse al proceso de calentamiento progresivo que padece la región cuyo escenario prebélico se centra en Irak (cruce de amenazas iraco-israelíes; preocupación oficial norteamericana recogida en los medios de comunicación occidentales por la capacidad militar de Bagdad) pero igualmente en Jordania.

Esta nueva situación en Oriente Medio viene determinada por un *subproducto* del fin de la guerra fría y la nueva acomodación entre EE.UU. y la URSS, el proceso de migración masiva de judíos soviéticos hacia Israel y los territorios árabes ocupados. Este hecho, aparentemente circunstancial (5) y sólo percibido en su real transcendencia muy recientemente, se manifestará como elemento central de la nueva crisis que vivirá la región y como catalizador de la evolución del conflicto palestino-israelí y árabe-israelí en su conjunto, de las relaciones inter-árabes y de la propia percepción que EE.UU. y el conjunto del mundo industrializado tiene sobre el futuro y la seguridad de la zona. La reiterativa intransigencia del nuevo Gobierno Likud (formado en

junio de 1990 por Shamir gracias al apoyo de los partidos de extrema derecha, religiosos y ultrasionistas) se alimenta con las expectativas derivadas de la liberalización por parte soviética de la emigración judía. La eventualidad de instalación en Israel y los territorios árabes ocupados de una cifra estimada hasta en un millón y medio de judíos soviéticos, cierra las expectativas de solución negociada del conflicto árabe israelí ante la posibilidad de reajustar definitivamente en beneficio del Estado de Israel la ecuación demográfica palestino-judía.

Así, las perspectivas de solución negociada del conflicto árabe-israelí que podían fundamentarse, con moderado optimismo, en los frutos internacionales de la Intifada palestina y en ese marco de moderación interestatal árabe consensuado en torno a la oferta de paz de la OLP, quedan anuladas ante el negativo impacto de un nuevo contexto internacional. La respuesta que la comunidad árabe ha de dar a esta nueva situación regional determinará un paulatino proceso de polarización en el seno de la Liga Árabe, explicitado en la cumbre celebrada entre el 28 y el 30 de mayo de 1990 en la capital iraquí. Por primera vez en muchos años, el comunicado oficial de la cumbre árabe de Bagdad de mayo del pasado año, dos meses antes de la invasión iraquí de Kuwait, incluye críticas a EE.UU. por su apoyo a Israel (6) y aun cuando la redacción final no contiene mención alguna a la posibilidad agriamente discutida de utilizar el petróleo como medida de presión para frenar el proceso de asentamiento masivo de los judíos soviéticos en Palestina, el texto de la reunión califica de “nueva agresión para los derechos nacionales del pueblo palestino (...) y peligro para la seguridad nacional árabe” el flujo migratorio desde la URSS (7).

La alianza entre las monarquías petrolíferas del Golfo y Egipto —además de la OLP y Yemen del Norte— con el contendiente árabe de la guerra del Golfo, Irak, se rompe. La polarización la marcan públicamente los medios de comunicación egipcios con críticas a la OLP e Irak. Siria —aliado árabe de Irán durante la guerra— y Egipto inician un rapidísimo proceso de reconciliación que diseña un nuevo eje El Cairo-Damasco fortalecido a medida que el régimen sirio procura normalizar sus relaciones con EE.UU. El marco de la crisis interárabe queda ya entonces establecido: por una parte, el grupo de las petromonarquías árabes y Egipto; por otra, la OLP, Irak y Jordania. El primer grupo exige a la OLP mayores concesiones ante Israel y EE.UU. (poco tiempo atrás había quedado roto el diálogo en Túnez entre la central palestina y la Embajada norteamericana) y rechazan cualquier medida de presión energética sobre Occidente o mayores críticas a EE.UU. Si Egipto es un rehén de la dependencia financiera de EE.UU. y el FMI, los Estados petrolíferos del Golfo identifican la defensa de su artificialidad con la de los intereses occidentales en la región. Por su parte, la OLP analiza correctamente que el relanzamiento de la colonización sionista de Palestina no sólo anula los logros internacionales y regionales de la Intifada, sino que eclipsa definitivamente cualquier remota perspectiva de solución al drama del pueblo palestino. Irak, padeciendo ya el embargo tecnológico occidental y el abaratamiento de los precios del petróleo provocado por la violación de Kuwait y los E.A.U. de sus cuotas de producción, se compromete en la defensa militar de Jordania, un país en rápido proceso de democratización (8) y cuyo monarca comprende que el ajuste demográfico regional en ciernes sólo puede efectuarse por medio de la *palestinización* de su reino —en término sionista, la “transferencia” masiva de población palestina desde los territorios ocupados (9)—, una opción que, enmarcada en el contexto de un nuevo conflicto árabe-israelí, comienza a perfilarse nítidamente y es defendida por socios del nuevo Gobierno Shamir y miembros del propio partido Likud.

La eliminación de Irak como potencia regional emergente tras la guerra contra Irán, en un clima de bloqueo de las expectativas de solución pacífica del conflicto árabe-israelí y de polarización interárabe, surge como una *necesidad* a corto o medio plazo para Israel y EE.UU., aun cuando sus razones no sean necesariamente idénticas. Independientemente de que se valore como verosímil o no el fortalecimiento en torno a la capacidad militar iraquí de un polo de resistencia árabe al proyecto de

colonización de Palestina y al reordenamiento del mapa de la zona que ello implicaría —especialmente, en relación a Jordania—, en el diseño que norteamericanos e israelíes hacen del futuro de la región al término de la guerra irano-iraquí tal posibilidad era inaceptable.

Hay una conexión directa entre el proceso de erosión económica de Irak resultante de la política de sobreproducción petrolífera de Kuwait y los E.A.U. (incluida por EE.UU., consentida por Arabia Saudí, y detonante de la crisis del 2 de agosto: cumbre de la OPEP del 25 de julio) y el proyecto de destrucción de la capacidad militar y económica iraquí, cuyo primer esbozo fue el ataque israelí al reactor nuclear cercano a Bagdad en junio de 1981. Desde los primeros días de agosto de 1990, el despliegue militar norteamericano en la Península y Golfo Arábigos estuvo destinado a lanzar un devastador ataque contra Irak. Su objetivo era frenar lo que los medios de comunicación occidentales resaltaban desde el fin de la guerra irano-iraquí como la creciente capacidad militar iraquí, y que no era sino la formulación publicitaria de una preocupación creciente en los círculos oficiales norteamericanos, europeos e israelíes: la posibilidad del establecimiento de un equilibrio estratégico en Oriente Medio entre uno o varios Estados árabes e Israel, una posibilidad que, si bien quizás no inmediata, daría al traste con un modelo de control postcolonial de la región basado en la incuestionabilidad de la superioridad militar israelí. Ante tal imperativo, la Administración Bush ha de optar por dos alternativas. La primera, protagonizar el conflicto procurando conservar el control de la situación dentro de un nuevo marco de relaciones internacionales y rentabilizarlo en relación a determinados problemas internos norteamericanos (considerados de manera reiterada, en una visión descendrada de la crisis, como básicos en el desencadenamiento del conflicto: déficit interno, reactivación del aparato industrial-militar, competencia económica con Japón y una Europa emergente, etc.). La segunda, aceptar que Israel convirtiera en un nuevo conflicto árabe-israelí generalizado una confrontación que se analizaba como necesaria dentro de un contexto regional caracterizado por un ambiente de paulatina radicalización. La Administración Bush optó por la primera alternativa, pero no el 2 de agosto de 1990.

El factor demográfico en la cuestión medio-oriental

Dos son los elementos claves de la ecuación de Oriente Medio: el factor demográfico y el factor militar. Sobre ambos ha basculado la evolución del conflicto árabe-israelí o, más específicamente, del palestino-israelí, durante las cinco últimas décadas. Siguiendo el criterio sionista de establecimiento en Palestina de un Estado confesional judío —de mayoría poblacional judía—, la creación de Israel se perfila desde meses antes de su proclamación en mayo de 1948 como un proceso paulatino de control demográfico del territorio palestino por medio del desalojo militar de la población árabe y su sustitución por emigrantes judíos. Desde aquella primera fase, Israel ha padecido la tensión provocada por una indefinición territorial representada por la mística colectiva del *Eretz Israel*, del “Gran Israel” bíblico o sionista, tensión que procura en cada momento histórico resolverse afirmativamente —expansivamente— con el control demográfico definitivo de nuevos territorios árabes ocupados. Desde la última fase de la guerra de terror y desalojo lanzada en 1947-48 por las organizaciones paramilitares sionistas hasta el actual período de colonización de Gaza y Cisjordania, el Estado de Israel se ha configurado históricamente mediante un mecanismo explícito: ganar tiempo, hacer irreversible el proceso de *judaización* de los territorios árabes ocupados en cada nueva guerra árabe-israelí, anexionarlos al Estado. Supremacía militar y aporte migratorio externo: tales son los elementos básicos de la supervivencia y consolidación del Estado de Israel, las claves de su mantenimiento como entidad hegemónica en la región árabe.

Desde esta premisa puede comprenderse la trascendencia regional del proceso de

canalización de la migración de judíos soviéticos hacia Israel/Palestina. Tal expectativa permite a las autoridades israelíes abordar lo que desde finales de los 60 había sido el problema central del Estado, el control poblacional, demográfico, de los territorios árabes ocupados en la guerra de 1967, desafío con el que se afrontaba el reto de la definición del Estado que Israel habría de ser en una nueva fase de su historia. La paralización e inversión del flujo migratorio determinaba la anulación de uno de los dos elementos claves en la expansión y consolidación del Estado: la capacidad colonizadora. Si el factor militar —fundamentado en su capacidad convencional pero desde los primeros 70 ya en su potencial nuclear— otorgaba a Israel la supremacía estratégica sobre sus vecinos árabes como respaldo a su intransigencia, la imposibilidad de lograr plenamente el control demográfico, más allá del militar, de los territorios árabes ocupados desde 1967 situaba a Israel ante una encrucijada decisiva.

Tan crítica coyuntura centrará las diferencias entre el Partido Laborista y el bloque —hoy ya partido— Likud en las dos últimas décadas. Diferencias de matiz, habida cuenta que ambas formaciones coinciden en su negativa a negociar con la OLP la retirada israelí y un proceso de independencia palestina tendente a la creación de un Estado soberano. No obstante, una polémica sensible sobre la necesidad de la negociación con los Estados árabes vecinos —básicamente con Jordania— que gira en torno al problema de qué hacer con territorios de alta densidad árabe (10) para los cuales no hay una posibilidad inmediata de anexión siguiendo el viejo estilo sionista: ocupación, desalojo y poblamiento (11).

Ya con la Intifada palestina en marcha, desde diciembre de 1987, dos Gobiernos de coalición Likud-Laborista y uno del Likud con apoyo de partidos religiosos y ultra-sionistas asumen el reto de mantener la ocupación y la represión convirtiendo los territorios ocupados en *ghetos* árabes. Israel, incapaz de liberarse de su definición fundacional de *Estado judío*, no puede resolver, excepto eludiéndola (como hace el sector oficial del Likud frente a los radicales de Ariel Sharon, partidarios de la “transferencia” a Jordania de la población palestina), la contradicción entre su paulatina *suraficanización* y el mantenimiento formal de su carácter democrático, señal de homologación con un Occidente que ha de engrasar su economía. Sin ímpetu demográfico propio equiparable al de la población árabe (un millón setecientos mil en Gaza y Cisjordania, más de 700.000 en el Estado) y sin aporte externo migratorio regular, Israel más los territorios ocupados tendría en el año 2000 4,1 millones de judíos frente a 1,2 millones de árabes-israelíes y 1,9 en los territorios ocupados (12). Consecuencia: una década después Israel se habría convertido en un Estado de paridad árabe-judía y pocos años después en un Estado de mayoría poblacional árabe-palestina (13).

Ese “milagro” migratorio al que se refería Shamir al recibir el apoyo del parlamento israelí para la formación del Gobierno calificado como el “más derechista de la historia de Israel”, se basa en un acuerdo a tres bandas entre Israel, EE.UU. y la URSS perfilado en varias reuniones celebradas a lo largo de 1988 y cerrado en la cumbre Bush-Gorbachov de Malta del siguiente año: retirada de la concesión automática por parte norteamericana del estatuto de refugiado político (*refusenik*) a los judíos soviéticos y reducción drástica del número de visados concedidos a la comunidad; liberalización de la migración judía por parte de la URSS; control por la Agencia Mundial Judía del flujo migratorio y canalización obligatoria hacia Palestina; concesión norteamericana de créditos a Israel para la recepción e instalación de los inmigrantes soviéticos (14).

Comparar las cifras migratorias de mediados de los años 80 y las inmediatas a la liberalización soviética de la migración judía es revelador y, ciertamente, permite comprender el alivio israelí. En 1985 llegaron a Israel 11.298 inmigrantes, la cifra más baja desde la creación del Estado, en un año en el que el flujo migratorio invertía su signo por segunda vez desde 1948 (15) en una tendencia compensada el anterior año por el traslado a Israel de 20.000 falashas etíopes. En 1985 salieron de la

URSS 1.300 judíos soviéticos, de los cuales solamente 342 decidieron establecerse en Israel. En septiembre de 1987, Moscú había autorizado la salida de 4.712 judíos en el transcurso del año, el mayor cupo desde 1979; sólo una cuarta parte de ellos eligieron Israel para vivir. Sin embargo, apenas dos años después, entre mediados de 1989 y finales de 1990 habían llegado a Israel casi 200.000 judíos soviéticos. Para el presente año, tras el bajón provocado por la guerra (13.360 inmigrantes soviéticos frente a los 35.259 de diciembre), las autoridades israelíes estimaban una entrada mensual promediada de 40.000 judíos soviéticos; en torno al medio millón en 1991 (16). Como gráfico resumen de tales datos, indicar que el pasado año el Estado de Israel tuvo un crecimiento poblacional por aporte exterior sólo comparable al de los países del Tercer Mundo de más vertiginosa tasa demográfica, del 3% anual frente al 1,6% de 1985-86 (17). Despejada la incógnita del factor demográfico en la ecuación regional, era necesario ajustar la incógnita militar, en un momento crítico, el fin de la guerra irano-iraquí.

Desequilibrio estratégico regional y guerra contra Irak

La supremacía estratégica israelí, el desequilibrio militar árabe-israelí, manifestación del compromiso occidental con Israel, sustenta la intransigencia insalvable de los dirigentes israelíes. Israel gana tiempo catapultado en una intransigencia que se fundamenta en un principio incuestionado quizás hasta la guerra del Golfo: sin paridad estratégica árabe-israelí y sin presión de la comunidad internacional, con posibilidades inmediatas de afrontar el control militar y demográfico de nuevos territorios, Israel no necesita negociar nada, y menos que nada, con los más débiles, los palestinos. En palabras del comandante en jefe del Estado Mayor israelí, general Ebud Barak, (declaraciones del día 6 de agosto de 1991) la misión del poder militar israelí "es garantizar la libertad de maniobra del Gobierno [israelí] mientras negocia [con los árabes]"; lo que en términos estratégicos significa mantener una superioridad militar que haga innecesario el diálogo o que determine que cualquier proceso de negociación árabe-israelí, de producirse, se efectuará con la premisa obligatoria de la inferioridad árabe.

División interárabe, superioridad militar israelí, desactivación de los logros de la Intifada palestina: la del Golfo ha sido una guerra diseñada para evitar cualquier atisbo de paridad estratégica entre Israel y los Estados árabes. Esta ha sido la cuestión clave en la guerra de destrucción lanzada contra Irak. Si no, ¿qué factores caracterizan la posguerra? El primero, la continuación del proceso de desmilitarización y desestructuración económica y política del Estado iraquí; el segundo, una iniciativa de negociación árabe-israelí que la Administración Bush lanza siguiendo el modelo de Camp-David y a hechura israelí.

Mientras a uno y otro extremo del espectro de opiniones y actitudes surgido en Occidente ante la guerra —desde la oficial belicista a la pacifista—, la figura de Sadam Husein crispaba los ánimos y focalizaba los posicionamientos, el objetivo de la guerra superaba ampliamente la trayectoria y el destino del presidente iraquí. Su continuidad en el poder, más que contradecir tal afirmación, la corrobora. Quienes pretenden encontrar argumentos —y justificaciones— en la continuidad del régimen iraquí tras la guerra recordando pretéritos lazos entre Sadam Husein y Occidente durante la guerra irano-iraquí (equiparables, en cualquier caso, a los establecidos con el régimen del clero iraní), ignoran el objetivo complementario de la intervención militar en Oriente Medio: a partir de la derrota iraquí, simbólica del conjunto del mundo árabe y de sus aspiraciones nacionales, el relanzamiento de un proceso de *acomodación* árabe-israelí que, fundamentado en el debilitamiento del campo árabe y en el reforzamiento estratégico de Israel como garante de los intereses foráneos en Oriente Medio, reforzara el control poscolonial de la región y, a imitación de los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, forzara un marco de negociación centrado en la postergación de una solución adecuada del problema palestino.

Así, más que un cambio en la cúpula dirigente iraquí o la desaparición del régimen baasista (ambas alternativas ciertamente alentadas al término de la guerra a través de insinuaciones al Ejército o por medio de las revueltas chií y kurda), EE.UU. e Israel apuestan por la destrucción efectiva del poder económico, político y militar —real, imaginario o posible— de Irak en la zona. La desaparición de Sadam Husein o del régimen del Partido Baas se muestra como accesoria dentro del proyecto más ambicioso de desestructuración a largo plazo de Irak como Estado, no como régimen concreto. De ahí que la preocupación occidental por la *democratización* del país o por la suerte de la minoría kurdo-iraquí o de la población meridional chií no dejara de ser igualmente coyuntural e inconsistente, como lo testimonian las ambigüedades en declaraciones y actuaciones de los *aliados* terminada la guerra, ambigüedades que más que como contradicciones deben ser entendidas sin embargo (tal y como las expresara el Gobierno británico recuperando su erudición colonial) como viejos y eficaces procedimientos de intervención: radicalización externa de contradicciones locales, apoyo a la creación informal de mini-entidades confesionales o étnicas, inestabilidad irresuelta que justifique futuras intervenciones (18).

Si Israel por su parte ha analizado tradicionalmente como de interés prioritario sus relaciones con el círculo periférico de Estados no árabes de la zona (Turquía; Etiopía en relación a la migración de *falashas* pero también como preocupación por el control árabe —eritreo— de la orilla africana del mar Rojo; Irán, asunto *Irangate* e intercambio de armas por petróleo y judíos iraníes durante la guerra contra Irak), EE.UU. prefiere un dominio regional que, manteniendo el papel preponderante de Israel, se reafirme con el estacionamiento de tropas y material en la región (monarquías petrolíferas árabes, Israel y Turquía), con un nuevo marco de relaciones con Irán y con el inesperado protagonismo de Turquía (19).

Como era previsible, tal reajuste del control de la región diseñado por EE.UU. no otorga relevancia alguna al papel que pudieran desempeñar determinados Estados árabes comprometidos como aliados durante la guerra contra Irak, básicamente Egipto y Siria. El llamado “Acuerdo de Damasco”, suscrito los primeros días de marzo entre Siria, Egipto y las petromonarquías integradas en el Consejo de Cooperación del Golfo, y que establecía el apoyo financiero de este último organismo a los dos primeros Estados a cambio del mantenimiento en la Península Arábiga de una fuerza militar estrictamente árabe, parecía que apuntaba en la dirección de cierta redistribución del control de la seguridad en la zona con participación árabe. Sin embargo, el anuncio efectuado en el mismo Kuwait el día 7 de mayo por el secretario de Defensa norteamericano Cheney del estacionamiento de tropas y material en el emirato liberado (además de en los E.A.U.), supuso un duro golpe a las expectativas sirias y egipcias de participar solventemente en un nuevo marco regional que no pivotara exclusivamente en la hegemonía israelí reforzada ahora con la presencia occidental en la zona (20). El estacionamiento de tropas en los pequeños emiratos fue de hecho acordado secretamente ya en agosto de 1990, pocos días después de la invasión iraquí de Kuwait, como contrapunto a la petición del rey Fahd de retirar los contingentes extranjeros de Arabia Saudí al término de la crisis. Ello no es nada más que la confirmación de la dependencia militar directa de las monarchías del Golfo respecto de EE.UU., subordinación obligada —además de deseada— por la propia debilidad de aquéllas como Estados artificiales, ricos pero sin población, y por las restricciones sobre la venta de armas sofisticadas impuestas por el Congreso norteamericano a la presidencia vía *lobby* proisraelí (21).

Así, el punto relativo a la definición de un nuevo “sistema de seguridad compartido” en Oriente Medio, incluido en la declaración efectuada el 6 de marzo ante el Congreso de EE.UU. por el presidente Bush sobre el “nuevo orden” regional tras la guerra, se desvanecía ante el fortalecimiento del viejo modelo. Los acuerdos suscritos a fines de agosto entre Kuwait y EE.UU. y Gran Bretaña formalizan el establecimiento de tropas en la región.

Sin embargo el objetivo de la guerra no era tanto la permanencia definitiva de tropas norteamericanas —además de europeas— en la región, como la confirmación del eje principal de control poscolonial de Oriente Medio: el mantenimiento de la superioridad estratégica, militar de Israel. Basta recordar la sistemática destrucción del conjunto de la infraestructura civil iraquí durante la guerra (el 90%, según informe de NNUU) y las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de NNUU a su término para que podamos definitivamente olvidarnos de que el objetivo de la liberación del Kuwait ocupado estuviera alguna vez entre las motivaciones reales de la guerra contra Irak.

El 3 de abril el Consejo de Seguridad de NNUU emitía su resolución 687, con la que el organismo internacional ponía formalmente fin a la guerra contra Irak. La resolución considerada como históricamente inédita por su dureza, además de reiterar el embargo de armas, establecer una “franja de seguridad” de 10 y 5 Kms. de profundidad en territorio iraquí y kuwaití, respectivamente, y obligar a Irak a reconocer la soberanía kuwaití, define un estricto mecanismo de verificación y destrucción de los arsenales militares estratégicos y de la industria nuclear iraquíes. Al cumplimiento del calendario fijado para tal proceso queda sujeto el levantamiento paulatino del embargo contra Irak, incluida la prohibición de exportar crudo, sólo levantada en agosto y sin control iraquí ante la gravísima situación interna del país. Una lectura rápida del texto de tal resolución explicita el objetivo real de la intervención, un objetivo que el ex-secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, apenas tres semanas después de la entrada iraquí en Kuwait, formulaba ya abiertamente con la claridad meridiana que le caracteriza: la “destrucción quirúrgica y progresiva de la fuerza militar iraquí” (22). Así formulado, el objetivo de la intervención norteamericana en Oriente Medio y la guerra contra Irak aparece como *inevitable*, un concepto que puede resultar ajeno al criterio de que cualquier conflicto puede ser desactivado, pero que en el caso de la crisis vivida es imprescindible conservar para su correcta comprensión.

La guerra y las medidas tomadas a su término encuentran su formulación en el plan de reducción de armas no convencionales en Oriente Medio enunciado por la Administración Bush pocas semanas después del fin de la guerra y dirigido exclusivamente al conjunto de Estados árabes: control de las ventas de armamentos por terceros; control de la industria nuclear, incluida la de uso civil; control de los misiles de alcance superior a 150 Km.; control de arsenales químicos y bacteriológicos. Al tiempo, el secretario de Defensa Cheney, en su visita a Israel inmediatamente después de la guerra, reitera el compromiso norteamericano en “velar por la seguridad y superioridad estratégica de Israel”; al tiempo que anuncia nuevos créditos para el desarrollo y adquisición de material militar ofensivo, clara *matización* del proyecto enunciado por el inquilino de la Casa Blanca. El 9 de julio, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de NNUU se declaraban igualmente partidarios de la creación de una “zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio”.

Posguerra e iniciativas diplomáticas

Si el requisito obligado de que la guerra contra Irak tuviera una definición externa al conflicto árabe-israelí determinó la discreción israelí (rota tan sólo por las declaraciones de responsables del Gobierno Shamir recordando la determinación de Israel de concluir el “trabajo” si EE.UU. y sus aliados no llegaban hasta el fin), tras la guerra y en esa misma línea la resolución 687 de NNUU se constituye como el instrumento necesario que, con cobertura así mismo internacional, garantiza la plena conclusión del proceso de desmilitarización de Irak avanzado en los 43 días de bombardeos sobre el país. Con una nueva resolución del Consejo de Seguridad que garantice que el objetivo real de la guerra va a ser plenamente alcanzado, no solamente se

pretende neutralizar cualquier intervención a posteriori de Israel, sino que se está reforzando además la táctica norteamericana de situar el proceso de ingerencia post-bélica en Irak fuera del contexto regional, como proceso independiente de los movimientos diplomáticos que entonces inicia en la zona el secretario de Estado Baker relativos a la promoción de una negociación árabe-israelí. Con ello, al tiempo que la Administración Bush procura reforzar su argumento de que la llamada crisis del Golfo y las demás cuestiones medio-orientales, especialmente la palestina, no tienen vinculación alguna entre sí, se presenta como cumplida la promesa de un esfuerzo moral por solucionar los restantes problemas de la zona (23).

No es posible comprender la "ofensiva diplomática" norteamericana destinada al logro de un nuevo acuerdo árabe-israelí sin las premisas que la intervención militar ha establecido en la región. Una iniciativa como la comercializada por el secretario de Estado norteamericano Baker durante sus recurrentes giras por la región tras el fin de la guerra y cuyas líneas básicas son réplica de las de los Acuerdos de Camp David, responde a los nuevos condicionamientos de la guerra, especialmente a la grave fractura política interárabe. Así, el impulso dado al inicio de un proceso de negociación entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes debe comprenderse, no como la concesión que la Administración Bush está obligada a hacer tras su enfática defensa del Derecho Internacional en el caso kuwaití, sino como el siguiente movimiento de su intervención en Oriente Medio tras la fase bélica. Ahora, al término de la guerra, fuera Irak del escenario resolutivo regional, marginalizada la OLP y ejemplarizado el uso devastador de la fuerza militar ante el conjunto nacional árabe, EE.UU. pretende formalizar en Oriente Medio un nuevo marco de relaciones árabe-israelíes que, basado en la debilidad del campo árabe, adecue el conjunto regional a los nuevos determinantes locales e internacionales.

El plan norteamericano reproduce sin pudor el esquema básico de la negociación gestionada por la Administración Carter entre el Egipto de Sadat y el Israel de Begin a finales de los 70, resultando así antitético del modelo de Conferencia Internacional de Paz para Oriente Medio solicitada por los árabes antes de la guerra y respaldada ampliamente por la comunidad internacional:

- Negociaciones bilaterales por separado entre el Estado de Israel y cada Estado árabe vecino;
- escisión de la cuestión palestina del marco del conflicto árabe-israelí;
- anulación de la representatividad de la OLP;
- marginalización del problema palestino, que pierde su perfil nacional para ser tratado como cuestión *administrativa* asociada secundariamente a la negociación con Jordania;
- no a la supervisión internacional por medio del Consejo de Seguridad de NNUU y pérdida referencial del cumplimiento de las resoluciones del organismo en relación al conflicto árabe-israelí.

La contradicción que la Administración Bush ha de resolver en el marco de esa conferencia que se denomina *regional* es que sus propias premisas y los nuevos factores regionales, básicamente el impulso expansionista y colonizador que Israel adquiere con el aporte migratorio judío y la destrucción efectiva de Irak, no constituyen en modo alguno las piezas del *puzzle* de la paz en la zona, sino las del viejo sistema de dominación poscolonial basado en un modelo inestable, que ignora la cuestión palestina y en el que difícilmente podrán jugar un papel relevante ninguno de los Estados árabes que se aprestan a participar en el juego (24). Si la OLP no ha dicho que no a una convocatoria a la que no ha sido invitada y que ha sido diseñada para anular las expectativas nacionales del pueblo palestino (25), la postergada aceptación siria del pasado 14 de julio permitió que al término de la cumbre Bush-Gorbachov celebrada en Moscú los días 30 y 31 de ese mismo mes se fijara ya la fecha de la convocatoria para octubre. Con ello, el eje central de la conferencia se establece, como era previsible, en el logro de un acuerdo de paz sirio-israelí bendecido por

Arabia Saudí y al que procuraría vincularse una Jordania sobre la que pesa gravemente la matizada posición del rey Husein durante la guerra, quien sigue percibiendo como una amenaza a la continuidad de su reino la suspensión indefinida del arreglo del problema palestino.

Como escribía el representante de la OLP en el Estado español, Issam Salem, la marginalización de la cuestión palestina en ese proceso en marcha no es consecuencia de la pérdida de credibilidad de la OLP como resultado de una lectura falseada de su postura durante la crisis del Golfo, sino una constante compartida por Israel y EE.UU. ahora reiterada (26): eludir la pieza clave del conflicto de Oriente Medio porque sobre él pivota el diseño colonial impuesto a la región y aún vigente. La creación tras la guerra de nuevas colonias sionistas en la Palestina ocupada —cuatro al menos en el momento de escribir estas líneas, coincidiendo la inauguración de alguna de ellas con las giras de Baker por la zona (27)— o las explícitas negativas israelíes a retirarse del Golán sirio (28) no contradicen las expectativas de negociación en la región, sino que por el contrario definen en sus justos términos el verdadero equilibrio de fuerzas que la guerra contra Irak buscaba imponer en la región.

NOTAS

(1) Francisco Peñas, "El conflicto del Golfo: relaciones internacionales y estado-nación". *África-América Latina. Cuadernos*, n.º 3; junio-septiembre, 1991.

(2) Ahmed Halaweh, "The Arab masses and the Gulf crisis". *Democratic Palestine*, n.º 44, May, 1991. Véase igualmente la entrevista con George Habash, secretario general del FPLP, en *Democratic Palestine*, n.º 42; nov-dic. 1990.

(3) Precisamente por recoger buena parte de las informaciones, fuentes y documentos árabes que la opinión pública occidental procuró ignorar durante el conflicto (algunos de ellos, documentos incautados por los iraquíes en Kuwait City: véase, por ejemplo, el reproducido en *Nación Árabe*, n.º 13, vol. V; marzo, 1991), el libro de Salinger y Laurent: *Guerre du Golfe. Le dossier secret* —traducido al castellano por Ediciones de la Tempestad, 1991— merece al respecto una lectura. En relación a la creación de Kuwait y el proceso de descolonización en la región, el contencioso histórico iraco-kuwaití y la evolución de las relaciones entre el emirato y Bagdad, véase, por ejemplo y entre otras muchas obras, *The Middle East in World Affairs*, George Lenczowski, Cornell University Press.

(4) El texto de la resolución política final de la Decimonovena Sesión del Consejo Nacional Palestino, así como la Declaración de Independencia de Palestina, pueden leerse en *Nación Árabe*, n.º 9, vol. III; febrero, 1989.

(5) El anterior ministro de Exteriores soviético, Alexander Bessmertnij, durante su visita a Israel en mayo del presente año, a penas diez días antes del golpe de Estado en la URSS, afirmaba que la libre emigración de los judíos soviéticos está asociada al proceso de democratización de la URSS y "no tiene relación con ningún otro problema, como el conflicto árabe-israelí", queriendo ignorar así la grave responsabilidad asumida por los dirigentes soviéticos.

(6) El texto final de la cumbre incluye críticas a EE.UU. por el apoyo político, financiero y militar a Israel, incluida la ayuda económica adicional para la instalación de los judíos soviéticos en Palestina, así como por la decisión del Senado y Congreso norteamericanos por el reconocimiento de la capitalidad israelí de Jerusalén.

(7) Texto final de la reunión extraordinaria de máximos dirigentes árabes, 28-30 de mayo de 1990. Secretaría General de la Liga de Estados Árabes.

(8) Mayeb Dibsi, "Jordania: crisis y democratización". *Nación Árabe*, n.º 12, vol. V; septiembre, 1990.

(9) Maher Salameh, "The concept of transfer in Zionism", *Democratic Palestine*, n.º 40; July-August, 1990.

(10) Tras la devolución del Sinaí egipcio, básicamente la totalidad de Gaza y amplias zonas de Cisjordania. El Golán, anexionado en 1981 al Estado de Israel, sufrió un dramático proceso de despoblamiento con motivo de la guerra de 1967. 125.000 drusos sirios —90% de la población local— abandonaron sus hogares. En la actualidad 12.000 colonos judíos residen en El Golán, una cifra que, según anunció el ministro de la Vivienda israelí el pasado mes de marzo, se pretende duplicar: *Nación Árabe*, n.º 14, vol. V; julio, 1991.

(11) El Leonard Davis Institute for International Relations de la Universidad Hebrea de Jerusalén sintetizaba las opciones que las dos formaciones israelíes mayoritarias barajaban en relación al futuro de los territorios ocupados (*Palestine*, n.º 24-25, vol. 11; mayo, 1986). El Likud defiende un acuerdo con Jordania basado en el lema "paz a cambio de paz" y que, siguiendo el espíritu y la letra de los Acuerdos de Camp David de 1979, suspende el proceso de retirada de los territorios ocupados por medio de una fórmula de "auto-administración" palestina que no cuestione el control efectivo por Israel de Gaza y Cisjordania. De hecho, por su ambigüedad, el no-plan del Likud se reduce al mantenimiento de la ocupación a la espera de un "milagro", como definiría Shamir a esa *aliya* (migración) no prevista de los judíos provenientes de la URSS. La alternativa laborista procura conjurar la pérdida de la etnicidad judía de Israel por medio de una retirada parcial, desmilitarización y "devolución" a Jordania —no a los palestinos— de Gaza y de las áreas más densamente pobladas de Cisjordania (Jenin, Renallah, Jericó, Belén, Nablús...). Israel se anexionaría, según este plan denominado de "Compromiso regional" o, en su denominación más conocida, de "territorios a cambio de paz", el 37% restante del territorio de Cisjordania (2.000 Km²) con un 18% de la población de la Ribera.

(12) Informe presentado por el director del Departamento de Estadística de la Universidad Hebrea de Jerusalén el 11 de mayo de 1986 al Gobierno israelí: *Palestine*, n.º 28, vol. 11; July, 1986. Véase al respecto "The Palestinian population of the Middle East", en *Population and Development Review*, 9, n.º 2; June, 1983.

(13) Este proceso de equiparación demográfica puede incluso que se mantuviera aun contando con los aportes migratorios provenientes de la URSS: según estudio del Institute for Contemporary Jewish Studies de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la paridad árabe-judía tan sólo se retrasaría en cinco años, del 2.015 al 2.020: *Al Hadaf Newsletter*, n.º 19; julio, 1990.

(14) Una de las condiciones impuestas a la normalización de relaciones con EE.UU. y la Comunidad Europea, no solamente a la URSS, sino al conjunto de países del que fuera llamado bloque socialista europeo era precisamente, por un lado, la paulatina recuperación de relaciones con Israel (la última, en el mes de agosto, por parte de Albania), y el apoyo a la migración judía hacia Israel/Palestina, bien autorizándola, caso de la URSS, bien estableciendo las rutas aéreas necesarias, caso de Polonia, Rumanía o Hungría. En relación a la canalización de la migración judía hacia Oriente Medio y el mecanismo para ello, véase *Israel & Palestine Political Report*, n.º 158; June-July, 1990. La OLP, defendiendo el derecho al libre tránsito de los ciudadanos soviéticos —reiterado por la Liga Árabe en su comunicado final de la cumbre de mayo de 1990—, critica esta canalización obligatoria hacia la región.

(15) *Palestine*, n.º 28, vol. 11; July, 1986. A mediados de la década de los 80, se estimaban en 350.000 los judíos que habían abandonado Israel desde su creación.

(16) Habrá que esperar a ver cuál es el impacto de los sucesos de agosto en la URSS sobre las expectativas oficiales israelíes de llegada de medio millón de judíos soviéticos en 1991. Es de suponer que se mantendrá el convenio firmado por el ministro de Transportes israelí en Moscú el 14 de agosto, muy pocos días antes del golpe de Estado en la URSS (*Le Monde*, 16 de agosto), por el cual El Al y Aeroflot establecerán vuelos directos entre Israel y la URSS para el traslado de los judíos soviéticos, una reiterada exigencia israelí que evitará su tránsito por terceros países y que finalmente se ha suscrito sin que las autoridades israelíes satisficieran la petición inicialmente solicitada por los soviéticos de no instalar en Palestina ocupada a los emigrantes.

(17) "Demographic Yearbook, 1988". NNUU; 1989; y *Al Hadaf Newsletter*, varios números; 1990-91.

(18) El último episodio de ese proceso, una vez retirado el contingente occidental del norte de Irak y estacionado en Turquía como fuerza de despliegue rápido norteamericano-europea, lo protagoniza el propio Gobierno de Ankara con su ofensiva de agosto contra las bases en Irak de la guerrilla kurdo-turca del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistan). También Turquía, como aprendiz de gendarme local, recoge de un maestro a emular, Israel, conceptos como "franja de seguridad", después de que el primer ministro británico Mayor rescatara de la memoria de la región aquel

otro de "enclave" (en relación al Kurdistan iraquí) que sirviera para la creación del Estado de Israel. Tal identificación de Turquía con Israel no es banal dentro de la recomposición del control de la seguridad en la región medio-oriental, como tampoco lo es la actitud de Irán durante y después de la guerra.

(19) En este sentido, los progresos en el proceso de liberación de los rehenes occidentales en manos de grupos islamistas libaneses durante el mes de agosto (llamativamente gestionadas en su primera fase por una organización opositora integrista iraquí, Al Dawa, intermediaria ante el Gobierno británico: *Le Monde*, 13 de agosto), o la recuperación de relaciones entre Teherán y Riad tras la guerra son claros ejemplos de ese proceso iniciado con la llamada neutralidad iraní durante la guerra.

(20) Una nueva reunión celebrada en la capital kuwaití en la semana del 15 al 19 de julio entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, Egipto y Siria concluyó sin acuerdo sobre la creación de una fuerza de seguridad local árabe. Sorprendentemente, para mayor irritación egipcia, las petromonarquías del Golfo plantearon la necesidad de otorgar a Irán un papel relevante en la seguridad de la zona.

(21) El proceso de legitimación interno de las petromonarquías oligárquicas de la península Arábiga se sustenta exclusivamente en el porcentaje de los beneficios petrolíferos que disfrutaban unas poblaciones privilegiadas convertidas en rentistas (Bichara Khader, *El mundo árabe ante el año 2000. Estudio de sociología y economía*. Ed. Cantarabia; Madrid, 1988). En cuanto al resto del mundo árabe, subdesarrollado y en estado crónico de penuria, el freno puesto desde la década de los 80 a la migración árabe por las monarquías del Golfo frente a los —menos conflictivos— contingentes asiáticos (Jean Gueyras, "La fin de l'âge d'or des Palestiniens dans le Golfe"; *Le Monde*, 3 diciembre, 1988), así como la reducción humillante de su ayuda al desarrollo de los Estados árabes pobres (que descende entre 1976 y 1988 del 4,23% al 0,86% del PIB), ahonda aún más un abismo que en la conciencia colectiva árabe se fundamenta en la estricta comprensión de una arbitraria fragmentación colonial que escindió en el período de entreguerras, población y recursos.

(22) "Un nuevo orden internacional". *Política Exterior*, vol. IV, núm. 17; págs. 47-60; Otoño, 1990.

(23) Recurriendo a la sutileza del Director General de Política Exterior para África y Medio Oriente del Ministerio español de Exteriores, Jorge Dezcallar: "En el fondo, todos los problemas están relacionados en Oriente Medio, no en el sentido de que uno depende de otro —como pretende Sadam Husein— sino de que unos influyen sobre otros y viceversa". ("España ante el problema palestino". *Política Exterior*, n.º 19; 1991).

(24) Los beneficios de Siria y Egipto por su actitud durante la crisis parecen así más inmediatos y limitados que de índole estratégica. La *normalización* de la situación libanesa bajo control hegemónico sirio no debe asociarse a la postura de Damasco durante la guerra, habida cuenta que el proceso estaba ya en marcha desde la firma del Acuerdo interlibanés de Taef de finales de 1989, promovido por un comité tripartito de la Liga Árabe. Sin duda, la actitud siria y el clima regional sí facilitaron el despliegue del Ejército libanés al sur de Sidón y, con ello, el desarme de los combatientes palestinos. Por su parte, Egipto ha visto reducida a la mitad por el FMI su deuda externa, además de anulada la deuda militar con EE.UU. y la contraída con las petromonarquías, aunque para sus trabajadores sigue cerrado el mercado laboral del Golfo y su participación subvencionada en un dispositivo de seguridad regional queda postergada, como hemos comentado.

(25) La agencia palestina Wafa daba a conocer en los primeros días de agosto las cinco "garantías" exigidas por la OLP para participar en la conferencia regional promovida por EE.UU.: (1) que el objetivo de la conferencia sea la aplicación de las resoluciones 242 y 338 del CS de NNUU, es decir, la retirada israelí de los territorios ocupados en 1967, incluida Jerusalén Este; 2) reconocimiento de los derechos nacionales palestinos; 3) designación por la OLP de la delegación palestina; 4) discusión del futuro de Jerusalén; y 5) paralización de los asentamientos en los territorios ocupados.

(26) Issam Salem, "La credibilidad de la OLP", *El País*, 7 de mayo de 1991. En cuanto a la postura oficial de la OLP en relación a la crisis del Golfo, la guerra contra Irak y la situación tras el conflicto es recomendable la lectura del texto final de la reunión de su Consejo Central, celebrada entre el 21 y el 23 de abril en Túnez (traducido en *Nación Árabe*, n.º 14, vol. VI; julio, 1991).

(27) El 20 de marzo del presente año, un informe del Departamento de Estado norteamericano señalaba que la cifra de colonos israelíes en los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y el Golán sirio superaba los 200.000, el 13% de la población. El porcentaje de judíos soviéticos instalados en los territorios ocupados es del 4% según el informe norteamericano, frente al 1% oficial israelí: *Nación Árabe*, n.º 14, vol. VI; julio, 1991).

(28) En entrevista publicada el 5 de agosto en el semanario *Newsweek*, el presidente Hafez Al Asad centraba el proceso de negociación bilateral sirio-israelí necesariamente en la retirada y devolución del Golán ocupado.

cuba



EDITA: COORDINADORA ESTATAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA

Número 1. Diciembre 1991

Andalucía: COLECTIVO CULTURAL «GINER DE LOS RÍOS» DE RÓNDRA; Aragón: COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE ZARAGOZA; Asturias: COSAL ASTURIAS, ÁREA DE PAZ Y SOLIDARIDAD DE IU-OVIEDO; Baleares: COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON CENTRO Y SUDAMÉRICA DE PALMA DE MALLORCA; Canarias: ASOCIACIÓN DE AMISTAD CANARIAS-CUBA, COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE TENERIFE; Cataluña: ASOCIACIÓN CATALANA DE BRIGADISTAS A NICARAGUA, COORDINADORA DE CASALS D'AMISTAT CATALA-CUBA DE CATALUNYA; Extremadura: ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA; Galicia: ASOCIACIÓN DE AMISTAD GALEGO-CUBANA «FRANCISCO VILLAMIL»; Promotora DE LA ASOCIACIÓN DE AMISTAD GALEGO-CUBANA EN MOÑA-CANGAS; Valencia: CEOSALA, RADIO KILARA; Madrid: COSAL LEGANES, COSAL LA ALHONDIGA GETAFE, COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON EL SUR-TORREJÓN DE ARDOZ, COMITÉ DE APOYO A LA REVOLUCIÓN CUBANA DE ALCALA DE HENARES, ATENEO CULTURAL PRIMER DE MAYO DE LEGANES, COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA «PABLO DE LA TORRIENTE BRAU» DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, COSAL VALLEKAS, COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS, SODEPAZ, ONG SUR, COLECTIVO DE SOLIDARIDAD CON CUBA DE TELEFÓNICA «LAGARTO VERDE»; COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON CUBA DE LAVAPIES, OSPAAAL, COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE MADRID, ENTREPUÉBLOS, GRUPO DE APOYO A LA COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO-CUBANA DE MADRID, COLECTIVO ADELFA JUVEN. - COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON EL SALVADOR, COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LA CAUSA ARABE.

*coordinadora estatal
de solidaridad con*

CUBA



ROMPAMOS el BLOQUEO

Paramilitares, autodefensas y narcoterrorismo en Colombia. 1980-1990

Carlos Medina Gallego *

Introducción

Este ensayo tiene como única pretensión aproximarse desde el análisis histórico al tratamiento y definición de las categorías que se vienen utilizando para designar los fenómenos de violencia parainstitucional.

Considero que términos como Paramilitares, Autodefensas, Narcoparamilitares, Narcoterroristas, Grupos de Justicia Privada, Escuadrones de Sicarios, que se vienen empleando para señalar ciertos fenómenos de violencia, pocas veces son utilizados adecuadamente. El trabajo de investigación realizado sobre formas parainstitucionales de violencia (1) me convoca esta vez a arriesgar un ejercicio de sistematización histórico-conceptual que contribuya a construir una tipología de estas manifestaciones específicas de la violencia. Se trata entonces de reflexionar sobre un fenómeno que fue abordado en una primera etapa de reconstrucción, cuyo resultado se plasmó en el texto ya señalado, con el fin de darle una presentación más precisa al mismo, contribuyendo con ello a la mayor comprensión del fenómeno para un tratamiento académico y político más adecuado.

La violencia parainstitucional es un fenómeno estructural que se inscribe en los procesos de confrontación social

Quisiera comenzar haciendo algunas aclaraciones que pudieran parecer elementales, pero que considero necesarias para la comprensión del fenómeno parainstitucional de la violencia. Lo hago movido por un doble interés: dar a conocer el marco teórico en torno al cual gira la reflexión, y hacer la misma lo más didáctica posible, para que puedan tener acceso a ella diversos sectores.

Comencemos afirmando que un Estado puede considerarse fuerte cuando ejerce el monopolio de la ley, la justicia y la fuerza; cuando tiene el suficiente poder para manejar los conflictos sociales mediante el diálogo y la negociación; cuando es complementado por una sociedad civil fuerte que lo respalda o lo confronta en sus determinaciones; cuando no existe posibilidad alguna de que ésta lo desborde privatizando el ejercicio de la justicia y la fuerza; en síntesis, cuando ejerce hegemónicamente el poder.

* El autor es profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

Desde los orígenes de la República, nuestro país ha vivido en medio de una crisis permanente; su ordenamiento social y político se ha buscado a través de mecanismos de coacción, siendo más los instrumentos policiales y represivos los utilizados para solucionar los conflictos, que las vías del diálogo y la negociación, a las que sólo se llega después de sangres fratricidas. No ha existido una vocación transformadora de los modelos de desarrollo económico y político, sino más bien una tendencia hacia el inmovilismo continuista.

La incapacidad del Estado para resolver los viejos y nuevos problemas, para aceptar los retos de la transformación social y su propia modernización, lo ha llevado a buscar soluciones de fuerza para manejar los conflictos: la institucionalización de la violencia, la práctica de formas de terrorismo de Estado, el recorte de hecho de la participación política, el impulso de estrategias oficiales para impedir el surgimiento y fortalecimiento de formas organizadas de la sociedad civil, la disminución de las posibilidades de organización y participación popular, el recorte del legítimo derecho de protesta, son algunas de las manifestaciones evidentes de la pérdida de los espacios de participación democrática, que parecen olvidarse al arrullo de la Descentralización Administrativa, la Elección Popular de Alcaldes, los Comités de Participación Comunitaria, las Juntas de Administración Local y otras modalidades de una supuesta democratización del poder.

El estudio de los acontecimientos políticos y sociales de la década de los 80, pone de manifiesto que frente a los conflictos sociales predominaron las soluciones de fuerza institucionales y parainstitucionales a través de dos procedimientos.

1. Mecanismos legales para recortar sistemáticamente los canales de expresión política:
 - Regulación del Estado de Sitio.
 - Promulgación de Leyes y Decretos de carácter represivo.
 - Participación de la Fuerza Pública en el conflicto social del lado de los sectores dominantes.
 - Recorte de las libertades civiles y derechos políticos.
2. Mecanismos extralegales, parainstitucionales y paramilitares:
 - Actos de despojo.
 - Allanamientos sin fórmula de juicio.
 - Violación de correspondencia.
 - Intercepción telefónica.
 - Tortura para castigar delitos de opinión.
 - Privación de libertad sin proceso y sin juez.
 - Fusilamientos preventivos.
 - Asesinatos y desaparición de dirigentes de oposición.
 - Surgimiento de grupos paramilitares y de autodefensa financiados por los gremios económicos, y organizados y protegidos por instituciones y organismos del Estado.

Algunas de estas prácticas son propias del terrorismo de Estado, y han sido y son comunes en los países de América Latina.

Los grupos paramilitares y de autodefensa obedecen a estrategias oficiales de lucha contrainsurgente

Al reflexionar sobre los acontecimientos que a partir de 1980 comienzan a ocurrir en el país, se encuentra fácilmente la concepción general de lo que se ha denominado la Doctrina de la Seguridad Nacional, aplicándose mediante un modelo de orden público que indirectamente considera que en nuestro país se está desarrollando una guerra no convencional, no declarada, entre dos sistemas políticos: la democracia vs. el comunismo.

Pero contrario a lo que se podía pensar, el blanco de este conflicto no lo consti-

tuyen los grupos insurgentes, considerados como el enemigo interior, sino la población civil, que se concibe como base política y social del enemigo. Planteado así el conflicto la guerra se da a todos los niveles; es una guerra política, económica y psicológica que evoluciona como una respuesta al crecimiento de los Movimientos Populares. Sin embargo, el elemento que consideramos importante señalar aquí de la Doctrina de la Seguridad Nacional, es que la capacidad de adaptación de los militares a la nueva forma de guerra pasa por la creación de un "ejército propio y una fuerza no convencional de soldados y especialistas de guerra", que es lo que comúnmente se conoce como organismos paramilitares. Estos están destinados fundamentalmente a desarrollar una política de violencia sistemática contra trabajadores, campesinos, maestros, dirigentes sindicales y políticos, líderes comunales, en la que se refleja el cambio en el patrón de guerra. En esta nueva estrategia se afirma que el comunismo se ha infiltrado a través de organizaciones gremiales y sindicales, grupos religiosos y comunitarios, organizaciones que se reclaman democráticas, y que por lo tanto estas organizaciones, conjuntamente con los grupos políticos de izquierda, deben ser el blanco principal de los ataques, porque son los verdaderos enemigos.

En esta concepción de guerra no convencional, las acciones militares adquieren una dinámica distinta que se manifiesta en la eliminación selectiva del enemigo (líderes políticos, sindicales y populares), la masacre colectiva (contra quienes apoyan la subversión y se niegan a brindar información a la inteligencia militar) y el genocidio (contra las zonas y regiones en que existe un reconocimiento formal de la influencia del movimiento insurgente). Se recurre para el desarrollo de esta concepción a sicarios procedentes de las FF.MM. y la población civil.

Esta situación genera migración poblacional y repoblamiento de las zonas de influencia guerrillera con agentes que respaldan o se identifican con la concepción contra-insurgente, logrando aislar los grupos armados que se oponen al régimen, del apoyo campesino, obrero y popular.

La aplicación de las estrategias de la Doctrina de la Seguridad Nacional es lo que se ha denominado en Colombia "la guerra sucia", que como se puede ver no es una actividad anárquica e impensada, sino que se estructura desde una concepción planificada de la lucha contrainsurgente.

El narcoparamilitarismo es una desviación del fenómeno paramilitar

La articulación del Narcotráfico al proceso de confrontación social del lado del anticomunismo, fortaleció los grupos paramilitares desde el punto de vista económico, aumentando su capacidad operativa, pero inició simultáneamente un proceso de desviación política y militar-operativa.

El paramilitarismo atravesado por el capital del Narcotráfico sumó a su responsabilidad de confrontar la subversión y el comunismo, la de proteger la industria del Narcotráfico. Este último oficio terminó desviando los objetivos iniciales del fenómeno paramilitar. En esta medida se hace necesario establecer la diferencia entre un paramilitarismo de carácter estructural, articulado a las estrategias de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y un narcoparamilitarismo, cuyo anticomunismo es ocasional y sólo se constituye en un pretexto para desalojar, asesinar y justificar todo tipo de acción que les permita a la vez ganar aceptación en la sociedad convencional, entre los sectores más retardatarios, y protección para el desarrollo de la industria del narcotráfico. Esto se evidencia con toda claridad en el implemento de la capacidad operativa y de defensa del narcotráfico, en el incremento de las prácticas de asesinatos políticos y masacres colectivas, comprometiendo en ellas no sólo a militantes de izquierda, sino además, a funcionarios públicos, militantes y dirigentes de los partidos tradicionales, a personalidades democráticas y a toda aquella persona que considera que limita o impide sus actividades.

El sicariato y el narcoterrorismo, principalmente, es la forma que asume la confrontación entre el narcotráfico y el Estado colombiano

Considero que el asesinato de destacadas personalidades de la vida pública nacional a manos de los escuadrones de sicarios, expresa una estrategia de presión del narcotráfico a la clase política con el fin de obtener de ella comportamientos y determinaciones ejecutivas, legislativas y judiciales que los ubique en posibilidades de articularse a la vida en sociedad en términos favorables. La lucha contra la extradición y por la reducción de penas ha sido acompañada por distintos mecanismos de terror que van desde el asesinato selectivo, el genocidio, el aniquilamiento sistemático de policías, los atentados dinamiteros, hasta la última modalidad de presión empleada: el secuestro de opinión.

Este tipo de acción corresponde a una estrategia que por su procedencia, finalidad y característica he de denominar Narcoterrorismo.

El Narcoterrorismo es la expresión mediante la cual el Narcotráfico busca crear una atmósfera de negociación que le permita lograr "reivindicaciones políticas" en el tratamiento de sus conflictos y problemas con el Estado. Considero que el Narcoterrorismo está desprovisto de todo tipo de reivindicación ajena a los intereses sociales y económicos del Narcotráfico; es un mecanismo de defensa frente a los ataques del Estado, y de presión para conseguir unas condiciones de negociación favorables y un tratamiento especial a sus delitos. Objetivo que (pienso) vienen logrando poco a poco. El cambio de actitud del Estado frente al fenómeno del Narcotráfico, manifiesto no sólo en los Decretos de reducción de penas sino en el manejo del lenguaje respecto a la extradición, parecen evidenciar esto.

La lucha contra el narcotráfico en nuestro país no ha sido otra cosa que el cumplimiento de lo dispuesto en el documento Santa Fe II para Colombia

Si se miran con detenimiento las medidas adoptadas por el presidente Bush, a través del Plan Bennett, y el presidente Barco, con los Decretos de estado de sitio, se encuentra fácilmente la aplicación de los lineamientos generales del Documento "Santa Fe II", con el que el Gobierno de los Estados Unidos dirige sus relaciones con América Latina:

"Estados Unidos debe ir más allá del fortalecimiento del sistema judicial existente en Colombia, respaldando las Cortes Especiales bajo el control conjunto del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, para enfrentar la amenaza de la subversión y el Narcotráfico, que representan una guerra abierta contra el régimen democrático. Estas Cortes deben tener autoridad para juzgar con rapidez, y condenar a centros especiales de detención que estén bajo el control del Ejército a los subversivos y a los narcotraficantes... si no se toman medidas enérgicas pronto se repetirá a gran escala el problema de El Salvador. Colombia se tornará en otro El Salvador para mediados del noventa, si no antes... pero con la diferencia de que en Colombia se enfrenta también a otro enemigo: el poderoso y bien organizado cártel del Narcotráfico... para empeorar las cosas, los guerrilleros colombianos y los cárteles de la cocaína trabajan juntos, para hacer avanzar algunas veces sus contradictorios objetivos... si no se invierten las tendencias actuales, Colombia experimentará un levantamiento, el cual afectará directamente a los Estados Unidos" (Documento Santa Fe II).

La creación de grupos especiales para combatir el Narcotráfico (cuerpo de élite de la Policía) cuyo desempeño está coligado a la lucha contra la subversión, al igual que la creación de un equipo especial de jueces de orden público, acompañados de Legislación de Estado de Sitio, cuya característica particular es la de ser aplicable, no sólo a delitos que tienen que ver con la industria y las actividades del Narcotráfico,

sino también a las formas de resistencia y oposición política de la sociedad civil, evidencian claramente la implementación de medidas jurídicas y militares en cumplimiento de lo dispuesto por el Documento Santa Fe II. También lo evidencia, el tipo de ayuda militar que ha recibido el Estado colombiano: armamento para el desarrollo de guerras no convencionales; lucha contrainsurgente.

El movimiento insurgente contribuyó con sus políticas de financiación y consecución de recursos económicos a justificar la creación de grupos parainstitucionales

Los medios a través de los cuales el Movimiento Insurgente consigue los recursos económicos que le permiten sostener y desarrollar sus actividades de lucha revolucionaria, contribuyeron a justificar la creación de grupos Parainstitucionales, pero, no fueron la causa de la creación de los mismos. Su razón de ser debe ubicarse principalmente en el crecimiento del Movimiento Popular y Revolucionario y en su participación cada vez más decidida en los procesos de transformación social.

Las ayudas "voluntarias", que se tornaron excesivas, el boleteo, la extorsión, el secuestro, la vacuna ganadera, fueron abonando de inconformidad el terreno en el que los planteamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el conflicto de baja intensidad, prendieron y se desarrollaron rápido, inicialmente a través de grupos paramilitares y luego, al generalizarse el fenómeno, cambiando por persuasión o coacción la mentalidad de la población, como Grupos de Autodefensa.

En definitiva, lo que quiero afirmar aquí, es que las prácticas de boleteo, secuestro, extorsión, contribuyeron a justificar el fenómeno paramilitar pero no son las causas del mismo, sino que éstas deben buscarse en las estrategias oficiales de lucha contrainsurgente.

Breve reseña histórica del fenómeno parainstitucional en Colombia. Sobre los orígenes de los grupos paramilitares

El surgimiento de grupos paramilitares en Puerto Boyacá (2) comienza a producirse a inicios de 1982, en medio de circunstancias muy específicas: por una parte, las acciones de tipo militar adelantadas por el Batallón de Infantería n.º 3 "Bárbula", fortalecidas a partir de mediados de 1983 por la XIV Brigada y, por otro lado, la ofensiva de las FARC, sobre la población local a través de mayores exigencias económicas y secuestro. El alcalde militar de ese entonces coordinó encuentros entre el Comandante del Batallón Bárbula, Teniente Coronel Jaime Sánchez Arteaga, y los ganaderos y campesinos de la región para organizar un cuerpo de autodefensa contra las F.A.R.C.

La tendencia de la población, en particular de los propietarios de tierra y de ganado, en ese momento es la de colocarse al lado del ejército, al que ahora ven como una institución lo suficientemente fuerte para ofrecerles protección contra los que fueron durante la década anterior sus principales protectores: las F.A.R.C.

El proceso se inició en la región con la creación de un ejército privado o grupo paramilitar, para que, conjuntamente con el ejército, combatiera la subversión. Este grupo se constituyó durante la Alcaldía del Capitán Oscar Echandía, en una reunión en la que además del Alcalde asistieron representantes de la Texas Petroleum Co., miembros del Comité de Ganaderos, jefes políticos, la Defensa Civil, miembros de las FF.MM., comerciantes y otros invitados "especiales" que desempeñaron un importante papel en el proceso que se iniciaba, algunos de ellos víctimas directas o indirectas de las prácticas de secuestro (3).

Para poder financiar la creación de ese grupo se contó con la ayuda de los ganaderos de la región, quienes aportaron según el principio: "de cada cual según sus necesidades a cada cual según sus posibilidades".

Las operaciones conjuntas del grupo paramilitar y el Ejército Nacional centraron su atención inicialmente en la desarticulación del trabajo y la Organización política del PCC y las F.A.R.C.; para hacerlo, ejercen una brutal represión contra la población campesina y urbana. En forma sistemática y selectiva, persiguen activistas y dirigentes sindicales, cívicos y políticos, a campesinos y ganaderos y a toda persona que en alguna forma tenga relación con esas organizaciones o pueda servirles de apoyo: "Fumigan" el municipio, hasta hacer una limpieza general.

Con base en la iniciativa de Enrique Tobón (4) y Nelson Lesmes, inician la limpieza de la región: asesinan a ocho supuestos miembros de las F.A.R.C. a comienzos de 1982; al ganadero Mauro Valencia, a quien se le atribuía el hecho de desempeñarse como tesorero de la guerrilla; al Presidente de la Asociación de Provienda; y a 9 jóvenes de la vereda El Delirio, que supuestamente hacían los mercados para el XI Frente de las F.A.R.C.

La ofensiva se dirigió no sólo contra los dirigentes del PCC y los miembros de las F.A.R.C., sino que también comprometió otras fuerzas políticas, en particular, miembros del Nuevo Liberalismo. Por esta época fueron asesinados el concejal y ex-alcalde de Puerto Boyacá, Martín Torres, el médico Luis Silva y el dirigente Benjamín Quiñones, todos militantes del Galanismo.

Hecha la limpieza del Municipio se proyecta la acción sobre las zonas limítrofes de los Departamentos de Antioquía, Caldas, Cundinamarca y Santander, en los corregimientos y veredas de los municipios de Yacopi, Cimitarra, Puerto Nare, Puerto Berrio, Puerto Salgar y la Dorada.

Las acciones combinadas del ejército y las fuerzas paramilitares se hicieron acompañar de bombardeos y asesinatos de pobladores, según los testimonios de los habitantes de las zonas limítrofes e interior de Puerto Boyacá; en la región de la Corcovada; en los caseríos El Delirio, Matecoco, El Cruce de Nutrias, El Cruce de Zambito y el Chaparro. En agosto de 1983 se realizaron operativos conjuntos de los organismos paramilitares y el Ejército Nacional, creando un estado de terror entre la población.

Al finalizar el año de 1982 y durante la mayor parte de 1983 los campesinos de la región comenzaron a denunciar ante las autoridades nacionales, la presencia de grupos paramilitares en Puerto Boyacá y sus zonas de influencia en Santander y Cundinamarca. Los describían como grupos de civiles armados cometiendo al amparo de las Fuerzas Armadas atropellos y asesinatos con la población bajo el señalamiento de hacer parte de grupos guerrilleros o auxiliares de los mismos; la cantidad de muertes que se producen en el período comprendido entre mediados de 1982 y 1983 conmueven profundamente a los sectores democráticos de la población y a la Iglesia del Magdalena Medio, la que también habría de soportar amenazas y asesinatos.

Las denuncias promulgadas por la población, las fuerzas políticas y la Iglesia inquietan a las altas esferas gubernamentales y llevan al Presidente Betancurt a solicitar al Procurador General, que abra una investigación sobre el movimiento paramilitar (octubre de 1982).

El informe de la Procuraduría y la institucionalización del movimiento paramilitar

La Procuraduría a partir del mes de octubre, acogiendo a la solicitud formulada por el Presidente Betancurt, procedió en coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, a la conformación de un equipo de 8 jueces de Instrucción Criminal, que, acompañados por Fiscales especiales y por investigadores de la Policía Judicial, adelantaron cada uno desde un sitio diferente, las diligencias policivas de indagación preliminar correspondiente, en las regiones más azotadas por este tipo de violencia. Las pesquisas se adelantaron en Medellín, Calí, Barrancabermeja, Puerto Berrio, La Dorada, Puerto Boyacá y Arauca.

Las conclusiones de la investigación dieron cuenta a la opinión pública de haberse hallado por los Jueces y funcionarios citados, mérito suficiente para vincular procesalmente y por el delito de concierto para delinquir y otros conexos, a ciento sesenta y tres personas, cincuenta y nueve de las cuales eran miembros activos del ejército y de la Policía Nacional: altos oficiales, suboficiales y soldados.

El 20 de febrero de 1983 aparece publicado en la prensa nacional el primer informe que el Procurador General de la Nación da a conocer al país, sobre el fenómeno paramilitar. En él aparecen los nombres de militares y civiles cuyo radio de acción se centra en Puerto Boyacá.

El informe de la Procuraduría obligó a pronunciarse no sólo a los civiles implicados, sino a las Fuerzas Armadas, a través del Ministro de Defensa y el Comandante de las mismas, General Matamoros, quienes salieron en una fervorosa defensa de la institución militar. También se pronunciaron FEDEGAN y ANALAC, la primera rechazando el vínculo de los ganaderos con las organizaciones paramilitares, y la segunda ofreciendo su apoyo económico a fin de contribuir a la eficiente dotación de las FFAA. Como resultado de este informe y de las implicaciones del mismo, a partir de 1983, se incrementa la ayuda económica para las FFAA. con el fin de dotarlas de armamento y material necesario para combatir la subversión, y se busca la manera de legalizar los grupos que hasta ese entonces venían operando "conjuntamente" con el ejército al "margen de la ley".

El Procurador General de la Nación, Dr. Carlos Jiménez Gómez, a cuyo cargo estuvo la investigación, explica el origen y la finalidad de los grupos paramilitares en su informe al Congreso en los siguientes términos:

"Se estaba extendiendo la viciosa costumbre de que los militares se apoyaran en gentes privadas para llevar a cabo sus labores de contrainsurgencia... se trata pura y simplemente de gentes oficiales que se desbordan frente a la tentación de multiplicar su capacidad de acción y de aprovechar agentes privados, a quienes empiezan por tomar como "guías" e "informantes", colaboradores y auxiliares en general, y terminan utilizando como brazo oculto para que en el plan de sicarios, hagan oficiosamente, lo que oficialmente no pueden hacer".

A partir de febrero de 1983, los grupos paramilitares lejos de entrar en crisis, inician una etapa de legalización y reconocimiento público de su lucha contrainsurgente, se comienzan a transformar, en el caso específico del Magdalena Medio Boyacense, en un proyecto político, social, económico y militar. Allí, adquieren una estructura formal y legal y empiezan a irradiar su acción a todo lo largo del Magdalena Medio sur y a convertirse en ejemplo para otras regiones del país, como son el caso del Hila y Casanare. El crecimiento y desarrollo de los grupos paramilitares se da en una doble explotación de la situación política del país. Por una parte, combaten radicalmente la subversión y se oponen a las políticas de tregua, amnistía, diálogo nacional y apertura democrática impulsadas por el Gobierno de Betancurt, y por otra, se inscriben en los programas de rehabilitación del Gobierno con el fin de recibir la ayuda necesaria oficial para impulsar su propio proyecto.

Las orientaciones ideológicas y políticas que reciben los grupos paramilitares del Magdalena Medio son variadas: Pablo Emilio Guarín Vera, jefe político de la región y primer vocero del anticomunismo, mantiene una estrecha relación con el Ministro de Gobierno, Jaime Castro, a quien reconoce como su jefe político; Luis Rubio, segundo responsable político, mantiene unas excelentes relaciones con el General Vega Uribe, y la Sociedad Colombiana de defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (T.F.P.), ambos jefes políticos expresan su admiración por los Generales Daniel García Echeverri, y Faruk Yanine Díaz, quienes desde la XIV Brigada impulsan la aplicación de los fundamentos de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Otros dirigentes políticos ligados a la región durante esta época fueron Alberto Santofimio Botero y Ricardo Mendieta Rubiano. La Texas Petroleum Co. contribuyó a asesorar el proceso a través

de trabajadores sociales de la Asociación Cristiana de Jóvenes (A.C.J.) quienes emprendieron programas comunitarios con las mujeres y los jóvenes de la región.

De los grupos paramilitares a las autodefensas: marchas, encuentros e instituciones

Comencemos por señalar que los grupos paramilitares y los grupos de autodefensa, constituyen dos formas de organización de los ganaderos distintas y que se corresponden en el tiempo a dos momentos diferentes: los Grupos Paramilitares son ejércitos privados, grupos de civiles organizados que patrullan la zona (uniformados incluso), acompañando al Ejército en los allanamientos y detenciones, o en los enfrentamientos armados con la guerrilla: son la "vanguardia" del Ejército, marchan adelante de él buscando el contacto con la insurgencia armada. Estos grupos están financiados por los hacendados, ganaderos y comerciantes de la región, y los que hacen parte de ellos reciben un salario. Son mercenarios de la lucha contrainsurgente, al servicio del Ejército. Los Grupos Paramilitares se desempeñan como grupo de defensa permanente en las regiones limítrofes y puntos de posible contacto con la guerrilla. Al comienzo del proceso estuvieron a cargo de la limpieza de la región, fueron "los fumigadores", posteriormente contribuyeron a la creación de las Autodefensas.

Las Autodefensas ganaderas, obedecen más a lo que Pablo Guarín llamó una "estrategia de defensa" en la cual "todos" los pobladores de la región se articulan a formas de organización variadas para la defensa de la zona. La mayor parte de la población se arma y se acoge a unas normas de comportamiento específicos señaladas por quienes dirigen. Según Pablo Guarín, las Autodefensas es la posibilidad de crear una correlación de fuerzas que evite el enfrentamiento por mutuo temor o respeto. Las Autodefensas son el proceso lógico que sigue al desarrollo de los Grupos Paramilitares, a ella se integra la población civil, después de haber sufrido directa e indirectamente la acción de los grupos Paramilitares, de haber sido sometida a un proceso de persuasión ideológica y política que opera en un cambio de mentalidad de los habitantes de la región hacia la guerrilla, o de sentir los mecanismos de coacción que los somete por la fuerza del terror y el miedo al proyecto contrainsurgente al que terminan acomodándose por resignación.

Al finalizar el año de 1983, se inicia un proceso de institucionalización y reconocimiento de la Autodefensa Ganadera y de la lucha antisubversiva en la región, a través de los mismos mecanismos que los grupos de oposición venían utilizando para llamar la atención del Gobierno Nacional y buscar la desmilitarización de las zonas y freno a la represión oficial: marchas, movilizaciones y encuentros de campesinos, ganaderos, comerciantes y dirigentes regionales, para confrontar la política de paz del Gobierno de Betancur y solicitar la militarización de la zona y la presencia permanente del Ejército, comienzan a darse.

En el mes de noviembre se desplaza hasta Bogotá un grupo de campesinos acompañados de ganaderos y dirigentes políticos con el fin de entrevistarse con el Presidente y darle a conocer la situación del Magdalena Medio. El objetivo central: solicitar la militarización de la zona y ayuda económica para su desarrollo.

De las marchas se pasa a las concentraciones en las que abiertamente se convoca a la creación de mecanismos y formas de organización que garanticen el respeto de los acuerdos que los grupos insurgentes firman con el Gobierno. En junio de 1984 son secuestrados funcionarios de la Procuraduría en el Magdalena Medio cuando adelantaban investigación por la muerte de campesinos; el grupo que los retiene se identifica como Autodefensa Campesina, a través de los funcionarios entregan un mensaje al Gobierno Nacional en el que expresan sus objeciones al acuerdo de paz suscrito por el Gobierno con las F.A.R.C.

El 22 de octubre de 1984 se realiza en Puerto Boyacá, un foro en el que los agri-

cultores y ganaderos de la región, analizan los resultados de los primeros cien días de tregua, la declaran fracasada y proclaman a Puerto Boyacá "Fortín antisubversivo de Colombia". Como resultado de este Foro, se comienza a consolidar y desarrollar una institución creada para beneficio de los agricultores, campesinos y ganaderos de la región, idea que venía rondando desde el año anterior, a partir del informe de la Procuraduría.

ACDEGAM: un proyecto político, social, económico y militar para combatir la subversión

Con la sigla ACDEGAM, Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio, se constituye una entidad bajo la cual se comienza a erigir el proyecto más claro y desarrollado de lucha antisubversiva en el país.

ACDEGAM debe ser considerada desde la perspectiva de una entidad que tiene dos finalidades fundamentales para desarrollar en esa zona del país: la defensa político-militar de la región y la creación de un proyecto de ayuda socio-económica a los habitantes que soportan las más difíciles condiciones de vida, inscritos en las políticas de lucha antisubversiva.

ACDEGAM, es la institución a través de la cual se organizan, preparan, coordinan y operan los Grupos de Autodefensa, en Puerto Boyacá y su área de influencia en el Magdalena Medio. Los políticos que orientan la Asociación han defendido de palabra y hecho la Autodefensa como un "derecho legítimo" de la población a proteger de la "agresión comunista" sus bienes, vida y honra. Han hecho uso de todas las expresiones y referencias que políticos y militares han promulgado sobre el tema de las Autodefensas y han avanzado considerablemente en hacer que el fenómeno no sólo se legalice, sino que sectores de la población importantes lo crean legítimo.

Desde el punto de vista militar, ACDEGAM representa la organización a través de la cual se coordina la Autodefensa en la región y se confronta a través de las armas las acciones de los frentes de las F.A.R.C. que operan en el Magdalena Medio, más en el espacio de la prevención y la vigilancia que en la confrontación directa. Con características semiclandestinas las actividades militares de ACDEGAM se encaminan a restar las bases de apoyo del PCC; a ejercer una estricta labor de vigilancia en la región eliminando físicamente de ella cualquier indicio de subversión. Para ejecutar los operativos militares ACDEGAM cuenta con "escuelas" de preparación militar, instructores, un armamento moderno, un abundante parque automotor y un equipo sofisticado de radiocomunicaciones. Algunos de los instructores que poseen son desertores de las F.A.R.C., militares en retiro y mercenarios israelíes e ingleses.

La Asociación a través de su personal armado ejerce sobre la población una marcada acción coercitiva que la mantiene en permanente temor; la paz que se respira en la zona es la que impone la justicia privada mediante el hostigamiento armado. Usando como presión el "Grupo", la Asociación consigue las "ayudas voluntarias" de la población.

La fuerza no es el único mecanismo para someter la población, ACDEGAM realiza una permanente labor de adoctrinamiento contrainsurgente entre los campesinos y el sector joven de la población principalmente.

Desde el punto de vista político ACDEGAM a través de sus dirigentes se "inscribe" dentro de la línea oficial del Partido Liberal; para conservar la institucionalidad del movimiento, moviliza la población a manifestarse masivamente en el respaldo a los candidatos de dicho partido. Su influencia y proyección política cubre, el Concejo Municipal, la Alcaldía, la Gobernación de Boyacá, la Cámara de Representantes y el Senado de la República.

En el aspecto social ACDEGAM, se constituye en un proyecto sin precedentes en el país. Sus realizaciones comprometen obras en educación, salud, vías de comunicación e infraestructura, y empresas cooperativas y autogestionarias.

En el corto período de seis años, Puerto Boyacá se constituyó en una especie de “república independiente anticomunista” en la que la aplicación de la fuerza, el ejercicio de la justicia, el control político y administrativo, el impulso de los procesos económicos y sociales, se vigilan y orientan desde ACDEGAM.

Hacia el narcoparamilitarismo y el sicariato

A partir de la ofensiva general que las instituciones lanzaron contra el Narcotráfico por el asesinato del Dr. Rodrigo Lara Bonilla, Puerto Boyacá y el Magdalena Medio comenzaron a convertirse en un “refugio” de este fenómeno.

La afluencia de gentes provenientes de Medellín y otras ciudades del país interesadas en “invertir” en Puerto Boyacá, particularmente en la compra de tierras y ganado, resultaba para 1985 extraña dada las particulares condiciones de violencia en que vivía la región. Para ese entonces había comenzado a sentirse el agotamiento de la población de ganaderos, agricultores y comerciantes, que sentían que se habían quitado el peso de las contribuciones económicas a las F.A.R.C., asumiendo la responsabilidad de sostener un grupo permanente de hombres armados para la defensa de la región, con ayudas que cada vez se hacían menos voluntarias y más forzadas.

La llegada de esta nueva población, no sólo le dio un impulso sin precedentes al desarrollo regional con inversiones millonarias, que transformó sustancialmente las haciendas convirtiéndolas en empresas ganaderas de gran importancia, sino, que además, descargo de parte de la responsabilidad de sostener la defensa a los ganaderos locales, algunos de los cuales aprovecharon los ofrecimientos de compra para vender las propiedades y trasladarse a ciudades como Medellín, Manizales o Bogotá.

La presencia del Narcotráfico en la región, modificó las relaciones del “grupo” con la población y le dio a éste un carácter distinto, ahora además de combatir la subversión El Grupo comenzó a desarrollar actividades de vigilancia y protección de la industria del Narcotráfico.

El Narcotráfico había tenido siempre enemigos “naturales” de los cuales debía cuidarse y combatir, el primero lo constituía la división interna del Cártel, cuya lucha por el control y defensa de mercados había generado la llamada “Guerra de la Coca” y el segundo, las autoridades antinarcóticos, las Fuerzas Armadas, los funcionarios públicos y la prensa. Al aliarse con las Autodefensas “le tocó” adoptar un nuevo enemigo: la subversión.

Las Autodefensas, cuyo enemigo fundamental lo constituía los grupos Insurgentes, al aliarse con el Narcotráfico heredaron los enemigos de éste.

La alianza Narcotráfico-Paramilitares inauguraron una nueva modalidad de lucha Parainstitucional: el Narcoparamilitarismo. Para confrontar, todos sus enemigos, el Narcotráfico requería de un personal altamente capacitado, de soldados mercenarios, un ejército privado de escuadrones de sicarios. En un comienzo las Autodefensas recibieron preparación directa de las Fuerzas Militares a través del Batallón Bárbula, como servicio militar campesino o como autodefensas propiamente dichas, con la introducción del Narcotráfico se crearon centros de capacitación y adiestramiento financiados por Gonzalo Rodríguez Gacha y el Cártel de Medellín. Se dictaron “cursos de especialización” con instructores israelíes e ingleses que dieron como resultado un grupo especial en capacidad incluso de lanzar ofensivas contra los cuarteles de la guerrilla, en Casa Verde, pero fundamentalmente de servir de escoltas y realizar “trabajos especiales” para los principales Narcotraficantes del Cártel de Medellín.

El nuevo fenómeno Narcoparamilitar comienza a operar aniquilando dirigentes políticos de todos los sectores, funcionarios públicos, periodistas y personalidades democráticas e introduce una modalidad de la actividad criminal que ha de asombrar al país por su magnitud: la masacre colectiva y el genocidio.

Los asesinatos del Doctor Rodrigo Lara Bonilla, del Juez Tulio Manuel Castro Gil, del Coronel Jaime Ramírez Gómez, de don Guillermo Cano Izaza, de Jaime Pardo Leal, del Doctor Carlos Mauro Hoyos, de José Antequera, del Doctor Antonio José Betancurt, son entre muchos otros el resultado de las prácticas de sicariato del Narcoparamilitarismo, como lo son de la masacre colectiva y el genocidio los crímenes cometidos en Honduras, Mejor Esquina, Segovia, Granada, Currulao, Turbo, La Rochela, entre otras masacres.

Las investigaciones que el director de DAS venía desarrollando en torno a las masacres que los grupos Paramilitares al servicio del Narcotráfico estaban cometiendo, comprometían a Pablo Escobar Gaviria y a Gonzalo Rodríguez Gacha, pero colocaban también al descubierto la vinculación de altos funcionarios del Estado y de las Fuerzas Militares con el Narco-paramilitarismo y la infiltración del Narcotráfico en altas esferas del Gobierno.

Las prácticas de sicariato, masacres y genocidios estremecieron al país en un desangre que se extendió entre 1986 y 1989.

Tres largos años en que la sociedad civil organizada en Sindicatos, Asociaciones Campesinas, grupos políticos y cívicos, vieron como la acción criminal del Narcoparamilitarismo debilitó profundamente su posibilidad de movilización y lucha reivindicativa; a este período el Movimiento Popular lo denominó de “guerra sucia”.

La actividad Narco-Paramilitar no cesó. Después de diezmar el Movimiento Popular, Sindical y político, de silenciar la protesta de los marginados de Colombia, mediante el asesinato selectivo y el genocidio, se ensañó con notables y personalidades democráticas, cuyo delito más grave fue mantenerse incorruptos frente a las propuestas del Narcotráfico y el de reclamar la solidaridad de la nación para derrotar el delito y la criminalidad que éste representa.

En agosto de 1989, la acción Narcoparamilitar recayó sobre tres importantes personalidades de la vida nacional: el Magistrado Carlos Ernesto Valencia, el Coronel Valdemar Franklin Quintero y el Senador y precandidato a la Presidencia de la República, Doctor Luis Carlos Galán Sarmiento; la reacción del Gobierno fue inmediata, la lucha contra el Narcotráfico se implementó a través de un conjunto de medidas encaminadas a proporcionarles a los organismos de seguridad y a la justicia, los instrumentos legales necesarios para operar. El presidente Virgilio Barco Vargas expidió un conjunto de Decretos de Estado de Sitio, que buscaban crear la posibilidad de extraditar por vía administrativa, facilitar la captura de “violentos”, el decomiso de bienes del Narcotráfico y la acción de jueces ambulantes con competencia en todo el territorio Nacional.

El conjunto de acciones gubernamentales que comienzan a implementarse contra el Narcotráfico modifican el comportamiento de éste generando de su parte un proceso de radicalización; la lucha se desarrolla ahora entre el Narcotráfico y el Gobierno directamente.

El narcoterrorismo y las nuevas modalidades de presión al Estado

La ofensiva lanzada por el Estado contra el Narcotráfico, a raíz de la muerte de Luis Carlos Galán, generó en éste una reacción que por las características de sus manifestaciones se expresa como terrorismo.

El Narcoterrorismo es pues la forma que asume la lucha del Narcotráfico con el Estado, para crear un clima de negociación a su favor, que le permita lograr tratamiento político en el juzgamiento de sus acciones.

Los atentados contra los diarios *El Espectador*, *Vanguardia Liberal*, el edificio del DAS, el avión HK-1803 de Avianca y algunas entidades bancarias, son expresión de esta modalidad de acción criminal del Narcotráfico, hecha mecanismo de presión.

El manejo de explosivos por parte del Narcoterrorismo es el resultado de los cursos de instrucción de los mercenarios israelitas. Las prácticas se centraron en el

manejo de sistemas de control remoto por radio, y la colocación de carro-bombas. Durante el curso los mercenarios explicaron las distintas modalidades del terrorismo para atacar contra aeronaves mediante mecanismos de tiempo, sistemas de control remoto y utilización de altímetros para activar la carga en los objetivos seleccionados. Según uno de los informes confidenciales del DAS, en mayo de 1990, mercenarios españoles les enseñaron a los alumnos la manera de activar cargas por intermedio de un altímetro, caso en el que se programa el artefacto para que se active la carga a la altura decidida por el terrorista. Este procedimiento se utilizó para atacar contra el avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989, en el que perecieron 111 pasajeros.

El uso de carro-bombas fue el mecanismo utilizado por el Narcoterrorismo en las acciones contra los diarios *El Espectador*, *Vanguardia Liberal*, el atentado al General Miguel Maza Márquez, en la carrera 7.^a con calle 57 y al edificio del DAS en Paloque-mao, Bogotá. Este tipo de práctica terrorista arrojó decenas de muertos y creó en las distintas ciudades del país en donde se accionaron bombas un estado de terror entre la población. La coyuntura electoral, también fue acompañada por este tipo de acciones, pero extrañamente semanas antes de celebrarse los comicios éstas se suspendían.

Los golpes propinados por las autoridades a los comandos narcoterroristas disminuyeron las acciones, pero apareció entonces otra modalidad del crimen: el secuestro de presión. (Actualmente) se encuentran en manos de los llamados Extraditables un grupo de periodistas entre los que se destacan Diana Turbay y Francisco Santos. Las peticiones que formulan los Extraditables tienen que ver directamente con la creación de mecanismos políticos de negociación de los delitos del Narcotráfico.

Es evidente que la presión ejercida por el Narcotráfico al Gobierno ha venido en los últimos meses creando un espacio de (posible) negociación. El cambio de lenguaje de la administración Gaviria con respecto al Narcotráfico así parecen indicarlo.

La política norteamericana en el desarrollo de la lucha contra el narcotráfico y la subversión

Las transformaciones que en los aspectos políticos y económicos comenzaron a presentarse en los países del bloque socialista: los acuerdos de distensión y desarme estratégico entre las grandes potencias, han modificado las estrategias de confrontación ideológica y han obligado a los Estados Unidos a "maquillar" su discurso anticomunista y a buscar a nivel internacional un nuevo enemigo, tras el cual se pueda agenciar y sostener sus estrategias de Seguridad Nacional.

La nueva estrategia norteamericana, ubica como enemigo fundamental de la sociedad mundial al Narcotráfico y coloca a su lado al Movimiento Insurgente como su principal aliado. El término Narcoguerrilla acuñado por el discurso norteamericano para señalar el conflicto en países como Colombia y Perú, expresa la intención de unir en una sola lucha dos conflictos totalmente distintos: "para empeorar las cosas, reza el Documento Santa Fe II, los guerrilleros colombianos y los cárteles de la cocaína trabajan juntos, para hacer avanzar algunas veces sus contradictorios objetivos".

Desde 1987 se venía tratando de articular una propuesta que comprometiera a los ejércitos latinoamericanos en la lucha contra el Narcotráfico y la subversión. El temario de la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos, realizada en Argentina en noviembre de ese año, así lo evidencia al proponer como trabajo "la búsqueda de estrategias (conjuntas) para luchar contra el Narcotráfico y la Guerrilla".

No obstante, las cosas no resultaban sencillas, las características del conflicto latinoamericano, y en particular de los países productores de cocaína, habían generado cierto tipo de situación que no eran sencillas de deshacer: por una parte, las FFMM.

venían implementando las estrategias contrainsurgentes consignadas en los Documentos de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de los conflictos de baja intensidad, a través de la creación e impulso a fuerzas Parainstitucionales, y por otra, en su esfuerzo de multiplicar su capacidad operativa venían permitiendo la infiltración del capital del Narcotráfico en el fortalecimiento de grupos paramilitares y dejando que estos simultáneamente desarrollaran acciones que beneficiaran la lucha contrainsurgente y la industria del Narcotráfico.

Esta situación no era exclusiva del comportamiento de los mandos militares de los países productores de cocaína; el escándalo Irangate había puesto al descubierto la responsabilidad del Coronel Oliver North y del Gobierno y los mandos militares norteamericanos, en la utilización de recursos y relaciones con el Narcotráfico, para agenciar la lucha contrainsurgente en América Central: el caso de los "contra" en Nicaragua, era expresión clara de esta relación.

La situación creada por el Narcotráfico en la alianza con los grupos Paramilitares y las FF.MM. comienza a complicarse cuando el fenómeno Narcoparamilitar desborda las posibilidades de control de la institución militar, convirtiéndose en una fuerza beligerante independiente.

Los acontecimientos de violencia Narcoparamilitar, ocurridos en el mes de agosto de 1989 en Colombia (5), obligan al Gobierno Nacional a incrementar las medidas de lucha contra el Narcotráfico a través de Decretos de Estado de Sitio. En esta coyuntura el Presidente Bush y el Gobierno norteamericano dan a conocer su política antidrogas. El Presidente norteamericano hace un pronunciamiento público de respaldo a las acciones del Gobierno colombiano y de compromiso con ayuda económica y militar para el desarrollo de una guerra frontal, contra el Narcotráfico y el terrorismo en los países productores.

El Plan Bush de lucha contra el Narcotráfico dado a conocer el 5 de septiembre se proponía al interior de los Estados Unidos, incrementar la represión policial, reformar la justicia (incremento de penas), aumentar los programas de educación y prestar asistencia profesional al adicto; e internacionalmente, agenciar al interior de los países productores una "guerra frontal" contra el Narcotráfico para lo cual se comprometía a prestar ayuda económica y asistencia y asesoría militar a esos países.

En las semanas siguientes, Colombia comenzó a recibir ayuda militar en material de guerra y asesoría. La característica de esta ayuda dejó claro que se trataba de lograr con ella un solo objetivo: tras la lucha contra el Narcotráfico, combatir el Movimiento Insurgente y por ahí mismo dejar diezmado el Movimiento Popular, que es lo que viene ocurriendo en estos meses finales de 1990.

NOTAS

(1) Ver, *Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia*, Editorial Documentos Periódicos, Bogotá, 1990.

(2) He de tomar el caso Puerto Boyacá, por considerarlo piloto en esta modalidad de lucha contrainsurgente.

(3) A la primera reunión asistieron: Gonzalo de Jesús Pérez Durán, Henry Pérez Morales, Nelson Lesmes Leguizamón, Pedro Parra, Jaime Parra, Luis Suárez, Rubén Estrada, el Coronel Jaime Sánchez Arteaga.

(4) Ganadero de la región, jefe paramilitar.

(5) El asesinato del doctor Luis Carlos Galán.

Fundación **EL TALLER**

*Hacia la creación de un
Centro Internacional de las ONG
para estudio, encuentro y reflexión.*

Todos aquellos que estén comprometidos con el trabajo de ONGs están invitados a compartir estas ideas y planteamientos y a unirse y cooperar:

Fundación EL TALLER
Apartado Postal 1060
43202 - REUS
SPAIN
Teléf.: (34-77) 75 23 52
Fax: (34-77) 75 26 45
Télex: 56908
e-Mail: Geo2:El-Taller

La U.R.S.S. y la revolución sandinista: los estrechos límites de la solidaridad soviética

Fernando Harto de Vera *

Introducción

El objetivo del presente trabajo consiste en realizar un balance de cuáles fueron las relaciones que a lo largo de la década de los ochenta se establecieron entre la Revolución Popular Sandinista y la Unión Soviética. Antes de proceder a glosar cuáles fueron los principales capítulos en los que se desarrollaron estas relaciones, resulta útil tratar de establecer cuáles fueron las directrices e intereses en materia de política exterior de ambos actores.

El triunfo de un proyecto político que como el sandinista poseía un claro contenido antiimperialista, en una zona de tradicional hegemonía del imperialismo norteamericano, supuso, desde los primeros momentos, que la Revolución se enfrentara a la posibilidad (más tarde tornada en hecho real) de una clara hostilidad por parte de los Estados Unidos. Por tanto, a la política exterior se le asignaría la misión de crear las condiciones internacionales que evitaran el derrocamiento de la revolución. Es decir, la política exterior se transformaría en el frente externo de defensa del poder revolucionario, éste sería su principal objetivo.

Un segundo factor que incidiría en la formulación de la política exterior sandinista, tiene que ver con las condiciones económicas materiales en las cuales se encontraba el país al momento del triunfo revolucionario. Al saqueo propio del modelo implementado por la dictadura y a la crisis económica internacional, se unió la destrucción producto de la guerra contra Somoza. De ahí que la búsqueda de cooperación económica internacional para la reconstrucción nacional fuese otra de las tareas fundamentales asignadas a la política exterior.

Un tercer factor está determinado por la situación mundial en que surgió y se desarrolló la Revolución. Esta situación estuvo caracterizada por un deterioro creciente del escenario internacional producto entre otras causas de la proliferación y agudización de los conflictos regionales, el injusto orden económico internacional, el problema de la deuda y, principalmente, el desarrollo y ampliación de la capacidad de armamentos que, unido a las nuevas doctrinas hegemónicas en un mundo nuclear, plantearon durante buena parte de la década de los ochenta a la humanidad la posibilidad real de su exterminio. La lucha por la paz fue así otro de los objetivos de la política exterior.

* El autor es miembro del Seminario de Estudios Políticos sobre A. Latina (SEPLA) de la Facultad de C.C. Políticas y Sociología de la U.C.M.

En síntesis, a la política exterior se le asignaría en el marco de la defensa integral del país, un papel fundamental: crear las condiciones internacionales que evitaran una intervención directa de los Estados Unidos, proporcionar recursos para la reconstrucción del país mediante la cooperación económica y la ayuda al desarrollo, y la lucha por la paz.

La política exterior soviética, durante la década de los ochenta, hacia el Tercer Mundo, estuvo guiada por una amalgama de pragmatismo y de principios ideológicos. Por una parte, la Unión Soviética fruto de su condición de superpotencia posee un indudable interés de expandir sus áreas de influencia y en función de este interés define cuáles son aquellas zonas del Tercer Mundo que le merecen una atención prioritaria y cuáles otras le resultan en mayor o menor medida marginales. Por otro, el imperativo marxista-leninista le obligaba a apoyar aquellos proyectos políticos en el Tercer Mundo que tuvieran un componente socialista. La tensión entre ambos principios, el "internacionalismo proletario" y sus intereses de seguridad nacional, definieron la política exterior de la Unión Soviética hacia la Nicaragua sandinista (1).

La conjunción de ambos principios lleva a que la percepción soviética del Tercer Mundo distinga en su interior varios tipos de países. En la taxonomía que la Unión Soviética aplica a estos países se distingue un primer nivel constituido por aquellos Estados que forman parte de la comunidad socialista y con los que se mantienen muy buenas relaciones. Pertenecen a este bloque de países Cuba, Vietnam y Afganistán. El siguiente escalón según se desciende en esta clasificación, es el de aquellos "Estados orientados hacia el socialismo" como Angola, Mozambique, Yemen del Sur y el Congo. El tercer nivel engloba a aquellos países con los que se han firmado tratados de amistad independientemente del tipo de régimen político. En este grupo se encuentran India, Irak y Siria. Dentro de esta percepción soviética, a Nicaragua se la consideró sólo como un Estado con el que se mantienen relaciones amistosas sin que ello se plasme siquiera en la firma de un Tratado de Amistad que sería uno de los niveles más bajos en el interior de la taxonomía (2).

En síntesis, dentro de los dos principios rectores de la política soviética hacia el Tercer Mundo, Nicaragua puntúa bajo: geopolíticamente se inscribe en una zona de tradicional hegemonía norteamericana y en la que la Unión Soviética no tiene intereses de seguridad nacional; además, el proyecto político sandinista nunca se planteó la conversión del FSLN en un partido-vanguardia ni el establecimiento de una economía de planificación central, con lo que a los ojos de la ortodoxia soviética no se le podía considerar como un proyecto político genuinamente socialista.

Las relaciones comerciales entre Nicaragua y la Unión Soviética

El modelo original de relaciones económicas diseñado por los sandinistas pretendía una diversificación de la hasta ese momento estrechísima dependencia respecto de los Estados Unidos (3). Se trataba de caminar sobre "cuatro patas", implementándose para ello relaciones comerciales con cuatro grupos de países: los Estados Unidos (20%); América Latina (20%); Comunidad Económica Europea, Canadá y Japón (30%) y por último, con el bloque socialista (30%). Estas fueron las perspectivas iniciales del proyecto sandinista. Sin embargo, conviene adelantar que finalmente fue el bloque socialista el que se convirtió en prácticamente el único suministrador fluido de insumos energéticos y alimentos. El embargo declarado por la Administración Reagan, la crisis económica centroamericana y latinoamericana, la presión norteamericana hacia los aliados y asimismo las dificultades económicas internas dieron como resultado que el modelo original de "cuatro patas" no pudiera llevarse a cabo.

El punto de partida en las relaciones comerciales entre Nicaragua y la Unión Soviética es el acuerdo firmado durante el mes de marzo de 1980 con motivo de la

visita de altos líderes sandinistas a Moscú (4). A partir de entonces, el comercio de Nicaragua con la Unión Soviética se incrementó de forma paralela al sostenido decrecimiento de sus intercambios comerciales con los países de la OCDE y con los Estados Unidos. El punto de inflexión que acelera el estrechamiento de los vínculos comerciales vendría dado por el embargo norteamericano de mayo de 1985. En el período 1980-1987 las relaciones comerciales de Nicaragua con los países del CAME se incrementan desde el 1,1% del total del comercio exterior nicaraguense hasta el 48,6%. El punto de inflexión del año 1985 queda expresado si se observa que entre 1984 y 1985 el incremento fue del 24,1%.

Hasta 1981 la balanza comercial señalaba un excedente a favor de Nicaragua. En el año 1982 esta situación se invirtió pasando a ser deficitaria para Nicaragua. El déficit nicaraguense se tornó especialmente dramático al suspender México el suministro de petróleo ante los reiterados incumplimientos nicaraguenses en los pagos. La URSS se convertiría entonces en el suministrador prácticamente exclusivo de crudo. Ya en 1985, primer año de la suspensión de los envíos de petróleo mexicano, la Unión Soviética proporcionó el 90% de las importaciones en este rubro.

Si bien la balanza comercial fue durante toda la década deficitaria para Nicaragua, sin embargo tuvo otros elementos positivos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el balance. Entre estos elementos figuran las condiciones ventajosas que la Unión Soviética fijó para la concesión de los créditos con los que Nicaragua financió sus importaciones. Estos créditos tenían un período de gracia de 1 a 3 años, un período de pago de 2 a 12 años y unas tasas de interés que oscilaban entre el 2,5 y el 7%. Además en caso de reprogramación los créditos concedidos por la Unión Soviética fueron menos problemáticos que los otorgados por otros países. Por otra parte, los acuerdos comerciales con los países del CAME permitían el pago en especie con el consiguiente ahorro de divisas. Otra modalidad de pago que distinguió el comercio con los países socialistas fue la práctica de instalar plantas de manufacturas ligeras que se pagaron con los productos por ellas fabricados.

Finalmente y por lo que se refiere a la composición por productos de la balanza comercial, las exportaciones nicaraguenses a la Unión Soviética consistieron en productos agrícolas tales como café, algodón y semillas de sésamo mientras que las importaciones fueron bienes de capital, productos manufacturados y petróleo. En este sentido el desequilibrio entre los flujos fue notable.

La cooperación y la ayuda al desarrollo

Durante los primeros dos años de la Revolución sandinista, la Unión Soviética mantuvo una actitud cautelosa que se expresó en los bajos niveles de ayuda concedidos para la reconstrucción de Nicaragua.

Así, entre julio de 1979 y diciembre de 1982 la ayuda del CAME en créditos y donaciones totalizó alrededor de 71 millones de dólares, de los cuales 13 millones correspondieron a la URSS. En términos porcentuales ello significó únicamente el 2,3% del total de la ayuda que Nicaragua recibió del exterior en ese período, en el caso de la URSS, y el 21,16% para todo el bloque socialista (5).

Tras esta primera etapa, la Unión Soviética incrementará aceleradamente sus montos de ayuda. En 1984 la ayuda soviética ascendió a 150 millones de dólares, aumentando un 25% respecto a 1983. En esa misma fecha, el financiamiento que Nicaragua recibía de los países del Este ascendió al 50% del total del financiamiento externo. A partir de 1984 el gobierno norteamericano presiona con éxito a las organizaciones multilaterales consiguiendo que se disminuyera sensiblemente las líneas de crédito con destino a Nicaragua. Paralelamente, la ayuda que Nicaragua recibía de los países del bloque Occidental disminuye de forma dramática desde el 78% del año 1979 hasta el 40% en 1984. Esta sensible disminución en las fuentes de financiamiento externo, obliga a los sandinistas a tener que aumentar sus demandas hacia el

bloque socialista. A partir de 1984 la ayuda del bloque socialista no hace sino aumentar: en 1985 estos recursos suponen el 80% del total, en 1986 el 84% y en 1987 el 85% (6).

A partir de este último año, 1987, Nicaragua experimentó dificultades para lograr que la ayuda soviética se siguiera incrementando. En enero de 1988 se firmó un acuerdo por el que se daban 294 millones de dólares en ayuda anual para el trienio 1988-90, incluyendo en esta cifra una cantidad ligeramente superior a las 300 mil toneladas de petróleo crudo. Esto representó una reducción respecto a los niveles anteriores de ayuda. El propio embajador soviético en Managua, confirmó en declaraciones efectuadas en el mes de noviembre de 1988, que la ayuda había quedado virtualmente congelada a los niveles de 1987.

Durante los diez años que los sandinistas detentaron el poder, se firmaron cinco acuerdos de cooperación con la Unión Soviética. El primero de ellos se negoció durante la visita que altos líderes sandinistas realizaron a Moscú en marzo de 1980. En esta ocasión, se firmó un acuerdo comercial, un acuerdo para cooperar en las técnicas de planificación de la economía nicaragüense, un protocolo sobre el establecimiento de representaciones comerciales y varios otros acuerdos que incluían el asesoramiento soviético en pesca, recursos marítimos, prospecciones mineras y telecomunicaciones. En diciembre de 1981, tras una visita del canciller nicaragüense D'Escoto, se firmó un programa de intercambio científico y cultural. En la visita de Daniel Ortega en marzo de 1983 se firmaron acuerdos para el desarrollo de la industria minera nicaragüense, la construcción de un hospital y la construcción de una granja experimental de algodón. En enero de 1984 se firmó un acuerdo para la construcción de una planta procesadora de fibras que permitiera a la industria textil nicaragüense desarrollarse a un nivel suficiente como para permitir la substitución de importaciones en este rubro. En 1985 se firmó un acuerdo para la constitución de una comisión conjunta para la cooperación comercial, científica y técnica que dio como resultado el establecimiento de un sistema de comunicaciones por satélite.

La asistencia a Nicaragua por parte de los países del Este reflejó en su composición el perfil de los donantes:

- **Unión Soviética:** Pesca y recursos marinos, prospecciones de minerales, construcción de plantas hidroeléctricas, servicios de telecomunicaciones.

- **Cuba:** Ingenios azucareros, refino de petróleo, pesca, avicultura y ganadería. Asesores cubanos desempeñaron sus labores en áreas como radio, construcción de carreteras y salud.

- **Bulgaria:** Alimentación, plantas hidroeléctricas y sistemas de comunicaciones. consejeros búlgaros han asesorado en materia de censos y estadísticas.

- **Checoslovacos:** Sector textil.

- **Húngaros:** Salud.

- **RDA:** Educación, química y planeamiento económico.

- **Corea del Norte:** Salud y construcción de una planta siderometalúrgica.

La cooperación de los países del Este incluyó también ayuda de emergencia (alimentos, material sanitario) y becas para los estudiantes nicaragüenses.

La asistencia militar

La primera dificultad con la que se tropieza a la hora de contabilizar los montos de la asistencia militar soviética hacia Nicaragua es la enorme disparidad que existe según las fuentes de información que se consulten. A la divergencia existente entre las cifras de fuentes norteamericanas y las provenientes de organismos independientes, como por ejemplo el SIPRI (más altas aquéllas), se une que las distintas fuentes norteamericanas tampoco coinciden entre sí discrepando las cifras de la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.

Con anterioridad al triunfo de la revolución, los principales proveedores de armas

del régimen somocista eran los Estados Unidos e Israel. Las primeras declaraciones de los sandinistas así como sus primeros esfuerzos, se encaminaron en la dirección de lograr que el suministro de armas proviniera de los Estados Unidos y de sus aliados occidentales. La respuesta norteamericana fue tibia y se limitó a la entrega de botas y binoculares. La señal enviada por Washington dejó claro a los sandinistas que la única opción que les quedaba para abastecerse de material militar era acudir a los países socialistas. Durante los primeros cinco años de la revolución, la ayuda militar soviética no fue muy considerable. Informes de la inteligencia norteamericana publicados en 1985 cifran en sólo cinco millones de dólares las importaciones militares desde el bloque soviético en 1979. Para 1980, el Departamento de Defensa sugiere que las entregas pesaban unas 850 toneladas por un valor entre 6 y 7 millones de dólares. Las mismas fuentes señalan que en 1981 se importaron 900 toneladas por una valor de entre 39 y 45 millones de dólares. El punto de arranque del incremento en los envíos de material militar, lo marca la entrevista que sostuvo en noviembre de 1981 el ministro de Defensa Humberto Ortega con generales soviéticos en el curso de una visita a Moscú. Para el año siguiente, 1982, las cifras experimentaron una subida apreciable importándose 6.700 toneladas por un valor de 80 millones de dólares. Según cifras del Departamento de Defensa la asistencia militar a Nicaragua por parte de la URSS totalizó 110 millones de dólares en 1983 con un peso estimado en 14.000 toneladas. A fines de 1982 Nicaragua había recibido un total de 125 millones de dólares en equipamiento militar de parte de la URSS y sus aliados. Un ejercicio comparativo que ilustra los niveles relativamente modestos de la ayuda militar soviética durante estos primeros cinco años de la revolución, consiste en tener en cuenta que estos montos procedentes del bloque socialista equivalen casi exactamente a los 124,1 millones de dólares de ayuda militar que los Estados Unidos entregaron a El Salvador entre 1980-1982.

Por otra parte, en un análisis cualitativo, el tipo de materiales transferidos por el bloque socialista en el período 1981-1983 se orientaba principalmente a cubrir las necesidades defensivas de Nicaragua. Según el informe Jacobsen, la tendencia en el envío de armamentos de la URSS a Nicaragua hasta 1983 se caracterizaba por la entrega de armas livianas y material logístico básico para el ejército.

Hasta el año 1984 continuó la tendencia al alza, contabilizándose 18.700 toneladas valoradas en 250 millones de dólares. Esta tendencia se rompe por primera vez durante 1985, año en el que la asistencia militar soviética a Nicaragua declinó a 13.900 toneladas por un valor de 75 millones de dólares. Durante 1986 la aprobación de la administración Reagan de 100 millones de dólares para la "contra" supuso una escalada en la estrategia de agresión norteamericana frente a Nicaragua. Consiguientemente los envíos soviéticos subieron a 18.800 toneladas durante los primeros diez meses del año. Sería 1986 el año que marca la cifra más alta en la asistencia militar de la URSS. A partir de entonces la tendencia será decreciente. Así, a comienzos de 1987 culminan con éxito negociaciones bilaterales realizadas en Moscú para conseguir la entrega de nuevo material militar al EPS. Se estima que la URSS entregó a Nicaragua baterías antiaéreas y nuevos helicópteros que totalizaron un peso de 17.800 toneladas. En 1988 la ayuda militar continuó decreciendo situándose en 14.300 toneladas con un énfasis en repuestos y municiones más que en el envío de material pesado.

En síntesis, la ayuda militar soviética a Nicaragua pasa por varias etapas. Durante los primeros cinco años de la revolución, los niveles de asistencia son discretos. Entre 1981 y enero de 1984, los países socialistas entregaron aproximadamente 17.500 toneladas de material militar a Nicaragua. Se trata de una cifra sustancialmente inferior a las 310.000 toneladas recibidas por Cuba durante los primeros años de la Revolución, entre 1962-1964.

Entre 1984 y 1986, coincidiendo con la etapa más agresiva del accionar de la "contra", la asistencia militar soviética asciende sustancialmente contabilizándose

51.400 toneladas en dicho período. A partir de ese año, comienza a estancarse paralelamente al colapso de la política norteamericana a raíz del escándalo Irán-Contra y a la dinámica de paz que abren la firma de los acuerdos de Esquipulas II, arrojando un balance para el bienio 1987-1988 de 32.100 toneladas.

Respecto del número de asesores del bloque socialista presentes en Nicaragua, las cifras son aún más erráticas, si cabe, que en el caso de las importaciones de material militar. A mediados de 1980, fuentes norteamericanas aseguraron que sólo había unas docenas de asesores cubanos. En 1984, las mismas fuentes dieron una cifra de 200. En octubre de 1984, Bayardo Arce formuló unas declaraciones en las que cifraba la presencia de asesores militares cubanos en 500 efectivos. En marzo de 1985, Daniel Ortega dio una cifra exacta, situándolos en 786. En 1986, el gobierno norteamericano habló de 3.000 cubanos y más de 100 soviéticos y europeos del Este. En cualquier caso, a partir de 1985 el gobierno nicaragüense en un gesto unilateral fue reduciendo progresivamente la presencia militar cubana.

Durante la década de los ochenta la asistencia soviética en material militar se reveló como uno de los capítulos más importantes en las relaciones soviético-nicaragüenses. La vital importancia para la sobrevivencia del proyecto político sandinista se deriva no tanto del volumen de dicha ayuda que, como se ha visto más arriba, se mantuvo dentro de unos niveles discretos, cuanto por razones que tienen que ver con el apoyo al gobierno sandinista frente a la guerra de agresión desatada por los Estados Unidos, así como por el carácter de donación que revistió esa ayuda a partir del año 1983. Las demandas nicaragüenses fueron superiores a la ayuda efectiva concedida por los soviéticos. Así por ejemplo, la URSS no respondió favorablemente a la petición nicaragüense de obtener aviones MIG. Ello le hubiera supuesto un escalamiento en su involucración en el conflicto centroamericano que no estaba dispuesta a sufragar. En su lugar, entregó al gobierno nicaragüense helicópteros que fueron de gran utilidad en la lucha frente a la "contra". Esta fue en definitiva la actitud soviética en materia militar: una respuesta intermedia entre las demandas nicaragüenses y los límites impuestos por los Estados Unidos.

El limitado apoyo soviético a la revolución sandinista

Existe un consenso generalizado entre los analistas en considerar que el triunfo de los sandinistas en julio de 1979 fue para la Unión Soviética una verdadera sorpresa. Hasta entonces, la posición tradicional soviética se inclinaba por ser pesimista respecto a las posibilidades de triunfo de cualquier proyecto político que se opusiera a los designios norteamericanos para la zona. Así, durante los primeros años de la revolución (aproximadamente hasta 1981) la actitud soviética hacia Nicaragua fue la de esperar cuál era el rumbo de los acontecimientos. A partir de entonces, el apoyo soviético hacia Nicaragua fue creciendo de modo directamente proporcional al escalamiento de la estrategia de agresión norteamericana. Pero no hay lugar a dudas de que la falacia del alineamiento soviético de Nicaragua, extendida por la Administración Reagan, nunca fue cierta. En primer lugar, porque el incremento en los niveles de la ayuda soviética siempre se produjeron como una respuesta *a posteriori* frente a cada nuevo paso que los Estados Unidos daban en su enfrentamiento contra Nicaragua. En segundo lugar, porque la actitud soviética fue siempre la de proporcionar a los sandinistas un apoyo dentro de los límites que la geopolítica imponía, esto es, sin perder nunca de vista que Centroamérica no era una zona de interés vital para la URSS y por el contrario sí lo era en la formulación de los intereses de seguridad nacional norteamericanos.

Nunca estuvo en el ánimo soviético (ni en el nicaragüense) volver a reproducir el patrón de relaciones con Cuba. Por el contrario la experiencia cubana llevó a los soviéticos a desechar como una alternativa no deseable por su alto costo material y político, un subsidio incondicional a la Revolución Sandinista similar al mantenido

con Cuba a partir de 1959. Los consejos que en público y en privado dieron altos dirigentes soviéticos a los sandinistas fue el de que por todos los medios buscaran una diversificación de sus relaciones exteriores y que no repitieran la experiencia de aislamiento cubana. A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta con las crecientes dificultades económicas que empieza a padecer la Unión Soviética, el mensaje se hace más claro que nunca y los montos de la ayuda soviética empiezan a disminuir.

En síntesis, el apoyo soviético a Nicaragua durante la década de los ochenta fue crítico para la supervivencia de la Revolución. Pero estas relaciones fueron formuladas desde una actitud, por parte de la Unión Soviética, de limitada y prudente solidaridad.

NOTAS

(1) P. Clement y W. R. Duncan: "The Soviet Union and Central América", en Eusebio Mujal-Leon *The URSS and Latin America: a developing relationship*, Unwin Hyman, Boston, 1989.

(2) R. Berríos: "Relaciones económicas entre Nicaragua y los países socialistas" en Augusto Varas (comp.) *América Latina y la Unión Soviética: una nueva relación*, GEL, Buenos Aires, 1987.

(3) Idem.

(4) La delegación sandinista, del más alto nivel, estuvo compuesta por Tomás Borge, Humberto Ortega, Henry Ruiz y Moisés Hassan.

(5) Nicola Miller: *Soviet Relations with Latin American, 1959-1987*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

(6) Idem.

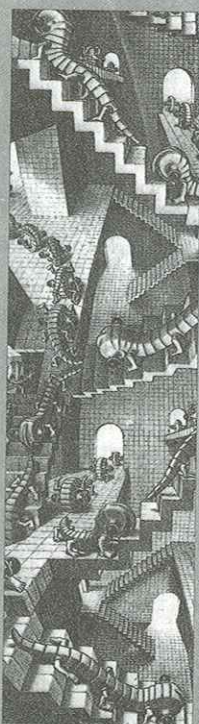


AMERICA LATINA

HOY

SEGUNDA EPOCA
N.º 2
Noviembre 1991

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES



SEPLA

Seminario de
Estudios Políticos
sobre América
Latina

PARTIDOS POLITICOS Y ELECCIONES. I

- ¿Dónde encajan las democracias electorales latinoamericanas?
MANUEL ALCANTARA
- Los partidos políticos en la democratización del Estado en América Latina.
ALFREDO RAMOS JIMENEZ
- Perfil y evolución del sistema de partidos en Chile.
PAULO HIDALGO
- Sistema de partidos políticos y "clivajes" electorales en la transición chilena.
FERNANDO BUSTAMANTE
- Culturas ciudadanas y partidos tradicionales: Argentina y Uruguay (1982-90).
SUSANA MALLO y MIGUEL SERNA

La Unión Soviética y América Latina: del perfil a la política

Hugo Fazio Vengoa *

En el presente trabajo nuestro principal objetivo es el de delimitar y exponer un marco de interpretación de la política soviética en relación a los países latinoamericanos. Cubriremos el período que abarca las tres últimas décadas. O sea, principalmente, los años de L. Brezhnev y M. Gorbachov en el poder en la URSS. Las posibilidades de realizar un análisis comparativo entre ambas Administraciones motivaron esta elección.

El objetivo trazado no consiste en la exposición de la evolución de las relaciones que los soviéticos han mantenido con los diversos países de América Latina, sino en tratar de comprender qué representa nuestro subcontinente en el diseño de la política internacional de la URSS, dentro de qué tipo de objetivos internacionales puede y debe ubicárseles y, por último, cuáles son los condicionantes que han determinado las reorientaciones de la política soviética frente a nuestra realidad.

El interés que nos motiva a dar este tipo de lectura del problema no es otro que el convencimiento a que hemos llegado acerca de que es imposible comprender los giros y matices de la política internacional de la Unión Soviética si de antemano no procedemos a un análisis de las estrategias, puntos de vista y proyectos que son sostenidos en el alto poder por las diversas fuerzas que se enfrentan al interior mismo de la URSS. Han sido estas opciones, con sus puntos de referencias correlativos, las que han sellado la calidad, orientación y alcance de las políticas y estrategias que se han elaborado en relación a las diferentes partes del globo y a los múltiples problemas internacionales. Las relaciones con América Latina no escapan a estas visitudes de la política de la Unión Soviética, aun cuando a veces se muestren "atípicas", frente a las vinculaciones que dicho país establece con otras regiones.

El estudio de las relaciones soviético-latinoamericanas comporta además una importancia particular: a nuestro modo de ver, constituyen el campo de la vida internacional donde de manera más aprehensible se evidencian las contradicciones y correlaciones entre las diferentes propuestas que se han articulado al interior de la URSS en las últimas tres décadas. Múltiples han sido los factores que le han dado realce a estas relaciones: el ser una parte del Tercer Mundo donde, a diferencia de otras regiones, el capitalismo tempranamente logró enquistarse como modo de producción predominante; el peso y la influencia que ejercen los Estados Unidos, principal opositor histórico de la Unión Soviética; la existencia de países con proyección mundial y regional (v. gr. Brasil), que eventualmente pueden ayudar a fortalecer

* PH. D. en Ciencias Políticas, Universidad Católica de Lovaina. Profesor de la Universidad de Los Andes. Director de la Revista *Historia Crítica*.

las posiciones internacionales de la URSS tanto en América Latina como en otras regiones del globo; la potencial complementariedad económica; y, por último, la debilidad de los vínculos históricos sellados entre las partes.

Por las circunstancias recién enumeradas, consideramos que la política latinoamericana de la URSS en relación a las orientaciones elaboradas frente a las otras regiones del mundo ha sido la más difícil de articular, especificar y aplicar. Nuestra realidad presenta para ellos un carácter contradictorio, circunstancia que ha hecho difícil que América Latina disponga de un espacio específico dentro de la jerarquía de intereses internacionales de la URSS. En razón de este carácter complejo, la orientación seguida por Moscú hacia nuestro subcontinente ha expresado de manera más aprehensible y concreta las diversas orientaciones y proposiciones acerca del significado que reviste la mayor o menor inserción de la URSS en las relaciones internacionales, en las contradicciones intersistémicas, en la participación en los flujos mundiales, en la división internacional del trabajo, etc.

Históricamente, las orientaciones de la política soviética hacia América Latina se han caracterizado por ser débiles, fragmentarias y de baja intensidad en comparación con la gran actividad que la URSS ha desplegado en Europa, Asia y África. El interés por América Latina nació tardíamente. Sus orígenes se remontan a los años cincuenta, cuando la URSS descubre el Tercer Mundo, y sobre todo cuando triunfa la revolución cubana. En los años anteriores, a excepción de algunos contactos económicos y políticos fragmentarios con México, Uruguay y Argentina, el conducto principal a través del cual se concretizó una vinculación fue por medio del Komintern y los partidos comunistas latinoamericanos. Ello no dio nacimiento a una política propiamente latinoamericana pues lo que estaba en juego era principalmente el fortalecimiento del movimiento comunista mundial y no el desarrollo de relaciones con los países del área.

A esto cabe agregar que la fragilidad de la base revolucionaria en la región, el carácter marginal de los partidos comunistas en la vida política de América Latina, la escasa importancia de la región, la carencia de vínculos que sirvieran de puente para una rápida y mejor vinculación, el anticomunismo visceral de las clases dominantes y, por otra parte, la pequeña significación del subcontinente en el diseño de la política internacional de la URSS —cuando los esfuerzos se concentraban en la reconstrucción nacional y en el fortalecimiento de los vínculos con Europa, donde sí estaban a la orden del día las potencialidades revolucionarias, etc.—, determinaron el bajo perfil de las relaciones.

Sin embargo, un factor que habría que destacar de esta “prehistoria” de las relaciones fue el significado que tuvo el VII Congreso del Komintern en 1935, que apoyó la creación de los frentes populares como medio de lucha contra el fascismo. En la realidad latinoamericana dichas alianzas políticas y sociales, en su práctica política, se trazaron como objetivo la modernización de los países latinoamericanos; es decir, los partidos comunistas elevaron las banderas de la revolución democrático-burguesa como tarea inmediata a realizar mientras maduraban las condiciones para un tránsito al socialismo (1).

Esta actitud, en buena medida propiciada por los mismos dirigentes soviéticos, significó que para los países latinoamericanos se proponía la profundización de la modernización occidental. Esta propuesta, acorde con los enunciados básicos de Marx y sobre todo con la lectura leninista del marxismo, implicaba que los países latinoamericanos debían seguir un proceso de desarrollo revolucionario que nosotros podríamos llamar “clásico” en la medida en que no postulaba la repetición del modelo soviético gestado durante Stalin ni preveía que debía producirse la creación de un proyecto alternativo sobre la base de las formas organizativas y de gestión que podrían emanar de una cultura o de tradiciones populares latinoamericanas. Se proponía, por el contrario, que América Latina debía seguir la huella trazada por Occidente mientras se creaban las bases para un ulterior tránsito al socialismo. En

otras palabras, se auguraba que las naciones latinoamericanas debían insertarse mayormente en el sistema económico mundial y recrear las bases de la acumulación occidental. En este aspecto observamos una diferencia radical en comparación con los restantes países de Asia y Africa, a los cuales se les insistió posteriormente en un desarrollo no capitalista.

Además, esta postura de menor intransigencia ideológica permitió también que los principales aliados de la URSS en el continente, los partidos comunistas, fueran percibidos y aceptados como parte integrante de las nuevas relaciones políticas que se estructuraban a escala del continente. O sea, incluso la política elaborada en relación a estos partidos se enmarcó parcialmente dentro de los cánones que la Unión Soviética deseó desarrollar en relación a los gobiernos latinoamericanos.

En la formulación de la política latinoamericana de la URSS algunas circunstancias —de ambas partes— posibilitaron que se hallaran formas de interrelación que impulsaron las relaciones. La participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial al lado de los Estados Unidos e Inglaterra, países que gozaban de una influencia indiscutible en la región, sirvió para reconstituir sobre bases aún débiles los reconocimientos y las relaciones entre la Unión Soviética y América Latina. (Véase Cuadro N.º 1).

CUADRO N.º 1
**RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE LA URSS Y LOS PAISES DE
AMERICA LATINA**

<i>País</i>	<i>Fecha de establecimiento de relaciones</i>	
Argentina	6-VI-1946	
Bolivia	18-IV-1945	13-IX-1969, intercambio de representantes.
Brasil	2-IV-1945	Interrupción del 20-X-1947 al 23-XI-1961.
Colombia	25-VI-1935	Intercambio de representantes: 3/4-II-1943, e interrupción del 3-V-1948 al 19-I-1968.
Costa Rica	8-V-1944	Intercambio de representantes: 27-XII-1970.
Cuba	14-X-1942	Interrupción del 3-I-1952 al 8-V-1960.
Chile	11-XII-1944	Interrupción del 21-X-1947 al 24-XI-1964, e interrupción el 22-IX-1973. Reanudación en marzo de 1990.
Ecuador	16-VI-1945	Intercambio de representantes a nivel de Embajadas: 12-XI-1969.
Guatemala.....	19-IV-1945	

CUADRO N.º 1

RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE LA URSS Y LOS PAISES DE
AMERICA LATINA (*Continuación*)

<i>País</i>	<i>Fecha de establecimiento de relaciones</i>	
Guyana.....	17-XII-1970	
Granada	7-IX-1979	Interrupción: 4-XI-1983.
Jamaica.....	12-III-1975	
Méjico	4-VIII-1924	Interrupción: del 26-I-1930 al 12-XI-1942.
Nicaragua.....	12-XII-1944 (sin representación)	Intercambio de representantes: 18-X-1979.
Perú.....	1-II-1966Rep. Dominicana	8-III-1945
Surinám	25-XI-1975	
Trinidad y Tobago...	6-VI-1974	
Uruguay	22-VIII-1926	Intercambio de representantes: 11/13-VIII-1933; Interrupción del 27-XII-1935 al 27-I-1943; creación de las misiones en Embajadas: 30-XI-1964
Venezuela.....	14-III-1945	Interrupción del 13-VI-1952 al 16-IV-1970

Pero este renacer fue de corta duración. El período de la “guerra fría”, es decir, la actitud beligerante mantenida por ambas superpotencias propició que se recompu-sieran las actitudes negativas, sobre todo en América Latina, donde se adoptó la consigna de contención del comunismo como divisa fundamental en relación a los países del Este, lo que conllevó al alineamiento de los Estados latinoamericanos en torno a los Estados Unidos. El campo de maniobra de la URSS se estrechó y Moscú sólo pudo utilizar las desaveniencias para abrir un espacio en la región.

Un ejemplo elocuente de esta actitud soviética fue la posición asumida por este país frente a la Argentina durante el mandato de J. D. Perón (2). En la medida en que este país tomó distancia frente a los Estados Unidos y propuso su tercera vía, la Unión Soviética inmediatamente estuvo dispuesta a concederle apoyo político y económico. Argentina fue una de las primeras naciones del Tercer Mundo a la que la URSS ofreció un crédito de asistencia por treinta millones de dólares. Este tipo de acciones, sin embargo, fueron esporádicas y para que se concretizaran era menester que se manifes-tara una voluntad en tal sentido entre las clases dirigentes de los propios países latino-a-

americanos. La inexistencia de pilares de apoyo que garantizaran un mínimo la presencia soviética en la realidad continental le impedían actuar y ganar un espacio.

Sin embargo, los años cincuenta trajeron consigo una nueva orientación que no podía dejar de marcar profundas huellas en la evolución ulterior de las relaciones. En la URSS el equipo jruschoviano propuso encontrar puntos de armonización con los países extranjeros para lo cual se propuso el desarrollo de relaciones en torno a la coexistencia pacífica. Esto significaba a *grosso modo* que debían crearse las condiciones para que pacíficamente los dos sistemas compitieran, se relajara la solidaridad anti-imperialista y el sistema internacional reconquistara la fluidez en la cual la URSS podría actuar más fácilmente.

Desde mediados de los años cincuenta se introdujeron los principios de la descentralización (creación de *sovnarjoses*) y de un mayor margen de autonomía para las empresas, fenómeno que sería acentuado años después engendrando desigualdades pronunciadas entre las empresas, las regiones y los individuos (ya que la producción comenzó a orientarse hacia las personas y grupos con mayores recursos).

Este nuevo proceso de acumulación se tradujo rápidamente en la adopción, por parte de la URSS, de algunos patrones occidentales de desarrollo, los cuales al ser aplicados en la propia Unión Soviética posibilitaron que se difundiera y enquistara una nueva visión y una nueva propuesta de lo que debía ser el desarrollo de la URSS (en su fase de construcción del comunismo) y de la sociedad socialista en general. Si bien se argumentó que dichos cambios preveían el fortalecimiento del sistema, de hecho lo que aconteció fue que se introdujo al interior mismo de la URSS una poderosa justificación de que el desarrollo ulterior debía prever la utilización de mecanismos económicos clásicos, siguiendo los derroteros de la modernización occidental.

De otra parte, este desmonte supuso el reinicio de una competición entre las fuerzas partidarias del mantenimiento del modelo anterior y las que propugnaban el desarrollo ulterior sobre la base de los nuevos presupuestos. En la época ruschoviana todavía no se cristalizaron social y políticamente dichos proyectos, solamente se crearon las condiciones que signaron el desarrollo ulterior de la URSS.

Esta reorientación en la política interna de la URSS es muy importante para entender la nueva valoración de la política internacional de la URSS y en particular la orientación hacia América Latina. Desde mediados de los años cincuenta los dirigentes soviéticos invitaron a todos los países del continente, independientemente de las posiciones políticas que defendieran, a desarrollar sus economías con el apoyo y la ayuda soviética (3). Aun cuando estos ofrecimientos no llegaron a materializarse por falta de disposición de los gobernantes latinoamericanos, nos muestra que existía una voluntad política en la URSS para abrirse espacios en la región, ganar una presencia y, lo que es aún más importante, en aras de la competición intersistémica lograr una aceptación para emular en mejores condiciones con la otra superpotencia (es decir, los Estados Unidos).

Políticamente esta nueva percepción del mundo y del papel de la URSS fue expresada en el XX Congreso del PCUS en 1956. Se mejoró parcialmente la imagen de la URSS al propugnarse —desde las tribunas del foro comunista-soviético— una nueva vía de lucha: la pacífica. Esto condujo a que los partidos comunistas se reorientaran hacia la lucha electoral, incorporándose dentro de los sistemas políticos de sus respectivos países. De esta manera, los partidos comunistas como relevante apoyo de la URSS en los países de la región, dejaron de ser una preocupación diferenciada, que respondía a otra lógica de la asumida por Moscú con respecto a los Estados del continente. Es decir, fueron incorporados también en una relación de tipo horizontal, catalizada por la coexistencia pacífica.

El triunfo de la revolución cubana fue el *grand tournant* en la política soviética hacia América Latina. La experiencia de transformación en Cuba acabó con el “fatalismo geográfico”, demostró la vitalidad revolucionaria de los pueblos de América Latina. Con ella se quebró un importante eslabón de la dominación estadounidense, se reforzó el

interés por el conjunto de los países del continente y se abrieron nuevas posibilidades para afianzar los vínculos.

Con el nuevo aliado cubano se empieza a articular un nuevo tipo de vinculación con el continente. Con la Cuba socialista la Unión Soviética logró interponer una plataforma que le garantizaba un mínimo de presencia con capacidad de maniobra. En base a esta nueva posición, Moscú se convirtió en un interlocutor con el que los países latinoamericanos habían de comenzar a contar.

La revolución cubana sirvió de estímulo para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas que se trazaban objetivos revolucionarios similares a los de Moscú. En reiteradas oportunidades estas organizaciones buscaron estructurar sobre bases más sólidas las relaciones con los países socialistas, ejerciendo cierta influencia sobre sus respectivos gobiernos. También contribuyó a la maduración de las actitudes antinorteamericanas ampliando las fisuras ya existentes entre el coloso del Norte y los pueblos latinoamericanos, situación de la cual la Unión Soviética podía sacar provecho para afianzar las relaciones con los países de la región.

Todos estos cambios crearon el clima propicio para que la URSS reafirmara su interés en establecer relaciones a nivel de Estado con los países latinoamericanos y ofreciera garantías económicas para densificar los vínculos.

La revolución cubana también significó la superposición de una nueva lógica en el tipo de relación de la Unión Soviética con los países latinoamericanos. Si los primeros años de Jruschov en el poder fueron un período de implementación de relaciones a través de la internacionalización de la URSS, o sea, se buscaron los medios para su integración en la dinámica mundial como medio de competencia con los EE.UU., a partir del triunfo y posterior consolidación del proceso revolucionario en la isla se articuló hacia América Latina una nueva orientación política basada en las potencialidades revolucionarias de los países de la región.

De una parte, se siguieron fomentando las relaciones entre Estados a través de acuerdos gubernamentales y otros tipos de convenios y, de otra parte, se avizoró el fortalecer las relaciones con los movimientos y sobre todo con los Estados radicales o revolucionarios. La coexistencia de estas dos formas de relación —que se sobreponían indistintamente la una a la otra— dominó la política soviética hacia América Latina en los años de la administración Brezhnev. Bajo el impulso e influencia de variadas fuerzas sociales y políticas, cada una de ellas portadora de proyectos diferentes, se implementaron múltiples estrategias. El peso y grado de influencia de que gozara cada una de ellas en momentos específicos determinó finalmente el tipo de relación que se proyectaba.

La dirección colectiva y la política latinoamericana

Durante las décadas de los sesenta y setenta las dos estrategias sostenidas en el alto poder se aplicaron a las relaciones con los países latinoamericanos. La dirección colectiva introducida tras la destitución de N. Jruschov creó un marco de tolerancia para que se representaran las diferentes propuestas alternativas representadas por Kossiguin (la vertiente interesada en aplicar una modernización descentralizadora), Suslov (el guardián de la ortodoxia que velaba por mantener y reproducir el sistema soviético iniciado en los años treinta) y Brezhnev (secretario general, el hombre de la tolerancia centrista que sirvió de puente-comunicación entre las dos propuestas).

En los años sesenta la URSS prosiguió en la senda de ofrecer garantías a los países latinoamericanos para fortalecer las relaciones. Nueve países, en estos años, reiniciaron o mejoraron los términos de la diplomacia frente a Moscú (Bolivia en 1969, Brasil en 1961, Colombia en 1968, Costa Rica en 1970, Cuba en 1960, Chile en 1964, Ecuador en 1969, Perú en 1969, Uruguay en 1964 y Venezuela en 1970). Para alcanzar dichos objetivos la URSS fue favorecida por la nueva actitud de numerosos países latinoamericanos que mejoraron la calidad de sus políticas exteriores en un afán de alcanzar una relativa independencia frente a los Estados Unidos.

Los soviéticos no fueron sujetos pasivos. Principalmente a través de los acuerdos económicos y comerciales, ampliamente favorables a las naciones latinoamericanas, aumentaron el flujo comercial, se firmaron nuevos acuerdos, con lo que la URSS logró generar un interés para mejorar la calidad de las relaciones en la región.

Sin embargo, la densificación de las relaciones no fue el resultado de la superposición del proyecto modernizador inspirado en Occidente como aconteció para esos mismos años en las otras regiones del Tercer Mundo, o en los vínculos soviéticos con los países del Occidente desarrollado (4). En nuestra realidad, la URSS debía ante todo ganar un espacio de acción, le era necesario abrir una brecha que le garantizara una presencia más amplia en la región y requería de la cimentación de vínculos que le permitieran disponer de sus acciones y no, como era el caso, de tener que acogerse a la voluntad de las clases dominantes de las naciones latinoamericanas.

A esto se agrega el hecho que la política hacia América Latina comenzó a formar parte de un proceso triangular de relaciones, dentro de las cuales los Estados Unidos desempeñaban un papel de primer orden. Relacionarse con América Latina no era simplemente establecer vínculos con una región del planeta. Era desarrollar acciones en una de las principales esferas de seguridad de los Estados Unidos, significaba entrometerse en una región sensible. Aplicar los preceptos del proyecto de modernización descentralizadora no tan sólo no hubiera dado dividendos económicos, sino que además no garantizaba el obtener ganancias de ningún tipo. Por esta razón, los sectores interesados en la conservación de la integralidad del sistema, favorables a una visualización de la dinámica política mundial anclada sobre el eje de las relaciones Este-Oeste, encauzaron las orientaciones hacia la región latinoamericana en la medida en que ésta era una política menor dentro de la estrategia global de lucha y competencia entre las dos superpotencias. Es decir, la interpretación ortodoxa desempeñó en estos años un papel mucho más importante en la determinación de la calidad y de la orientación de las relaciones con América Latina, o sea se conservó como prerrogativa la validez de los aspectos ideológicos sobre la normatividad económica aplicada en otros casos.

En tal sentido podemos decir que los objetivos a corto y mediano plazo eran los siguientes: desarrollar las relaciones a nivel de Estado con las naciones latinoamericanas para crear las condiciones de independencia política de estos países con respecto a los Estados Unidos; generar una imagen positiva de la URSS para que llegaran a considerar a ésta como un interlocutor válido en los destinos de la región. Este proceder obedecía a que, para los soviéticos, la garantía para el triunfo del socialismo en nuevas regiones venía dada por la presencia, el grado de influencia, de decisión y colaboración de los países socialistas. Para alcanzar dichos fines más importante que la ayuda a los movimientos revolucionarios era el afianzamiento de las posiciones de la URSS, lo cual sólo podía ser realizado si se establecían bases sólidas de colaboración con estos países. Se entrecruzaban así los intereses ideológicos del Estado soviético con los objetivos que emanaban de su condición de potencia mundial.

Valga señalar que si la Unión Soviética aplicó esta estrategia en relación a los países latinoamericanos no fue por las características inmanentes a estos Estados, sino al alto grado de dependencia y vulnerabilidad de estas naciones frente a los Estados Unidos. Es decir, América Latina quedó inscrita en un tipo de relación triangular donde el referente norteamericano constituía el eje fundamental.

En el plano práctico, la razón de ser y las perspectivas de la posición soviética en los sesenta era argumentada y justificada de la siguiente manera:

“El que la URSS mantenga relaciones comerciales con los países de América Latina no significa que nosotros aprovechemos la política de los gobiernos de los países en cuestión. Sería igualmente un grave error considerar estas relaciones como la manifestación de un apoyo o asistencia de parte de la Unión Soviética a los regímenes oligárquicos y reaccionarios de diversos países de América Latina. (Estas relaciones)... contribuyen al debilitamiento de la

dependencia con respecto a las potencias imperialistas... Cada tractor, automóvil, máquina, instrumento librado a América Latina, transporta la verdad sobre la Unión Soviética y muestra la verdad a los pueblos de América Latina, los éxitos enormes alcanzados por la Unión Soviética en un breve período histórico gracias a su sistema socialista" (5).

Durante el mandato brezhneviano, la URSS implementó diversas estrategias para aumentar la densidad de las relaciones. Fue precisamente en estos años cuando se elaboró, lo que podríamos denominar, un *perfil* de relación con el conjunto de América Latina. Para afianzar sus posiciones los dirigentes soviéticos propusieron un programa de relaciones que comprendía el establecimiento de relaciones económicas y comerciales ampliamente favorables para los países latinoamericanos. Si nos atenemos exclusivamente a las cifras de un año —1975— la Unión Soviética mantuvo un intercambio comercial con sólo 9 naciones latinoamericanas por un monto total de 864,3 millones de rublos. El saldo en estas operaciones fue ampliamente negativo para la URSS. El desequilibrio comercial para los soviéticos ascendió a 573,9 millones de rublos (6). Esta desigualdad comercial ha sido una constante en el comercio soviético, latinoamericano y se reproduce de año en año, como puede observarse en el Cuadro N.º 2. Para la URSS este proceder económicamente difícil de sufragar pero que garantizaba algunos dividendos políticos importantes, se justificaba por la necesidad de establecer vínculos que le posibilitaran ganar un espacio en la realidad continental con lo cual mejoraba los términos de negociación frente a Estados Unidos.

Un segundo elemento de este paquete de relaciones fue la asistencia para la creación o modernización de una infraestructura productiva que contribuyera al despegue de las economías nacionales. A través de este tipo de medidas se trazaba como meta, no tanto la posible convergencia con la Unión Soviética en la constitución de un modelo socialista de desarrollo —aunque no se desconociera tal eventualidad—, como el afianzamiento de condiciones económicas y políticas para la *autonomización* de las economías del subcontinente frente a los centros rectores del mundo capitalista, y la ampliación de los contactos económicos y comerciales con la Unión Soviética.

El *perfil* preveía también la densificación de las relaciones políticas con todas aquellas naciones latinoamericanas que dispusieran de un curso "independiente" en relación a la política exterior norteamericana. A estos gobiernos la Unión Soviética les aseguraba una amplia colaboración bilateral y multilateral, en aras de crear situaciones de concertación en materia internacional y/o regional. Además garantizaba su apoyo a las demandas reivindicativas en los foros y organismos internacionales a todas aquellas naciones que desearan desarrollar un curso autónomo a nivel internacional.

Este paquete de relaciones fue lo que posibilitó que hacia mediados de los años setenta se alcanzara una mayor intensidad en las relaciones con algunas naciones de la América Latina continental, entre las cuales se destacaron Argentina, Brasil, Perú, México y Uruguay.

Este *perfil* de relación propuesto por la URSS, comportaba una cualidad de naturaleza contradictoria. Como tal, era un proyecto de densificación de las relaciones con países que poseían una matriz y una orientación de desarrollo económico, social y político diferente al soviético. No transgredía lo que podía ser permitido y aceptado por Estados Unidos en la actividad desplegada por los soviéticos en el continente.

En tanto que programa de relaciones, se estructuraba sobre la base de la coexistencia pacífica, principio que, a juicio de los analistas soviéticos, servía para reglamentar los vínculos entre los países socialistas y los capitalistas. Es decir, constituía un marco de regulación de relaciones similar al existente entre la URSS y los países de Europa Occidental. Sin embargo, no era idéntico a este último. Porque el *perfil* comportaba un tipo de asistencia y solidaridad para con aquellos Estados que trazaban como uno de sus derroteros una mayor independencia con respecto al centro hegemónico.

De otra parte, implícitamente el *perfil* establecía un límite a la acción extrema que

pretendía llevar la Unión Soviética, tal como lo han testimoniado las experiencias de cambio en la realidad continental. La Unión Soviética brindaba su apoyo a aquellas fuerzas que rompían o debilitaban los vínculos de dependencia con los EE.UU. pero no se entremezclaba en el proceso mismo, ni garantizaba —como sí lo hiciera con Cuba y contemporáneamente con algunos países aliados de África y Asia— la supervivencia del proceso, el cual debía depender de la capacidad de acción de las fuerzas internas que al interior de los países de América Latina luchaban por la transformación social. Esto quedó claramente demostrado durante la experiencia de la Unidad Popular en Chile y se ha reeditado con la revolución nicaragüense.

Como orientación el *perfil* era único y general para todos los países latinoamericanos a excepción de Cuba, por supuesto. El referente norteamericano era el prisma a través del cual se mediatizaban y objetivizaban las potencialidades de las relaciones. Se proyectaba como relaciones de **interioridad** al sistema, a través de procedimientos normales de las relaciones interestatales a nivel internacional aun cuando el objetivo superior se focalizara hacia la **exteriorización** de las relaciones frente al sistema internacional tal cual existía. O sea, el fin último era arribar a un nivel de concertación que transformara las dinámicas políticas nacionales e internacionales.

En resumen, podemos decir de esta primera fase brezhneviana que la política exterior soviética en relación a los países latinoamericanos expresó de manera directa la correlación de fuerzas entre las diversas fracciones políticas en el alto poder en la URSS, pero lo hizo de una manera diferente. Si internamente los sectores partidarios de una modernización elitista tuvieron el mando al interior de la URSS —lo cual posibilitó que se implementara la reforma del 65 y se buscara *racionalizar* las relaciones con los países occidentales y los del Tercer Mundo—, con respecto a América Latina la aplicación de la estrategia de los sectores ortodoxos fue la determinante. Esta situación nos permite argumentar que las relaciones con América Latina se han comportado como un fenómeno atípico dentro del diseño de la política internacional de la URSS.

Los años setenta conservarían esta “atipicidad”. En el transcurso de esta década los sectores defensores de la ideología y de la integralidad del sistema soviético, o sea, los sectores “ortodoxos”, tomaron la iniciativa en la conducción global de la política internacional de la URSS (7). Sin embargo, con respecto a América Latina la “lógica” de los sectores partidarios de la modernización descentralizadora tomó la iniciativa y articularon la conducción de la política soviética en relación al subcontinente.

Podríamos preguntarnos, ¿por qué se reitera esta atipicidad en relación a América Latina, cuando la “lógica” debía presuponer la mantención de la orientación anterior? En la respuesta a este interrogante es menester tener en consideración varios procesos. En primer lugar, si durante la década anterior la Unión Soviética se esforzó por abrirse un espacio en la realidad continental eso fue el resultado de la carencia de posiciones que permitieran fundamentarle una presencia en la realidad continental. El apoyo a las fuerzas solidarias o deseosas de adoptar una actitud equidistante frente a los Estados Unidos fue el único recurso utilizado para lograr dichos fines. Es decir, la Unión Soviética se valió de las desaveniencias entre las naciones latinoamericanas y los EE.UU. para ganar una determinada aceptación. De otra parte, buscó favorecerse de las contradicciones generadas por el proceso de acumulación y de desarrollo capitalista en la región, fenómeno que conllevó al auge de los movimientos radicales tanto de inspiración marxista como populistas.

En segundo lugar, América Latina ha sido históricamente percibida por los dirigentes y analistas soviéticos como una de las zonas vitales de influencia y seguridad para los Estados Unidos. En la medida en que los sesenta fueron años de apogeo de la “guerra fría”, de gran polarización entre el Este y el Oeste, la política soviética hacia América Latina quedó enmarcada directamente en la bipolaridad mundial.

Los setenta, por el contrario, fueron años de *détente*. Las potencias aplicaron nuevas reglas del juego para configurar el condominio mundial. Esta nueva realidad

creó posibilidades para elevar la calidad de las relaciones con aquellos países que se encontraban bajo la esfera de influencia de la otra potencia.

La *détente* introdujo una nueva norma. Debía mediar una nueva actitud en relación a dichos países porque cualquier alteración del *status quo* podía romper el frágil condominio y debilitar los mecanismos de negociación introducidos. Dentro de esta nueva lógica, un apoyo directo a nuevas fuerzas revolucionarias podía menoscabar las posiciones intersistémicas de consenso logradas con gran dificultad. Es revelador en este sentido el ejemplo de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular.

El triunfo de Salvador Allende revistió una gran importancia política e ideológica para la política soviética frente al Tercer Mundo. Por vez primera, un candidato de izquierda, que se trazaba como meta la construcción de una sociedad socialista, triunfó en elecciones libres. Esto constituyó una confirmación histórica de la coexistencia pacífica y de la justeza de la estrategia soviética para América Latina frente al “aventure-rismo guerrillero” que celosamente habían defendido los cubanos en los años inmediatamente anteriores. Si la revolución cubana despertó el interés de Moscú en América Latina, el triunfo de la Unidad Popular confirmó la atención soviética sobre el continente.

Esto, sin embargo, no significó un mayor involucramiento de la URSS en la región. Ni siquiera el Chile revolucionario fue objeto de atenciones particulares. Según datos norteamericanos, el total de la ayuda soviética al gobierno de Allende ascendió a la módica cifra de 183 millones de dólares. No existió ningún tipo de compromiso más allá del apoyo verbal al proceso chileno. En este sentido podemos decir que Chile representó el primer caso-tipo al cual la URSS dio asistencia sólo en la medida en que las fuerzas en el poder pudiesen ellos mismos viabilizar el cambio revolucionario. Es decir, constituyó el caso-límite al cual era capaz de llegar la URSS en su apoyo a los movimientos revolucionarios de América Latina. Es válida por lo tanto la aseveración de que en parte la derrota de Allende fue consecuencia de la *détente* (8); es decir, prevaleció la preservación de las relaciones con los Estados Unidos, que en esos momentos se encontraban en su mejor momento, a las necesidades revolucionarias del país sureño.

En tercer lugar, el desarrollo de las relaciones durante los sesenta permitió a los líderes soviéticos *descubrir* América Latina. El subcontinente y sobre todo los países más desarrollados del área podían ser potenciales mercados complementarios al de la URSS. América Latina podía convertirse fácilmente en un espacio de colocación de la producción soviética para la exportación, y en fuente de suministro de productos caros para la economía soviética.

En cuarto lugar, los años setenta fueron para América Latina un período en el cual se intensificó la inserción de estos países en la economía mundial. Varios de estos países pasaron a ocupar posiciones definidas dentro de la división internacional del trabajo. Las fuerzas que dentro de la Unión Soviética empujaban por una participación mayor de la URSS en la economía mundial percibieron que a través de las relaciones con los países más desarrollados de América Latina podían afianzarse las posiciones soviéticas en ese sentido. El mantenimiento de un desequilibrado comercio internacional, el otorgamiento de facilidades sobre todo a las naciones más desarrolladas del área sólo pueden ser entendidos si se analizan los problemas desde esta nueva óptica.

Esta nueva visualización de la dinámica mundial y del lugar ocupado por la Unión Soviética en las relaciones internacionales llevaría —con posterioridad— a algunos analistas soviéticos a argumentar de la siguiente manera:

“La pertenencia de la gran mayoría de los Estados latinoamericanos a la economía capitalista mundial —escribe V. Davidov— evidentemente, permanecerá. Sin embargo, en los aspectos económicos del desarrollo la interdependencia, la integración del nuevo mundo, introduce correctivos sustanciales. En el transcurso de la internacionalización de la vida económica la

región latinoamericana de una u otra forma se integra en un sistema económico planetario; precisamente en un sistema y no en un conjunto de economías nacionales. Esto significa que la realización de las tendencias inherentes a las relaciones económicas entre el centro y la periferia de la economía capitalista mundial no pueden producirse en su "aspecto puro". De una u otra forma, inevitablemente, es corregida por las tendencias generales. En uno u otro grado, bajo vínculos directos o indirectos en el desarrollo de la región se siente y se sentirá la influencia de todos los componentes del sistema económico planetario, incluido el socialista. Esto también genera impulsos alternativos de desarrollo. Correlativamente, en un plano mayor el problema de la dependencia económica de los países latinoamericanos sólo puede ser concebido dialécticamente, integrando tanto los factores que la fortalecen como los que la neutralizan" (9).

En esta nueva visualización de los problemas internacionales hay algunos aspectos que merecen ser comentados. Primero, para los partidarios de estas tesis la posición de la Unión Soviética ya no correspondería a una situación de exterioridad con respecto a la economía y política mundiales. Al contrario, recalcan y reiteran que existe una sola comunidad internacional de la cual la URSS también forma parte. Esto significa que la URSS puede hacer uso de los procedimientos de dicha economía (racionalización de las relaciones, mercado, "jibarización" de la planificación, introducción de los criterios occidentales de rentabilidad y eficiencia, etc.) y de la política mundial (Estado de Derecho, pluripartidismo, democracia política, etc.). Demás está decir que la aplicación de estos procedimientos alteran la naturaleza del sistema soviético y sus formas de interacción con los países extranjeros. Dicho en otras palabras, dicha corriente postula la utilización de posiciones interiorizadas en la dinámica mundial. La URSS debe comenzar a actuar en la arena internacional al igual que los restantes países, abandonando las posiciones que la hacían ser una potencia contestataria que quería fundar un nuevo orden.

Segundo, con postulados tales, se justifica el advenimiento del nuevo orden reformador gorbachovista. Este último en realidad no ha hecho más que llevar a la práctica esta visualización de los procesos internos en su país y de nuevos postulados de inserción de la URSS en la comunidad mundial.

Por último, se proponen relaciones con una calidad totalmente nueva con las naciones latinoamericanas, en las que la aplicación de los criterios económicos de corte netamente capitalistas llevan la delantera. Dentro de esta misma línea, para justificar el nuevo orden de cosas, se pretende señalar que la dinámica dialéctica que gobierna las relaciones internacionales sería un elemento que neutralizando los factores de dependencia facilitarían alcanzar nuevas formas de desarrollo.

Estos cambios en la percepción de la naturaleza de las relaciones se ubican en el trasfondo del cambio de actitud de los soviéticos en los años setenta. Bajo el impulso de la fracción sostenedora del proyecto de modernización descentralizada, la URSS promovió la densificación de los vínculos con las naciones latinoamericanas. Con una preocupación ya no tan política como económica, la URSS privilegió este ámbito para intensificar las relaciones con las naciones latinoamericanas y para alcanzar los objetivos buscados.

Como bien puede observarse en el cuadro N.º 2, durante el año de 1970, a excepción de Cuba, se mantuvo el mismo nivel de intercambio comercial que en 1960. En cambio, a medida que avanzaron los años setenta y sobre todo en la segunda mitad, el crecimiento del flujo comercial fue vertiginoso. En 10 años —de 1975 a 1985— el volumen comercial aumentó en casi un trescientos por ciento. El análisis coyuntural ha llevado a más de un analista a destacarlo como el flujo comercial más dinámico de la economía mundial (10). De otra parte, observamos una concentración del comercio con los países más avanzados del continente (Argentina, Brasil y México). Un tercer

aspecto de estas relaciones que habría que destacar es el saldo negativo en la balanza comercial soviética. Con sus exportaciones ha logrado sufragar un escaso porcentaje de las importaciones.

CUADRO N.º 2

EL COMERCIO EXTERIOR SOVIETICO CON LOS PAISES DE AMERICA LATINA

(Millones de rublos)

<i>País</i>	<i>1960</i>	<i>1970</i>	<i>1975</i>	<i>1980</i>	<i>1985</i>	<i>1988</i>
Argentina.....	32.1	29.9	304.4	1192.5	1292.9	570.4
Exportación ..	12.6	1.7	10.7	30.4	63.0	23.9
Importación..	19.5	28.2	293.7	1162.1	1229.9	546.5
Bolivia.....	—	3.1	12.6	25.5	—	—
Exportación ..	—	0	3.0	5.5	—	—
Importación..	—	3.1	9.6	20.0	—	—
Brasil.....	22.6	23.2	396.1	275.0	450.3	168.4
Exportación ..	14.2	2.4	93.3	22.1	70.3	17.0
Importación..	8.4	20.8	302.8	252.9	380.0	151.4
Colombia.....	0.2	10.9	9.0	21.1	26.4	11.1
Exportación ..	0	1.5	1.9	9.1	5.2	5.3
Importación..	0.2	9.4	7.1	12.0	21.2	5.8
Cuba.....	160.6	1045.0	2589.0	4266.0	8017.5	7561.5
Exportación ..	67.2	580.0	1141.3	2288.4	3877.4	3724.7
Importación..	93.4	465.0	1147.7	1977.6	4140.1	3836.8
México	3.7	1.0	6.1	13.8	20.3	90.8
Exportación ..	0.7	0.7	4.4	11.9	4.2	2.5
Importación..	3.0	0.3	1.7	1.9	16.1	88.3
Nicaragua	—	—	—	5.6	213.1	248.8
Exportación ..	—	—	—	0.1	212.9	246.6
Importación..	—	—	—	5.5	0.2	2.2
Panamá	—	0.1	2.6	15.1	7.1	20.7
Exportación ..	—	0.1	2.6	15.1	7.1	18.6
Importación..	—	—	—	—	—	2.1
Perú.....	—	0.3	118.5	13.3	119.8	21.2
Exportación ..	—	0.1	28.3	3.1	11.3	4.6
Importación..	—	0.2	90.2	10.2	108.5	16.6
Uruguay.....	2.4	1.8	15.0	23.8	65.9	54.6
Exportación ..	1.2	0.8	1.0	2.4	33.5	10.2
Importación..	1.2	1.0	14.0	21.4	32.4	44.4

Fuente: Vneshnaya Torgovliya, varios años.

Dos son, a nuestro modo de ver, las causas explicativas de esta situación: en primer

lugar, y ya lo señalábamos anteriormente, el interés soviético en mantener este tráfico, aun cuando le sea desfavorable a corto plazo, ha sido el resultado de una acción deliberada por parte de un sector de la dirigencia soviética. A través de este tráfico la URSS fortalece indirectamente su participación en la economía mundial.

En segundo lugar, de las diversas regiones que comprenden el Tercer Mundo, América Latina es precisamente la que mejor puede adaptarse a las necesidades de la URSS (ver cuadro N.º 3). Las particularidades de América Latina, el nivel y el tipo de desarrollo constituye un buen complemento para la URSS. Aquellas ramas de la economía en la que la URSS es más deficitaria, comparativamente, son las más desarrolladas de América Latina. Y al contrario, los rubros en los que los soviéticos han alcanzado mayores niveles de desarrollo constituyen ramas que inhiben el crecimiento económico en América Latina.

CUADRO N.º 3

COMPLEMENTARIEDAD ECONOMICA ENTRE LA URSS Y AMERICA LATINA

<i>Unión Soviética</i>	<i>América Latina</i>
— Elevado nivel de desarrollo de la industria pesada.	— Escaso desarrollo de la industria pesada.
— Insuficiente desarrollo de la industria ligera.	— Relativamente elevado desarrollo de la industria ligera.
— Desarrollo tradicional de la esfera de los servicios.	— Modernización de la esfera de los servicios.
— Lenta adaptación a los cambios tecnológicos.	— Rápida adaptación en el sector privado.
— La agricultura no satisface necesidades de la población.	— Alta exportación agrícola.
— Dificultades financieras que estimulan la compensación.	— Dificultades financieras que estimulan la compensación.
— Necesidad de diversificar importaciones y exportaciones.	— Necesidad de diversificar mercados.

Estas dos aseveraciones que acabamos de hacer han quedado demostradas a nivel político si observamos la experiencia de las relaciones con Argentina y Brasil. Tras el paréntesis en las relaciones soviético-argentinas durante el gobierno de María E. Martínez, los vínculos nuevamente alcanzaron una alta intensidad durante el régimen militar. Desde la segunda mitad de los años setenta las relaciones económicas y comerciales entraron en una época de bonanza. Aun cuando las prioridades del régimen militar argentino eran eliminar la subversión interna, aminorar la dependencia económica y ratificar el orden fronterizo —características inmanentes de un régimen militar de derecha; clásicamente el enemigo acérrimo de la URSS en América Latina— nada de esto hizo tropezar la buena disposición de las partes, y las relaciones económicas siguieron desarrollándose e incluso sirviendo de puente para arribar a contactos a nivel político y diplomático (11).

Un fenómeno similar se observa en las relaciones con Brasil. Hacia mediados de los años setenta, con la formulación del “pragmatismo responsable” del general Geisel, las posibilidades de elevar las relaciones se ampliaron. La visión soviética de las nuevas potencialidades que contenía Brasil para establecer relaciones duraderas con los soviéticos crecieron enormemente; sobre todo a raíz de las desaveniencias que se presentaron entre Brasil y los Estados Unidos. Los soviéticos se guiaron por la idea de que desde mediados de los años setenta Brasil había empezado a abandonar la orientación incondicional con los EE.UU. La valoración soviética de la política exterior brasileña dio

un gran salto: del carácter reaccionario mantenido en la primera década de dictadura militar a posiciones progresistas de la nueva tendencia (12).

O sea, a diferencia de Argentina, país que impulsó sus relaciones con la URSS durante un gobierno civil, en Brasil este proceso fue operado por el mismo aparato militar en el poder. En ninguno de los dos casos las consideraciones ideológicas por parte soviética entorpecieron la mayor interacción.

Ambos países representaban un gran capital dentro de los objetivos perseguidos que comentábamos más arriba, y eran un buen ejemplo para impulsar las relaciones con los otros países del continente, pues se ponía en evidencia que las desaveniencias ideológicas de los Estados no eran un escollo para densificar las relaciones. Pero, lo que en realidad ocurría, era que con América Latina hacía años ya que se habían abandonado las consideraciones ideológicas, que habían sido sustituidas por el pragmatismo económico.

Los únicos dos países latinoamericanos donde esta nueva “racionalidad” no era totalmente aplicable eran Nicaragua y Cuba. Observemos un poco más de cerca el primero de estos casos que nos permiten concretizar la particularidad de la política latinoamericana de la URSS durante estos años.

Mucho se ha insistido en que las relaciones de la Unión Soviética con la Nicaragua sandinista habrían sido relaciones especiales, diferentes a los vínculos existentes con los otros países de América Latina. Nuestra visión del problema nos permite señalar que las relaciones soviético-nicaragüenses se inscribieron perfectamente dentro de los marcos del *perfil* ofrecido al conjunto de países de la región, con la sola excepción de Cuba. Fue simplemente el caso-límite, al cual estaba dispuesto a llegar la URSS a finales de la década de los setenta. Si su participación fue mayor en los ochenta eso se debió a la demanda de ayuda por parte de los sandinistas y a las presiones norteamericanas —que derivó el problema nicaragüense en un asunto de crisis regional que obligó a la URSS a tomar posición—. Ahora bien, la URSS nunca dio regalía a Nicaragua como sí lo hiciera con Cuba; mantuvo un volumen comercial discreto, el monto de la ayuda fue relativamente pequeño 300 millones de rublos (13) y trató de no entremezclarse directamente en el problema.

El estado de las relaciones en la Era Gorbachov

Con el despuntar de los años ochenta la orientación soviética en relación a los países latinoamericanos empieza a ser objeto de profundas modificaciones. Las redefiniciones de las estrategias al interior de la URSS objetivizaron la dirección y la orientación de las transformaciones.

Ya desde la década de los setenta, pero de manera más acentuada en los ochenta, los centros soviéticos vinculados al diseño de la política internacional favorecieron una nueva percepción de las relaciones internacionales y del lugar de la URSS en las mismas. El advenimiento de los “reformadores” al poder en la URSS ha universalizado política y económicamente el proyecto de modernización descentralizadora con el llamado “nuevo pensamiento político”. Los puntos centrales de la nueva doctrina internacional soviética son los siguientes: la nueva definición de la coexistencia pacífica, la defensa de los intereses globales de la humanidad desconociendo la validez de la lucha de clases, el reconocimiento de la interdependencia y de las experiencias de desarrollo generadas por los países capitalistas centrales.

Coexistencia pacífica dejó de ser una fórmula ambigua que denotaba un nuevo estadio en la lucha de clases (lucha entre Estados) para pasar a significar la lucha por la búsqueda de mecanismos nuevos que garanticen la paz en el mundo, y la creación de las condiciones fundamentales que den una salida a los problemas globales de la humanidad. “Todos nosotros —escribió Gorbachov— nos enfrentamos a la necesidad de aprender a vivir en paz en este mundo, de elaborar una nueva modalidad de pensamiento ya que hoy día las condiciones son muy distintas de lo que eran hace 3 ó 4 décadas” (14).

En esta misma línea se sitúa la importancia asignada a encontrar solución a los problemas globales de la humanidad. El Ministro soviético de Asuntos Extranjeros expresó: "La coexistencia que se fundamenta en principios tales como la no agresión, el respeto de la soberanía e independencia nacional, la no intromisión en los asuntos internos, etc., no se debe identificar con la lucha de clases. La lucha entre los dos sistemas opuestos no representa la tendencia determinante de la época contemporánea" (15).

La interdependencia constituye el tercer núcleo de la nueva doctrina internacional de la URSS. Ella significa la colaboración en todos los planos de la vida social nacional e internacional, que conlleven al mundo hacia una interdependencia de tipo integral a través de la colaboración. Este concepto ha sido transplantado a la realidad soviética. Fue conceptualizado y difundido por el Banco Mundial para denotar la misma idea que los actuales dirigentes soviéticos.

Por último, como resultado de estas nuevas percepciones de las relaciones internacionales, del tipo y las motivaciones de los problemas y por la necesidad de estrechar la cooperación con todas las naciones se llegó rápidamente al convencimiento de que era menester encontrar una nueva fórmula para solucionar los agudos problemas de la sociedad soviética y del modelo socialista en cuestión. V. Medviédev, el encargado de la comisión ideológica del C.C. del PCUS, al respecto constató.

"... al elaborar la perspectiva socialista y al formular la concepción actual del socialismo es importante asumir la experiencia de la humanidad entera, incluida la parte no socialista del mundo... Se trata de la consideración no sólo de los alcances científico-técnicos del sistema opuesto, sino también de muchas formas de organización de la vida social, del proceso económico, incluida la gran y pequeña producción, las formas cooperativas y la integración económica internacional, etc. En realidad, debemos reflexionar seriamente sobre la práctica de la socialdemocracia contemporánea, de sus actividades concretas, tales como la defensa de las conquistas sociales y democráticas de los trabajadores" (16).

Gracias a estos presupuestos y a la aplicación de esta política, a Gorbachov le fue otorgado el premio Nobel de la Paz y fue declarado el hombre de la década por la prestigiosa revista *Time*, entre otros tantos galardones recibidos. Esto no es gratuito. El nuevo pensamiento político que cree estar formulando una nueva moral para acabar con los excesos y aberraciones en las relaciones internacionales, está verdaderamente revolucionando la percepción soviética del mundo exterior, está posibilitando el ascenso y consolidación política de los sectores partidarios de la modernización descentralizadora, y está reeditando el capitalismo en su país. La política internacional gorbachoviana arropada bajo un manto moralizante está simplemente declarando y realizando una política interior y exterior clasista —aun cuando reniegue de la lucha de clases a nivel del aparato conceptual utilizado.

El gorbachovismo en política exterior puede resumirse de manera bastante simple: si descontamos a los sectores partidarios de la modernización descentralizadora, la Unión Soviética tradujo en sus acciones una política de solidaridad clasista con todas aquellas fuerzas marginadas que veían su futuro a través de un cambio de sistema. En la actualidad, esas fuerzas han sido abandonadas y la nueva solidaridad es expresada con los sectores que obtienen beneficios de la modernización occidental; es decir, con las clases dominantes. Se buscan contactos y nuevas formas de entronización precisamente con estos sectores y se favorece —al interior de la URSS— la reedición de la misma pauta de desarrollo.

Este cambio tenía obligatoriamente que generar cambios sustanciales en las relaciones con las naciones latinoamericanas. Las orientaciones de esta nueva política tenían que traducirse en acciones y propuestas nuevas. Se propuso rápidamente *racio-*

nalizar las relaciones con los países “afines”. Bogomolov, uno de los más destacados especialistas soviéticos en América Latina, expresó esta nueva actitud soviética cuando declaró: “En su conjunto, la cooperación de Nicaragua con los países socialistas, sea ésta bilateral o multilateral (por la intermediación del CAME), debe poseer, yo creo, sus límites cuantitativos para cada período concreto, y en lugar de proponer a los nicaragüenses, durante años, el “alineamiento artificial”, por así decir, podría estimular la búsqueda de reservas económicas propias” (17). Es decir, a este nuevo y difícil aliado se le proponía una política en la cual las relaciones económicas debían ser racionalizadas dentro de la nueva lógica de la acumulación.

La aplicación de esta nueva estrategia de modernización económica ha redundado también en una racionalización de las relaciones económicas y comerciales con las naciones más desarrolladas del subcontinente. Si con anterioridad, se facilitaban las condiciones para generar el interés en comercializar con la Unión Soviética, en las nuevas coordenadas la URSS está presionando para equilibrar la balanza comercial manteniendo grandes compras solamente de artículos y productos imprescindibles para el funcionamiento de la economía interna. Además, ya está especializando las relaciones comerciales pues la URSS está interesada en realizar compras de productos con alto valor agregado, que resultan más ventajosos de ser obtenidos en el mercado latinoamericano. Es decir, a través de estos procedimientos se refuerza la imbrincación de la Unión Soviética en la economía capitalista mundial y en sus lógicas de desarrollo.

De otra parte, el nuevo curso seguido en relación a América Latina ha estipulado el reconocimiento del Estado como el único interlocutor válido. El Presidente del Presidium del Soviet Supremo de la RSFSR, con motivo de una visita a Brasil, precisó al respecto: “En la actualidad, se superaron algunos motivos que impedían ampliar los vínculos entre la Unión Soviética y los países latinoamericanos. Desaparecieron los regímenes militares... y nosotros superamos la estrechez de opiniones sobre los problemas latinoamericanos. La conclusión principal que puede extraerse de estas visitas consiste en que tenemos un interés mutuo en el desarrollo de la cooperación multifacética en la esfera política, *por línea estatal*, en la esfera de la economía, la ciencia, la cultura y en la solución de los problemas humanitarios y sociales” (18).

Cabría también agregar que dentro de esta nueva propuesta la Unión Soviética ha empezado a obviar el referente norteamericano en la elaboración de su estrategia. Los acuerdos entre las superpotencias, el clima de distensión, el “fin de la guerra fría”, han creado una atmósfera en la cual las acciones que realicen las superpotencias en las zonas geoestratégicamente importantes para la contraparte, siempre y cuando no alteren el equilibrio de poder, han dejado de suscitar reacciones de fuerza como fueron comunes en el pasado. En este sentido, la visita realizada por el canciller soviético Shevardnadze en 1987 a varios países latinoamericanos (México, Brasil, Argentina, Uruguay y Nicaragua), y a inicios de 1990 (nuevamente a Nicaragua) han sido posibilitadas por esta situación mundial. Es decir, de las relaciones de tipo triangular que existían con anterioridad, en las que las relaciones soviético-latinoamericanas encontraban sus límites en la conducta norteamericana, y en las que el referente norteamericano era obligado, en tanto que la relación bipolar mundial se realizaba como un *zero sum game*, actualmente se ha traspasado ese dintel para estructurarse relaciones directas entre la URSS y los países del subcontinente.

Además, una vez que se han disipado los escollos que impedían la multiplicación de los contactos políticos, la URSS ha encontrado —con su nuevo discurso— puntos de convergencia importantes con las naciones latinoamericanas. En este ámbito, la política brasileña de la URSS constituye el prototipo de una nueva relación. Es un modelo propuesto de relación para con los países latinoamericanos y también con las restantes naciones del Tercer Mundo. Las partes han creado un marco jurídico para la ampliación del desarrollo de los vínculos económicos y comerciales. De otra parte, durante la visita del presidente Sarney a Moscú, en octubre de 1988, se firmó una declaración, intitulada, “sobre los principios de la interrelación en nombre de la paz y la coopera-

ción internacional” que, como reza su artículo trece, las partes firmantes se esforzarán “para que su interacción en la arena internacional... sirva de ejemplo de una cooperación en igualdad de derechos entre Estados con sistemas socio-políticos diferentes” (19). El presidente Collor, antes de tomar posesión de su actual cargo, estuvo de visita en la URSS y ratificó la importancia de los acuerdos suscritos. Las actuales relaciones soviético brasileñas son las más intensas de América Latina y se caracterizan por conjugar de manera armónica las relaciones económico-comerciales y políticas. El interés soviético en Brasil es económico (es sin duda el país que mejor se complementa con las actuales necesidades de modernización económica en la URSS) y político, por la importancia que dicho país tiene en el concierto latinoamericano y a nivel del Tercer Mundo, en tanto que nueva potencia regional. La misma disposición se ha reeditado en las cumbres con los presidentes de Argentina (noviembre de 1990) y México (agosto de 1991) (20).

Por último, otro aspecto integrante de la actual política latinoamericana de la URSS radica en la importancia que se le ha asignado a las organizaciones socialdemócratas latinoamericanas como interlocutores, con los cuales existen grandes puntos de contacto en torno a las estrategias y orientaciones, tanto en referencia a los problemas de la región como de toda la humanidad. Además de la importancia que se le asignan a los líderes socialdemócratas en la valoración de los problemas continentales, algunos analistas soviéticos llegan incluso a plantear que una solución a los problemas de la izquierda “hay que buscarla en las vías de “socialdemocratización” del movimiento popular, entendido como... recuperación del potencial revolucionario y creador de la socialdemocracia, en cuanto fusión de corrientes socialistas, en el cual el marxismo desempeña (siempre que sepa granjearse y merecerlo) el papel de doctrina rectora” (21). Esta postura implica la creación de mecanismos integradores y reguladores de la política soviética con fuerzas participativas en el alto poder en los países latinoamericanos. Es decir, dentro de las fuerzas potencialmente dirigentes, los soviéticos, reiterando lo que ha sido su política europea, privilegian como interlocutor a la socialdemocracia —en detrimento total de los partidos comunistas—, pero sin desconocer a las otras fuerzas políticas rectoras de los países de la región.

Hace no mucho tiempo atrás, uno de los portavoces internacionales de Gorbachov, G. Arbatov, declaró: “Nosotros les estamos haciendo una cosa terrible. Les estamos privando de la imagen del enemigo”. Tal vez sea la frase célebre que mejor caracterice el tiempo presente. La URSS ya no es un enemigo, pues forma parte de pleno derecho de la comunidad internacional, y está articulando una política que se adapta plenamente a los deseos de Occidente. La nueva espiral en la intensificación de los contactos entre la URSS y los países extranjeros, incluidos los de América Latina, ha sido el resultado del abandono por parte de la URSS de su proyecto de desarrollo soviético, del arraigo de los principios de modernización occidental a través de la variante soviética descentralizadora, de la consolidación de las fuerzas sociales y políticas partidarias de dicho proyecto en el alto poder, y de la propensión soviética actual a visualizar los problemas mundiales con los ojos de un occidental.

NOTAS

(1) Arismendi R., *VIII Kongress Komintern i fashizm v Latinskoi Ameriki segodnia* (El VII Congreso del Komintern y el fascismo en América Latina hoy), Progreso, Moscú, 1977, p. 21.

(2) Véase Clissold S., editor, *Soviet relations with Latin America, 1918-1968, a documentary survey*, Oxford University Press, London, 1970, p. 172-174.

(3) Parkinson F., *Latin America, the Cold War and the World Powers, 1945-1973*, Sage, California, 1974, p. 55.

- (4) Véase Lavigne M., *Les relations Est-Sud dans l'économie mondiale*, Economica, París, 1985.
- (5) *Pravda*, 15 de diciembre de 1967.
- (6) *El Comercio Exterior de la URSS, 1922-1981, finansi i statistika*, Moscú, 1982 (en ruso), p. 22-23.
- (7) Véase Fazio H., "La Unión Soviética y el Tercer Mundo", *Historia Crítica*, N.º 3, enero-junio de 1990, Bogotá, p. 11-15.
- (8) Noguee J. L. and Sloan J. W., "Allende's Chile and the Soviet Union. A policy lesson for Latin American nations seeking autonomy", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, v. 21 N.º 3, VIII-1979, p. 363.
- (9) Davidov V. M., "Acerca de los imperativos del nuevo pensamiento en el estudio de la periferia latinoamericana del capitalismo mundial", en *Velikii Oktiabr i Latinskaya Amerika* (El Gran Octubre y América Latina), Instituto América Latina, Moscú, 1988 p. 74-75.
- (10) Vera Castillo Jorge, *Potencialidades y perspectivas del comercio internacional de servicios en el marco de las relaciones económicas entre los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica y los países de América Latina y el Caribe: un estudio preliminar y exploratorio*, agosto de 1987, CEPAL, Santiago de Chile.
- (11) Vacs A., "Nuevo carácter de las relaciones argentino-soviéticas", en, Varas, A., compilador, *América Latina y la Unión Soviética: una nueva relación*, Flacso/Rial, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1987, p. 121.
- (12) Las posiciones progresistas se definen por la insistencia brasileña sobre la necesidad de "la participación de los países en vías de desarrollo en la reestructuración del sistema internacional..., la instauración de condiciones más equitativas de comercio mundial para los países en desarrollo, la condenación de todas las formas de discriminación racial e incluso el preconizar la concesión de la independencia política a los pueblos en lucha por la liberación nacional y el aislamiento de los regímenes racistas" Viktorova I y Yakovlev N., "Nouvelles tendances de la politique étrangère du Brésil", *La Vie Internationale* N.º 299, enero 1990, Moscú, p. 70.
- (13) *Pravda*, 6 de octubre de 1989.
- (14) Gorbachev M., *Perestroika*, Ediciones Beta, Barcelona, 1987, p. 128.
- (15) *Pravda*, 26 de julio de 1988.
- (16) *Pravda*, 5 de octubre de 1988.
- (17) Bogomolov P., Nicaragua: chemin difficile de la révolution, *La Vie Internationale*, enero 1989, Moscú, p. 60.
- (18) *Pravda*, 19 de junio de 1989; la cursiva es nuestra.
- (19) *Pravda*, 20 de octubre de 1988.
- (20) *Izvestia*, 15 de agosto de 1991.
- (21) Koroliyov Y. N., mesa redonda, "La izquierda, Unidad y diversidad", *América Latina* N.º 6-1989, p. 46.